

**EL DISCURSO DE LOS DDHH COMO HERRAMIENTA PARA JUSTIFICAR EL
EMBARGO ECONÓMICO DE EEUU A CUBA, 1993 - 2001**

TATIANA QUINTERO SUÁREZ

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
BOGOTÁ D.C., 2015**

“El discurso de los DDHH como herramienta para justificar el embargo económico de
EEUU a Cuba, 1993 – 2001”

Monografía

Presentado como requisito para optar por el título de politóloga

Facultad de Ciencia Política y Gobierno

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:

Tatiana Quintero Suárez

Dirigido por:

Hernán Darío Ocampo

Semestre I, 2015

RESUMEN

El tema central de esta monografía, es el ejercicio de construcción discursiva en torno a los Derechos Humanos (DDHH) que tiene lugar en el periodo de 1993 – 2001 con ocasión de la aprobación de la Ley Helms-Burton en los EEUU. Se trata de considerar los elementos en virtud de los cuales los DDHH pueden instrumentalizarse y politizarse con fines de reivindicación que no necesariamente coinciden con la esencia misma que los caracteriza. Ello, empleando como base teórica la proposición metodológica del Análisis Crítico del Discurso y la hegemonía, como concepto de imposición moral, intelectual y política, de conformidad con la postulación teórica desarrollada por Antonio Gramsci.

Palabras Clave:

Análisis crítico del discurso, Derechos Humanos, Embargo económico, Hegemonía, Ley Helms-Burton, Cuba

ABSTRACT

The focus of this monograph is the exercise of discursive construction around Human Rights (HR) occurring in the period from 1993 - 2001 on the occasion of the adoption of the Helms-Burton Act in the US. It is about considered the elements under which HR can be instrumentalized and politicized purposes claim that they can not match the essence that characterizes them. To do this, it is considered as a theoretical basis for methodological proposition of Critical Discourse Analysis; and hegemony, as a concept of moral, intellectual and political imposition, in accordance with the theoretical application developed by Antonio Gramsci.

Keywords:

Critical discourse analysis, Human Rights, Economic embargo, Hegemony, Helms-Burton Act, Cuba

AGRADECIMIENTOS

Esta es solo una pequeña forma de dar infinitas gracias a mi mamá y mi papá por su apoyo, su paciencia, sus enseñanzas y su amor. A mi hermano por su genuino y aceptable desconocimiento sobre el contenido de este trabajo. A ellas y ellos, los incondicionales, los de siempre...

Pero sobre todo, a Hernán por su confianza, su compromiso y su respaldo en esta carrera contra el tiempo.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	8
1. DESCRIPCIÓN TEÓRICA: EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO EN LA LÓGICA DE LOS DDHH Y LA HEGEMONÍA	12
1.1. Surgimiento y evolución de los Derechos Humanos: Base discursiva	12
1.2. Hegemonía: Teoría de análisis	15
1.3. Análisis Crítico del Discurso: Descripción teórica	19
2. CONTEXTO Y DESARROLLO HISTÓRICO DEL EMBARGO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS A CUBA	22
2.1. Contexto de Surgimiento e implementación del <i>Embargo Económico</i> .	22
2.2. Curso del Embargo Económico de EEUU a Cuba en el periodo presidencial de Bill Clinton (1993 – 2001)	26
2.3. Cambio discursivo: DDHH como elemento justificante del Embargo Económico.	30
3. ANÁLISIS DISCURSIVO Y USO ALTERNATIVO DEL DISCURSO	35
3.1. Construcción metodológica y aplicación	35
3.2. Uso discursivo de los DDHH en el marco del <i>Embargo Económico</i> .	41
3.3. ¿Uso alternativo del discurso de los DDHH, en el marco del <i>Embargo Económico</i> de EEUU a Cuba?	49
4. CONCLUSIONES	51
BIBLIOGRAFÍA	54

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1. Tabla. Actor y Contexto del Discurso
- Anexo 2. Tabla. Análisis Crítico del Discursivo
- Anexo 3. Tabla. Palabras Clave
- Anexo 4. Documento. Ley 80 de 1996: De la reafirmación y de la dignidad y la soberanía cubana.
- Anexo 5. Documento. Helms-Burton Act, 1996

INTRODUCCIÓN

El embargo económico de EEUU a Cuba encuentra su antecedente en 1961, cuando el presidente John F. Kennedy por medio de la Proclamación Presidencial 3447 formaliza la ruptura de las relaciones diplomáticas y el bloqueo en términos económicos y comerciales contra la Isla. Esto tuvo lugar con ocasión de la polarización mundial en el marco de la guerra fría. La razón expuesta en dicha época era el deber de los EEUU para preservar la seguridad tanto en su territorio como en todo el hemisferio. Sin embargo, tras la caída del bloque soviético la medida sancionatoria persistió respaldada por una construcción discursiva que apela a los Derechos Humanos (DDHH) y a la vez incide en los asuntos internos de Cuba. La manifestación fehaciente de esta situación es la aprobación de la Ley Helms-Burton (1996), por medio de la cual la sanción escala en el escenario legislativo de los EEUU.

Se infiere que en el bloqueo contra Cuba operó un cambio de discurso en términos de legitimación, conservación y persistencia de la sanción. Esta situación impulsa la presente investigación, que busca analizar la forma en la que los DDHH pudieron ser instrumentalizados por un elemento de politización durante los dos periodos de gobierno de Bill Clinton.

Se seleccionó la tipología de monografía ya que permite construir un análisis cualitativo de una problemática puntual, a la luz de una teoría que, para este caso, es el Análisis Crítico del Discurso (ACD). Se acude a ella dadas las posibilidades que brinda para evidenciar los aspectos discursivos acerca de disparidades, desigualdades sociales y mecanismos impositivos por medio de símbolos y contenidos en una dimensión semántica.

Para abordar el tema se plantea la siguiente hipótesis: los DDHH han sido instrumentalizados por EEUU, en el marco del embargo económico a Cuba, en la medida en que el discurso implementado para justificar la sanción excluye la importancia del principio de integralidad de dichos derechos y adicionalmente se emplea como mecanismo de legitimación para una intensión de incidencia en el régimen político cubano. Con base en esta proposición se inicia el proceso de investigación en el que se toman como referentes

teóricos los postulados conceptuales que ofrece el análisis del discurso en su dimensión general y, particularmente, el ACD como una vertiente del primero. Además, se retoma la idea de hegemonía de Gramsci a fin de encontrar un vínculo tanto conceptual como práctico entre el rol de los DDHH y las dimensiones impositivas que desde lo político pueden integrarse en emisiones discursivas, entendidas no solo como mera comunicación verbal o escrita, sino como construcciones contextuales en las que inciden elementos históricos, ideológicos, políticos, entre otros.

El tema resulta relevante en el campo de la Ciencia Política ya que en la problemática del bloqueo económico intervienen elementos que van desde las relaciones interestatales, hasta los diferentes métodos de justificación que se proponen para mantener una medida sancionatoria tan severa como la codificada en la ley Helms-Burton; situación que desde lo político deriva en una complejidad susceptible de investigación.

Resulta interesante desarrollar un análisis del discurso, que aunque limitado temporalmente permitiría un ejercicio no sólo de evaluación de la dinámica hegemónica que trae implícito el discurso de los DDHH por parte de EEUU, sino también desplegar un examen sobre las posibilidades para que el mismo discurso opere como mecanismo de respuesta. La finalidad es entablar una base sólida que facilite la valoración de las dinámicas nacionales más allá de los parámetros que desde la política norteamericana se promueven.

La razón para seleccionar la temporalidad de la investigación se debe a que entre 1993 y 2001 la gobernabilidad de EEUU aparentemente sufre una transformación por la llegada de un demócrata (Bill Clinton) al poder, tras el mandato de dos figuras representativas para el republicanismo, Ronald Reagan y George W. Bush. Además, es interesante valorar las relaciones en este marco temporal, dado que en él es expedida la ley Helms-Burton, instrumento jurídico que materializa la medida restrictiva y la eleva a un rango mayor de importancia.

En este punto es preciso señalar los cambios que desde el inicio del proceso de investigación se han presentado tanto en la problemática como en el manejo de la misma. Aunque la sanción desde su formalización era evaluada anualmente en el marco de las NU, el embargo no había sufrido ningún cambio representativo en términos de aplicabilidad. La

política norteamericana respecto a las relaciones con Cuba se consolida e incluso radicaliza, independientemente de la tendencia política gobernante, hasta la llegada del presidente Barack Obama. Con él todas las perspectivas se modifican y se logra levantar la sanción, bajo el postulado de los pocos réditos que en términos de transformación política ha surtido la Isla. Se parte del reconocimiento de que la sanción genera serios problemas al interior del Estado centroamericano y, en consecuencia, es fundamental repensar los términos de la relaciones entre ambos Estados. El motivo puede atender a dos razones, por un lado las transformaciones paulatinas que han tenido lugar en el régimen tras la llegada al poder de Raúl Castro y las latentes presiones internacionales a los EEUU por la persistencia de la medida.

Este cambio incide en el análisis ya que lo que podría haberse presentado en este trabajo como una propuesta para terminar con la sanción desde el uso alternativo del discurso de los DDHH no se concretará, ello por que la reflexión debe girar en torno a cómo se conciliarán, en este nuevo escenario, las diferentes perspectivas de gobierno de cada una de las naciones involucradas. Es claro que el régimen cubano no sufrirá un tránsito abrupto hacia la democracia liberal, pero a la vez los EEUU tampoco reducirán su carácter de potencia en la reivindicación de los valores propios de esta visión de gobierno. En definitiva, este trabajo se circunscribe en la dimensión, que hoy se consolida como histórica, de una problemática que en términos políticos debe ser considerada desde la perspectiva de los efectos que podrá tener ya no por su vigencia, sino por sus implicaciones.

Para desarrollar estos elementos, el texto se estructura de la siguiente manera. En primera medida se postula el desarrollo de la base teórica y metodológica que dirige la investigación. Se tratan de manera puntual y diferenciada los tres elementos conceptuales que se emplean como base de desarrollo del trabajo: los DDHH como concepto jurídico pero a la vez como construcción discursiva; los planteamientos del ACD; y finalmente, el tema de la hegemonía como postulado teórico que conecta cada uno de los elementos considerados en este apartado.

En segunda instancia, se reconstruye la dimensión histórica del embargo, considerando que para el ACD resulta fundamental contar con la contextualización de las

reproducciones discursivas. En el inicio se toca el tema del surgimiento de la sanción y de su evolución, pasando por algunos periodos presidenciales relevantes en los EEUU. Posteriormente se enfatiza en el contexto que circunscribe el periodo seleccionado para la investigación y, con base en ello, se menciona la transformación, en términos discursivos, que sufre el bloqueo económico.

El tercer y último apartado ofrece la aplicación de la metodología por medio del análisis de cuatro discursos emitidos entre 1993 y 2001: Discurso inaugural del presidente Bill Clinton (1993), Declaración por la firma de la Ley Helms-Burton o Ley Libertad (1996), Observaciones en el marco de la convención demócrata (1996) y Documento: Apoyo a la Transición Democrática en Cuba (1997). Estos textos fueron seleccionados de acuerdo a tres criterios, la temporalidad en la que fueron emitidos, la relevancia tanto contextual como específica que ostentan para la evaluación del tema, y finalmente el emisor de los mismos. El objetivo es describir de manera diferenciada la relación de las emisiones con los DDHH y a su vez, la relación con un ejercicio hegemónico de actuación, en la que se revela como aquellos operan como herramienta impositiva desde la dimensión gramsciana. Finalmente se presentan algunas conclusiones.

1. DESCRIPCIÓN TEÓRICA: EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO EN LA LÓGICA DE LOS DDHH Y LA HEGEMONÍA

1.1 Surgimiento y evolución de los Derechos Humanos: base discursiva

Como punto inicial de este trabajo es fundamental desarrollar una breve conceptualización acerca de los DDHH, en la medida en que estos serán parte de la base de análisis discursivo que se desarrollará en el caso del embargo económico de EEUU a Cuba. Ellos corresponden a un producto histórico que se nutre de forma dinámica por diferentes coyunturas. Se trata de un concepto construido en torno a diversos elementos que logran encuadrarse en una especie de clasificación.

Se trata del establecimiento de tres generaciones de derechos que no adquieren la naturaleza de categorización jerárquica, sino que, por el contrario, limitan su papel en el área de la organización, conceptualización y clarificación del conglomerado de factores que se recogen dentro del concepto de DDHH. Las tres generaciones corresponden a, en primer lugar, los derechos civiles y políticos. Estos, por lo general categorizados en las legislaciones nacionales como derechos fundamentales; en segunda instancia, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC); y finalmente, los derechos colectivos o de solidaridad.

Los primeros surgen como resultado de la revolución francesa y la reivindicación de los ideales liberales relativos a las garantías del individuo en la órbita personal pero también política, estos “suponen en lo esencial un deber de abstención del Estado” (Nuñez Palacios 1998, pág. 107), es decir, que apelan por el respeto de la dimensión personal y autónoma del sujeto. Se trata de una serie de derechos que, aunque definidos de manera diferenciada de acuerdo a cada legislación, se comprometen con prerrogativas individuales del ser humano y con su dimensión política como actor social.

El reconocimiento de los segundos, los DESC, resulta de la revolución industrial y trae consigo la obligación de un quehacer estatal respecto a los servicios, prestaciones y medios necesarios para una subsistencia digna, tanto de los individuos como de los colectivos. Se trata de todos aquellos derechos prestacionales que desde la perspectiva de

integralidad se vuelven fundamentales para el desarrollo digno de la persona, considerando los estándares mínimos en las condiciones socio-económicas que precisan. Sin la protección de estos, resulta irrisorio pensar en la protección de los primeros; y es aquí donde comienza a cobrar notoriedad el principio de integralidad de los DDHH (Nuñez Palacios 1998). Esto posiciona la idea de que tal esquematización “se acepta para marcar los diferentes momentos en que se reconocen cada uno de los derechos, pero unos y otros son fundamentales para preservar la dignidad humana” (Nuñez Palacios 1998, pág. 107).

Los últimos, los derechos colectivos o de los pueblos, constituyen una conquista relativamente reciente que, aunque no ha encontrado un desarrollo legal extenso, representan un factor significativo para el crecimiento comunitario.

Es indispensable profundizar en el principio de integralidad, que reconocido por el derecho internacional, apela a la lógica de “una realidad que se percibe como una unidad ontológica y funcional” (Hernández 2008, pág. 32). La materialización de este postulado responde a un argumento histórico que invoca la progresiva ampliación de los derechos no de manera aislada, sino en virtud de la reivindicación de la dignidad humana. Esta es la razón que motivó el reconocimiento jurídico de dicho principio. La Declaración Universal de los DDHH (1948), reconocida por la ONU, consagra que es necesario comprender los DDHH desde la indivisibilidad e interdependencia, a fin de situarlos en el mismo nivel de relevancia y reconocimiento¹. (Hernández 2008)

Gran parte del factor teórico en el que se recogen los DDHH corresponde a la naturaleza prioritaria de comprenderlos no como derechos taxativos sino como herramientas que en conjunto propenden por la promoción de mínimos, sin exclusión. Así, se parte de que no es posible satisfacer a plenitud la protección de los individuos y las colectividades garantizando series de derechos que no atienden de manera conjunta y armónica a las categorías que se acaban de presentar.

¹ Consultar: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2005). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, Anexo 3. Breve introducción a la terminología de la normativa internacional de derechos humanos. *Extracto de:* Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, ps. 2 a 5

A pesar de lo anterior, el elemento discursivo resulta ser uno de los puntos de inflexión más relevantes a la hora de abordar el tema. Se trata de un modelo único que propone, pero simultáneamente impone, pautas de comportamiento para garantizar mínimos de bienestar. Sin embargo, este elemento no se reduce a esta posibilidad. Por medio de un manejo específico, en términos de discurso, es posible la instrumentalización de los DDHH para promover y legitimar elementos políticos e ideológicos. Es una construcción social e histórica en la que, partiendo de la prioridad del sujeto, se disputa la posesión de significados como la libertad, la democracia e incluso la justicia social (Estévez López 2010).

En términos de Enrique Rodríguez Trujano, el análisis de los DDHH como discurso resulta problemático por diversos factores, entre ellos la dimensión valorativa que involucra; lo que puede generar una interpretación ambigua y una aplicación sesgada de su contenido.

[...]hay también otros elementos que dificultan el análisis de los derechos humanos, como su inseparable carga valorativa, el compromiso heredado con las doctrinas filosóficas de la modernidad, la mezcla de distintas condiciones metodológicas para su explicación, la perspectiva de validez universal que plantean, así como su concreta expresión en los diferentes marcos de derecho positivo. (Rodríguez Trujano 2005, pág. 1)

Esta posición genera una suerte de consecuencias que, desde una lectura crítica del discurso de los DDHH, se traduce en la carga moral y jurídica que en torno a ellos se ha construido y que puede dar lugar a formas de exclusión respaldadas por la exaltación de algún tipo de concepto particular que cale en las formas propias de estos principios. Un ejemplo de ello es “la guerra contra Estados ‘proscritos’ que carecen de una forma democrática de gobierno o la segregación de culturas y costumbres ‘aberrantes’ con base en un paradigma de vida universal y unívoco” (Rodríguez Trujano 2005, pág. 2).

Sin embargo, es posible una valoración de los DDHH como un mecanismo discursivo tanto de sujetos empoderados como desempoderados. “Los DDHH pueden utilizarse dentro de los sistemas políticos en contra de la dominación de estructuras, instituciones y prácticas tradicionales. O contra poderes externos que verbalmente aseguran reconocerlos pero que en realidad no lo hacen” (Estévez López 2010).

Surge un potencial emancipatorio por medio de los contenidos promovidos por los derechos que puede materializarse en la implementación de herramientas discursivas. Las posibilidades de consolidación de dicho potencial, parten de la esencia misma de los DDHH, que consiste en su reivindicación lingüística y política (Estévez López 2010). Se trata de encontrar la interpretación que facilite el empoderamiento de quienes son juzgados desde una órbita parcial de lo que proponen dichas prebendas, de acuerdo a los conceptos universalizados e imperantes de igualdad, libertad y democracia. (Rodríguez Trujano 2005, pág. 2)

Ello sitúa el caso cubano como uno de los más representativos en lo que atiende a la instrumentalización discursiva de los DDHH. Su relevancia no atiende exclusivamente al hecho de ser un referente en términos de vulneración de derechos, sino también a las implicaciones que para los EEUU involucra su apuesta de gobierno y el desconocimiento de los principios liberales tanto democráticos como económicos. Pareciera que el choque más evidente estuviera circunscrito no a los índices de vulneración de derechos, sino más bien a “la necesidad de poseer Cuba”, como una de las prioridades más antiguas de la política exterior estadounidense (Chomsky 2002, pág. 109).

1.2 Hegemonía: Teoría de análisis

En este punto de la investigación el propósito es señalar los elementos teóricos que brindan un soporte y una base conceptual de análisis. Razón por la cual era indispensable presentar en que consisten los DDHH y cómo su dimensión discursiva puede ser instrumentalizada con diferentes propósitos. Con base en esto, acudiremos a la teoría de la hegemonía propuesta por Gramsci, para plantear una relación causal que indique si es efectivamente posible que esta idea se materialice por medio de la construcción discursiva que apela a los DDHH. El motivo para acudir a ella es que la problemática que aborda la presente monografía gira en torno al ACD, que involucra una esfera crítica de estudio a favor de los sujetos a los que se les impone una carga por medio de dicha herramienta lingüística. Así, es pertinente pensar que la hegemonía puede representar teóricamente los intereses

sobrepuestos en el discurso que se construye en torno a los DDHH en el caso objeto de estudio.

La teoría de la hegemonía constituye un elemento determinante cuando se piensa en temas de análisis político, por cuanto el concepto puede entenderse como “articulación contingente de elementos en torno a luchas de los agentes sociales concretos” (Giacaglia 2002, pág. 153). La descripción de esta teoría permite precisar de qué manera el discurso, respaldado por el elemento ideológico como fundamento, constituye una herramienta para imponer un modelo, interés o prioridad sin que se consolide un ejercicio físico de violencia. Esta construcción discursiva es un mecanismo de articulación de relaciones sociales que se concreta no por coerción sino por una aparente convicción. (Giacaglia 2002) Por este motivo se acude a Gramsci como exponente, atendiendo a la transformación que su trabajo teórico aporta al concepto.

Es necesario desarrollar una contextualización y una descripción general de lo que constituye la idea de lo hegemónico y cómo la teorización en torno a ello ha sufrido modificaciones. Para cumplir con dicho objetivo es apropiado acudir a Laclau y Mouffe, quienes construyen la estructura de evolución conceptual que ocupa este acápite del texto.

El origen del concepto se remite a la socialdemocracia rusa, momento en el que se pensaba podría presentarse como una “intervención contingente” destinada a atender una suerte de efectos políticos derivados de una alteración a lo que ellos denominan un “desarrollo histórico ‘normal’” (Laclau y Mouffe 2004, pág. 31).

Más adelante, con el leninismo el término adquiere una naturaleza esencial en el cálculo político que considera la lucha de clases en el marco del imperialismo; se trata de evaluar el concepto como “*dirección política* en el seno de una *alianza de clases*” (Laclau y Mouffe 2004, pág. 86). En este contexto llega la proposición gramsciana a situar la hegemonía como el elemento de comprensión de la unidad característica de una formación social concreta. (Laclau y Mouffe 2004, pág. 31)

Se pasa de la fundamentalidad del carácter político de la hegemonía con Lenin, a una extensión global de los conceptos que se incorporan a la teoría. Antonio Gramsci lo aborda desde una perspectiva mucho más amplia que valora tanto la dimensión política como la moral e intelectual. (Gramsci 2001)

De esta definición se desprende el estudio de dos aspectos. El primero de ellos, el político, se refiere a la capacidad que tiene una clase dominante de articular con sus intereses los de otros grupos, adquiriendo así la calidad de elemento rector de la voluntad colectiva. El segundo, la nueva dimensión del concepto, es la dirección intelectual y moral que supone una serie de condiciones ideológicas que deben ser cumplidas para que sea posible la construcción de la voluntad colectiva ya mencionada. (Giacaglia 2002, pág. 153)

La visión estratégica de Gramsci se funda en la “comprensión de la complejidad de las civilizaciones industriales avanzadas y de la densidad que adquieren en ellas las relaciones sociales y políticas” (Laclau y Mouffe, 2004, pág. 99). Esto se traduce en que la relevancia de sus aportes se dimensionan no circunscribiéndose a contextos históricos o geográficos, sino que por el contrario aporta sustancialmente, en el marco de la teoría general del marxismo, al análisis de diversas situaciones o circunstancias de relacionamiento. (Laclau y Mouffe 2004, pág. 100)

Es decir, que el aporte de Gramsci al desarrollo del concepto no se limita a unas condiciones concretas ni tampoco a la ‘alianza de clases’, sino que trasciende a un nivel en el que cobra gran importancia la ideología y, en este punto, entra a operar de manera notoria el elemento discursivo como herramienta. En términos de Laclau y Mouffe:

[...]si un liderazgo político puede establecerse sobre la base de una conciencia coyuntural de intereses que mantenga separada la identidad de los sectores intervinientes, un liderazgo intelectual y moral supone que hay un conjunto de ‘ideas’ o ‘valores’ que son compartidos por varios sectores. Un liderazgo intelectual y moral constituye para Gramsci una síntesis más alta, una ‘voluntad colectiva’ que, a través de la ideología, pasa a ser el cemento orgánico unificador de un ‘bloque histórico’. [...]Una serie nueva de relaciones entre los grupos, que escapan a su ubicación estructural en el esquema evolutivo y racional economicista, es definida conceptualmente, a la vez que se señala en terreno preciso de su construcción, que es la ideología. (Laclau y Mouffe 2004, pág. 101)

La proposición teórica que brinda Gramsci al tema de la hegemonía trasciende de tal manera que es posible centralizar su relevancia en la ideología como elemento estructurante de identidades y voluntades colectivas complejas, que se imponen por medio de factores dependientes de la órbita intelectual y moral de los sujetos. Esto, por supuesto, no lo desprovee del factor político que continua jugando un papel protagónico, pero sí extiende su alcance a una dimensión más amplia, global y aplicable a casos como el que ocupa este

texto. La hegemonía desde la perspectiva de Gramsci supone el carácter incompleto y abierto de lo social, que termina materializándose en el plano discursivo donde se sitúan actores en los que necesariamente opera una fuerza antagónica.

Es evidente cómo esta transformación teórica da cuenta de la complejidad de las dinámicas de interacción que deben analizarse en esta perspectiva. Ya no se trata de imposiciones descritas desde el criterio de la fuerza, sino más bien de una subordinación pasiva que cala en lo más profundo de los sujetos por medio de la ideología. Esta última pensada desde una postura amplia que trasciende la dimensión de lucha de clases hacia la construcción de voluntad colectiva. (Giacaglia 2002)

El vínculo entre hegemonía e ideología resulta fundamental dado que esta última opera como uno de los elementos que pretende reivindicar un ejercicio de dirección dominante. Para comprender este señalamiento es necesario precisar el alcance conceptual del término ideología en esta monografía, es la representación social que define la identidad de un grupo, es decir, sus creencias compartidas y valores culturales, acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción. Estas, por supuesto deben guardar una línea argumentativa coherente y con cierta permanencia, pero en ningún caso inmutabilidad. (Van Dijk 2005)

La anterior definición concuerda con la lógica de Antonio Gramsci, quien afirma que la ideología no corresponde a un sistema de ideas o a una conciencia individual, sino que, por el contrario, es “un todo orgánico y relacional, encarnado en aparatos e instituciones, que suelda en torno a ciertos principios [...]básicos la unidad de un bloque histórico” (Laclau y Mouffe 2004, pág. 101). En otras palabras, se trata de una estructura que termina reproduciéndose por medio de la voluntad colectiva, lo que estaría representado por Van Dijk en la identidad social. Dicha estructura es la que guarda el contenido de esa dirección intelectual y moral que será objeto de imposición.

La transformación del concepto responde al ejercicio político, intelectual y moral a través de instituciones culturales que conducen a las masas o a los intereses menos dominantes, por medio de una ideología que cala en la mentalidad del sujeto, legitimando los intereses impuestos en la voluntad colectiva. Esto facilita la construcción identitaria de

conformidad con la fuerza hegemónica, factor que podría justificar la aceptación y asimilación de una estructura o composición discursiva.

A pesar de esto, es posible pensar en un acto de doble vía para dar lugar a la construcción de un ejercicio de reacción y alternatividad, en donde los DDHH podrían desempeñar un rol fundamental. Partiendo de ello Boaventura de Sousa Santos desarrolla una propuesta que desde el concepto de hegemonía propone una transformación asentada en la misma vía adoptada para reproducir factores de imposición. Se trata del *hecho contra-hegemónico* como cambio en la dirección política dominante. Así, sujetos en situación de desigualdad y subordinación, podrán empoderarse por medio de las mismas herramientas discursivas que el discurso dominante emplea, para manifestar no sólo disconformidad sino también propuestas que faciliten la comunicación sobre la base de la tolerancia y el respeto. (De Sousa Santos 2002)

Es factible que intereses menos preponderantes sean reivindicados en igualdad de condiciones con los dominantes, por medio de la utilización de herramientas similares. Es decir, la reproducción ideológica mediante el discurso según el cual ya no será únicamente compartido el interés del más fuerte, sino de aquel que espera reivindicar su condición. Esto siempre que no se trata de una imposición física, sino que intenta la universalización de un contenido particular por medio de un proceso que eventualmente representaría las características de la totalidad de las particularidades (Giacaglia, 2002).

1.3 Análisis Crítico del Discurso: Descripción teórica

El fundamento teórico y metodológico de este trabajo, es el denominado Análisis Crítico del Discurso (ACD), que plantea la posibilidad de realizar lecturas contextualizadas de mensajes producidos y reproducidos con propósito de imposición. Este hecho vincula sustancialmente los conceptos de hegemonía y DDHH previamente desarrollados: los DDHH como legitimadores de un ejercicio hegemónico que emplea contenidos que facilitan la aprehensión e identificación de grupos sociales con el propósito de consolidar las dimensiones de dirección que propone Gramsci. Para profundizar en lo anterior, a continuación se presenta una descripción del contenido del análisis del discurso en su

dimensión general y cómo dentro del mismo se construyen diversos mecanismos conceptuales en los que se inscribe el ACD.

El análisis del discurso permite, por medio de una interpretación extensiva, desarrollar un ejercicio no sólo de evaluación de la dinámica hegemónica que trae implícito el discurso de los DDHH en el caso del embargo económico de EEUU a Cuba, sino también desplegar una propuesta para que opere como mecanismo contra-hegemónico. Se pretende entablar una base sólida de valoración para Cuba más allá de los parámetros clásicos propuestos por la democracia estadounidense.

En este plano se adopta el concepto de *discurso* como una herramienta de ejercicio de poder, por medio de la siguiente definición: “concepto de habla que se encontrará institucionalmente consolidado en la medida en que determine y consolide la acción” (Ruth Wodak 2003, pág. 63). Dicho en otros términos, se trata de expresiones lingüísticas y semánticas que, en contextos comunitarios, adquieren carácter social y en consecuencia resultarían apropiadas para considerar los mecanismos de interacción interestatal (Van Dijk 1995, pág. 59).

En lo que respecta específicamente al ACD, es necesario establecer que “no posee un marco teórico unitario, ya que dentro de los objetivos que incluye evolucionan muchos tipos de ACD, que pueden ser teórica y analíticamente bastante diversos” (Van Dijk 1999, pág. 25). Sin embargo, es posible desde la perspectiva común que los caracteriza, encontrar marcos conjuntos que en términos teóricos y conceptuales los relacionan estrechamente. “La mayor parte de los tipos de ACD plantearán cuestiones sobre el modo en el que se despliegan estructuras específicas de discurso en la reproducción del dominio social” (Van Dijk 1999, pág. 25). Así, el vocablo propicio para desarrollar la investigación queda definido por las nociones de *poder*, *dominio*, *hegemonía*, *ideología*, *clase*, *género*, *discriminación*, *intereses*, *reproducción*, *instituciones*, *estructura social*, *orden social*, entre otros. (Van Dijk 1999)

El ACD, consitituye “un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político” (Van Dijk 1999, pág. 23). Éste ofrece la posibilidad de tomar

partido y puede contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Entendido como ejercicio, intenta dotar de poder a quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de justicia e igualdad.

Con el fin de resaltar la importancia de esta herramienta en la investigación dentro de las ciencias sociales es preciso dejar por sentado que los elementos políticos y de imposición, que son transversales en el tema investigado, se relacionan con la noción central del trabajo crítico sobre el discurso, la de *poder*. Específicamente el poder social de grupos o instituciones, entendido en términos de control. (Dijk 1999) “Esta habilidad presupone un poder básico consistente en el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento, la información, la cultura, o incluso varias formas del discurso público y de la comunicación” (Dijk 1999, pág. 5).

Esto se explica dado que el poder en la dimensión social y estatal es determinante en lo que atiende a la elaboración discursiva. En el caso en que un Estado se posicione como productor y emisor, su potencialidad facilita el asentamiento de la ideología que manifiesta y en consecuencia la dirección hegemónica que define Gramsci se reafirma en la órbita sociológica enmarcada por relaciones de poder.

2. CONTEXTO Y DESARROLLO HISTÓRICO DEL EMBARGO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS A CUBA

2.1. Contexto de surgimiento e implementación del Embargo Económico.

Para iniciar es necesario desarrollar una breve ilustración acerca de la significación de la sanción y el contexto en el cual tiene lugar su implementación. El bloqueo, o también denominado embargo económico, fue definido por la ley norteamericana como una medida impuesta en contra de Cuba, con el fin de restringir el comercio, la realización de transacciones con dicho Estado, el transporte de pasajeros y en general la compraventa de propiedades en las que Cuba o sus nacionales tengan interés. (Ley Helms-Burton, 1996)

Las primeras acciones de implementación tienen lugar sólo unos meses después del triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959. Este momento marcó la llegada de Fidel Castro al poder, y con ello el inicio de un proceso en el que se ponen en marcha acciones en defensa de los intereses populares y nacionales de la Isla.

En este marco, y con el fin de exponer las generalidades de la medida, es pertinente señalar ciertos periodos presidenciales que en EEUU marcaron algún tipo de pauta en lo que respecta a la política exterior frente a Cuba y en consecuencia la implementación del embargo. Se presentan, de manera genérica, los hitos históricos en los que la sanción adquirió una naturaleza de posicionamiento en la política interna norteamericana y el impacto que generó en el manejo discursivo de las relaciones con la Isla.

Dwight D. Eisenhower (1953 - 1959 - 1961), es el primer presidente de los Estados Unidos que se enfrenta al cambio de régimen político propuesto por la revolución del 59 en Cuba. En su último año de mandato proclamó la ruptura de las relaciones diplomáticas de los EEUU con el gobierno cubano (Comunicado de Prensa No. 2491/1961, Departamento de Estado), aduciendo negativas en contra de la instauración de un nuevo régimen político, económico y jurídico, en un Estado que históricamente figura como escenario estratégico para los intereses norteamericanos (Dallanegra Pedraza 1999).

Lo anterior revela un desacuerdo en términos políticos en cuanto al modelo de Estado, de mandato y de política interna que se hacía manifiesto con la llegada de Fidel

Castro al poder. El primer momento de confrontación corresponde entonces a una dimensión meramente ideológica que vendrá a marcar la pauta de allí en adelante en el relacionamiento interestatal de ambos países (Revista Semana 2014).

A partir de ese momento, la llegada al poder de diferentes mandatarios no marcó una diferencia significativa en las relaciones con el gobierno de Fidel Castro. Por el contrario, la mayoría de gobernantes adoptaron una posición tendiente al recrudecimiento de las medidas; evidencia de ello es el rol que desempeñó John F. Kennedy (1961 – 1963). En su periodo presidencial se firma la Proclamación Presidencial 3447 (Kennedy J.F, Febrero 3, 1962) que decreta oficialmente el bloqueo económico y promueve un aislamiento político y comercial a nivel regional (Dallanegra Pedraza 1999). Se trata de la restricción comercial total en el intercambio de bienes, además de la ruptura absoluta de sus relaciones diplomáticas.

El presidente en mención resulta ser uno de los actores más significativos en la implementación de la sanción analizada. Él inicia la promoción de un discurso de defensa hemisférica que termina justificando, en la órbita internacional, el aislamiento del régimen cubano y legitima la idea de contención que se consolidaría durante la Guerra Fría. En la Proclamación signada por el mandatario apela a que el gobierno de Cuba es incompatible con los principios y objetivos del Sistema Interamericano, ello con base en la alineación de la Isla con las propuestas subversivas del comunismo de la URSS, lo que da pie a la activación de mecanismos por parte de los EEUU en términos de defensa individual y colectiva.

Durante la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sirviendo de Órgano de Consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, resolvió en el Acta Final que el actual gobierno de Cuba es incompatible con los principios y objetivos del Sistema Interamericano; y, a la luz de la ofensiva subversiva del comunismo chino-soviético con el que el Gobierno de Cuba está alineado públicamente, instó a los Estados miembros a tomar las medidas que consideren apropiadas para su defensa individual y colectiva. (Kennedy, J.F, Febrero 3, 1962) (Traducción libre)

Este periodo presidencial es uno de los más determinantes en la evolución de la sanción ya que marca el primer momento discursivo en el que ella se circunscribe. Se trata de una medida tendiente a limitar las acciones cubanas en el continente, con el fin de

restringir la influencia comunista en la región. Corresponde a un fenómeno de choque ideológico en el que se inscribe toda una construcción discursiva y normativa. A pesar de ello, como se presenta a lo largo de este texto, dicha construcción no es inmutable, sino que, por el contrario, es susceptible de transformarse de acuerdo a las tendencias coyunturales y a los fenómenos históricos que se relacionan con ella.

Dicha etapa da paso a otro hito importante, el periodo conocido como Guerra Fría (1945 - 1989/91). Durante esta época tiene lugar la llamada Crisis de los Misiles, desplegada con el fin de situar a Cuba como un colaborador en el hemisferio americano de los ideales políticos propuestos por la URSS y, en consecuencia, ubicarla en la dimensión de amenaza contra la seguridad y la estabilidad de los intereses no sólo norteamericanos, sino regionales e incluso globales (Dallanegra Pedraza 1999). La implicación de ello es el establecimiento de Cuba como antagonista de los principios y valores liberales promovidos por los EEUU.

Dadas estas circunstancias y la continuidad de las limitaciones frente a las relaciones diplomáticas, comerciales y financieras con el Estado cubano, es factible afirmar que la política norteamericana respecto a Cuba adquirió el carácter de política de Estado y en consecuencia las transformaciones históricas de la misma no presentaron una innovación que invite a pensar en un cambio de disposición por parte de la potencia. Ejemplo de lo anterior, son los gobiernos de Ronald Reagan (1981 - 1989) y de George W. Bush (1989 - 1993), donde la tendencia en ambos casos fue mantener y reforzar la hostilidad hacia la Isla, considerando el declive inminente de su primer aliado, la URSS. Vale la pena mencionar la emisión (en el primer periodo mencionado) de la Orden Ejecutiva 12444 de 1983, que busca endurecer los controles sobre la actividad comercial con la Isla (y en el segundo periodo) y la proclamación de la Ley Torricelli, que se consolida como el antecedente inmediato de lo que sería la formalización del Embargo en la legislación estadounidense.

De acuerdo al manejo discursivo de la medida se esperaba que desapareciera, con la caída del comunismo, la aparente amenaza proveniente de la incidencia soviética sobre Cuba y la idea de este país como un foco de expansión de dicho sistema político. Sin embargo, la sanción se conserva y se refuerza apelando a otra dimensión del fenómeno, un

cambio discursivo que se encuentra claramente representado en los dos ejercicios de gobierno señalados: la orden ejecutiva 12444, la ley Torricelli y el endurecimiento de los controles.

La particularidad más importante de ambos mandatos, y la que otorga sentido a la presente investigación, es el hecho de que la justificación se ubica ahora en una nueva perspectiva. Termina la idea de seguridad y defensa hemisférica y se pasa a la lógica de la protección de los DDHH como baluarte de la democracia y los principios políticos norteamericanos. El discurso que legitima la sanción adquiere un sentido diferente y pasa de ser una exclusión por razones políticas a situarse en la órbita de la protección y la garantía de los derechos y la democracia.

La aprobación de la Ley Torricelli (1992) refuerza el carácter extraterritorial de la sanción. La medida impulsa dos elementos principales, por un lado la prohibición del comercio por parte de compañías subsidiarias norteamericanas con Cuba, incluso si su domicilio se ubica en terceros Estados; y por otro, la intensificación de las limitaciones al comercio marítimo (Cuban Democracy Act 1992). Lo anterior bajo la lógica norteamericana de que el gobierno de Fidel Castro manifestaba una constante indiferencia hacia la reglamentación internacional acerca de los DDHH y los principios democráticos (Exposición de motivos, Ley Torricelli).

Dicha norma, firmada por el ex presidente Bush y avalada por el entonces candidato presidencial, Bill Clinton, se constituye bajo un perfil en exceso personalista, dado que hace alusión no al Estado cubano sino a su mandatario: “el gobierno de Fidel Castro ha demostrado la falta de voluntad para aceptar los estándares internacionales en DDHH y los valores democráticos” (Roy 2000, pág. 18). Esto remarca la consolidación de una política estatal en contra, no de un fenómeno de violación de derechos sino del ejercicio político de un mandatario, lo que cuestiona el principio de autonomía de los Estados para autodefinirse (Centre Europe - Tiers Monde CETIM 2003).

Lo anterior podría ser entendido como un intento de injerencia dentro de un ejercicio de poder que violenta el desarrollo y relacionamiento de Cuba con otros Estados. Dicho en términos de la misma norma: el objetivo último es la promoción de una “transición pacífica a la democracia” (Roy 2000, pág. 22). A partir de este breve contexto histórico, político e

incluso económico, la presente investigación se instala en torno al discurso promovido por EEUU frente al gobierno Castro, durante el periodo presidencial de Bill Clinton.

2.2. Curso del Embargo Económico de EEUU a Cuba en el periodo presidencial de Bill Clinton (1993 – 2001)

El periodo presidencial de Bill Clinton marcó un hito histórico en la política norteamericana. Se trataba de un candidato demócrata que tras el periodo consecutivo de dos republicanos, se presentaba como una alternativa de cambio y transformación. A pesar de ello, las campañas presidenciales de quienes optaban con mayor vehemencia al cargo (George Bush y Bill Clinton), estuvieron encuadradas en las mismas tendencias.

En lo que atañe a la política internacional, la agenda pública no indicaba una seria necesidad coyuntural de debatir el tema. Ambas campañas estuvieron enfocadas en tratar el asunto como un elemento secundario que, en lo que tocaba a Cuba, se circunscribía a la solidaridad con la población en la causa de protección de los DDHH. La postura que reflejaban ambos candidatos era pasiva en la medida en que “se hablaba de una pronta caída del sistema comunista” (Alexndrovna 2013, pág. 1) en razón de la disolución de la URSS.

Posterior a la campaña electoral, y ya como presidente electo, Bill Clinton se manifestó por primera vez de forma concreta respecto a la problemática cubana en marzo de 1993. En una rueda de prensa el mandatario manifestó su apoyo a la recién sancionada Ley Torricelli (Alexndrovna 2013, pág. 1), antecedente inmediato de lo que sería la Ley Helms-Burton (Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana).

Los motivos para respaldar la sanción deben leerse desde un contexto tanto histórico como político. Este último tiene que ver con la posición del presidente Clinton respecto a Cuba. Ella se presenta como una continuidad adoptada de los postulados de Reagan y Bush. Algunos análisis académicos lo llevan a la órbita de apoyar e incentivar levantamientos en contra del régimen Castro (Petras y Morley 1996) por medio de propaganda, y difusión discursiva tendiente a resaltar la importancia de los DDHH y la deficiencia de su protección en la Isla. Tal perspectiva desconocía tanto las estadísticas como los índices reportados en el continente americano en lo que atiende a la visión integral y global de los DDHH.

Clinton lo entendía como una valiosa oportunidad para incrementar la presión en Castro, considerando el colapso de la Unión Soviética. (Petras y Morley 1996)

En lo relacionado con el contexto histórico, se resalta el ambiente político internacional que rodeaba las relaciones entre ambos Estados. Tras la caída de la URSS se esperaba que el sistema cubano reaccionara negativamente y decayera ante las políticas mundiales imperantes. A pesar de ello, el sistema político de la Isla se mantuvo, e incluso con el paso de los años ganó el respaldo de la comunidad internacional, declinando así a la postura estadounidense.

La orientación gubernamental norteamericana respondía a la idea de aumentar las presiones y las restricciones en el comercio, la ayuda humanitaria, entre otras. El ideal era generar una tensión tal que obligara tanto al gobierno cubano como a la población a responder de manera favorable a las políticas e ideales liberales propuestos por los EEUU. Esto se manifestó en la intensificación de las iniciativas propagandísticas contra la revolución y la intención de persuadir y ganar como adeptos de la causa a muchos otros Estados. (Petras y Morley 1996)

Lo anterior se traduce en tres dimensiones concretas en las que se puede pensar la construcción de la política Clinton en torno a Cuba. En primer lugar, una relación históricamente tensa e incluso problemática entre ambos Estados, ello en la medida en que tras la revolución del 59 las dinámicas políticas entraron en una confrontación ideológica permanente que solo hasta la caída de la Unión Soviética, cambió el discurso de amenaza a la seguridad hemisférica por el de la protección de los DDHH. En segundo lugar, se encuentra la idea de espacio estratégico que rodea a la Isla. Para los EEUU Cuba es la representación de un escenario estratégico tanto comercial como político, situación que se transformó con la llegada de Fidel Castro al poder, ya que las diferencias políticas e ideológicas impidieron un curso normal de las relaciones interestatales. El tercer factor, es la dimensión que se involucra en el trasfondo de la sanción en contra de Cuba. Se trata de una intención de continuidad a la *doctrina* Monroe, por medio de la cual se afirma que cualquier acción por parte de un Estado americano debe ser asumida como una posible agresión en contra de los Estados Unidos. (Roy 2000, pág. 6) Lo anterior se traduce en el discurso mismo de la defensa de los intereses americanos y el rechazo en contra del

comunismo, que para este gobierno termina complementado con la idea de los DDHH como bastión de la democracia liberal.

Estos elementos se reúnen para configurar el panorama de uno de los momentos determinantes del periodo presidencial de Bill Clinton, la aprobación de la Ley Helms-Burton (1996). Por medio de ella no solo se dio continuidad al embargo económico sino que también se modificó la facultad presidencial de suspender la sanción, pasando a requerir la aprobación en las bancadas parlamentarias. Al adquirir el carácter de Ley del Congreso, es él como órgano legislativo el llamado a atender cualquier consideración o modificación sobre la norma, de ahí que ya no se trate de una mera interacción diplomática, sino de un elemento determinante dentro del ordenamiento jurídico. Dicha disposición confirma y ratifica la naturaleza de política de Estado que adquiere la medida. (Alexndrovna 2013)

Además, la emisión de la Ley se encuentra respaldada por una serie de conclusiones que se relacionan no con el popular discurso de los DDHH (que intenta justificar a nivel internacional la sanción) sino con algunos elementos tendientes a resaltar las condiciones económicas en Cuba y la reivindicación del derecho de propiedad (Cuban Liberty and Democratic Solidarity, 1996: Título II y Título III).

Se menciona que es necesario continuar con la presión que impone el embargo, en la medida en que la Isla afronta crisis que se relacionan entre otras cosas con: “la finalización de la financiación por parte de la URSS, el régimen comunista y la mala administración, la reducción de los volúmenes de comercio y el paso a términos de intercambio comercial con los antiguos países socialistas” (Alexndrovna 2013, pág. 5). Estas afirmaciones, indiscutiblemente están sesgadas por el carácter personalista que impulsa los juicios de valor en contra del gobierno Castro y el régimen político-económico que opera en el país centroamericano. En el texto de la norma se señala, en los requerimientos y factores para la determinación de un gobierno de transición, la obligatoria exclusión de la participación de los Castro en el escenario político cubano. “Requisitos para los efectos de esta Ley, un gobierno de transición en Cuba es un gobierno que: [...]7) No incluye a Fidel Castro o a Raúl Castro[...]” (Cuban Liberty and Democratic Solidarity, 1996: Título II) (Traducción libre).

Así las cosas, puede establecerse que el transformo ideológico que ampara no solo la sanción económica sino también el discurso que la respalda y simultáneamente la promueve, tiene que ver con una idea de carácter hegemónico que desde la perspectiva gramsciana, responde a un dominio intelectual y una influencia que parece construir un escenario de aceptación de dicha intención dominante.

Existe un propósito evidente de profundizar en el deterioro económico cubano con el fin de acelerar la caída del régimen político y al mismo tiempo reafirmar el poderío norteamericano sobre dicho Estado. (Roy 2000, pág. 6) Esto quiere decir que el discurso de defensa de DDHH no corresponde al principio de integralidad que debe caracterizar este tipo de prerrogativas, sino que más bien “los DDHH forman parte del juego político entre el régimen castrista y sus opositores, considerados los principales defensores” (Gratius 2008, pág. 182) de dicha temática. La razón de esta afirmación es que en ningún espacio ha operado una reivindicación estricta de estas prerrogativas entendidas en la orbita de la interrelación que las diferentes categorías que las conceptualizan adquirieron.

La interpretación probable de todos estos puntos es que la importancia que ostenta el caso Cuba, ante la comunidad internacional, responde más que a la situación real de protección y garantía de derechos a la importancia y a la simbología que en términos ideológicos implica la permanencia del régimen socialista instaurado por la revolución del 59 (Centre Europe - Tiers Monde CETIM 2003). En este marco toma relevancia la Ley Helms-Burton que, cargada de intereses hegemónicos, promueve y busca interferir no sólo con los principios del Derecho Internacional, sino que reproduce la percepción que en el imaginario social estadounidense existe sobre las condiciones de riesgo que se derivan de las políticas estatales cubanas.

En concreto los objetivos proyectados por la Ley y sus impulsores en el parlamento se conjugaron con los propósitos que en sentido político caracterizaron en este tema a Bill Clinton: dar continuidad a la sanción y reafirmar su postura radical en contra de cualquier amenaza a la idea de democracia liberal imperante, como claramente se puede apreciar en el discurso promulgado tras la sanción de la ley Helms-Burton (1996).

El desarrollo y fortalecimiento de la sanción por medio de la emisión de un documento legal que no solo reafirma la medida y su contenido sino que además lo

formaliza, manifiesta la continuidad de una guerra ideológica entre ambos Estados que termina valiéndose del discurso de los DDHH para justificar un enfrentamiento que copta la libertad y la soberanía del Estado cubano (Petras y Morley 1996).

Todos estos elementos evidencian la complejidad en la que se inscribe una sanción de esta naturaleza. Por principio se considera que las circunstancias que validan un bloqueo económico deben ponderarse con las consecuencias que implica (Segal 1999). Es este el motivo por el cual era fundamental, ya para el periodo presidencial Clinton, reconsiderar las causas que, carentes del velo de “amenaza comunista”, requerían un nuevo fundamento que facilitara la consolidación no solo de la potencia política sino también del ideal norteamericano de democracia liberal. Ese fundamento fue hallado en la exaltación de la importancia de las proposiciones de los DDHH.

A pesar de lo anterior, la expectativa seguiría siendo la misma la caída del régimen de Fidel Castro. Esto llevó a que la Casa Blanca, después de la sanción de la Ley Libertad, redujera su actividad a una espera paciente del fin del régimen impulsado por la revolución, ya sin el respaldo de la URSS. Se representa una reproducción literal del ideal propuesto por los predecesores de Bill Clinton, (Alexndrovna 2013) el final del gobierno Castro y el restablecimiento de la influencia norteamericana en la Isla, desde un nuevo argumento a favor: la defensa de los DDHH como propuesta altruista de protección del hombre y primacía de intereses humanitarios.

2.3. Cambio discursivo: Derechos humanos como elemento para justificar el *Embargo Económico*.

De acuerdo con las descripciones históricas que se han desarrollado hasta ahora es plausible que el curso del embargo económico impuesto por EEUU a Cuba no fue objeto de modificaciones sustanciales. Lo contrario sucede con el argumento por medio del cual se valida la persistencia de la sanción.

Al inicio del embargo se produjo toda una argumentación tendiente a exponer las causas y circunstancias por las cuales el vínculo del nuevo régimen político cubano con la URSS representaba un riesgo para la seguridad y estabilidad del continente americano. Pero

para los años 90's, con la caída de la URSS, el panorama político global se transformó, eliminando la polarización hasta ahora existente y situando los conflictos en una nueva dimensión. Ya no se trataba de un enfrentamiento ideológico que pretendía imponer un modelo de Estado, sino una relación mucho más dinámica en la que las diferencias político-ideológicas se difuminan de tal manera que el discurso de las potencias también debe reconfigurarse.

Aquello fue una de las razones fundamentales por las cuales EEUU debió apelar a un nuevo argumento que mantuviera el bloqueo de la Isla. El nuevo elemento que, atendiendo a los factores coyunturales, cobró importancia fue el de la protección de los DDHH. Aunque sus antecedentes se remiten a la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* (1948), y con ella otra suerte de instrumentos internacionales que iniciaron el proceso de normatización de dichos principios, es indiscutible que para el periodo presidencial de Bill Clinton la idea de responsabilizar a los Estados (y en general a la comunidad internacional) por la protección y garantía de dichas prebendas se volvió una prioridad. Aún más para un país como los EEUU, que desde la lógica propuesta por la doctrina Monroe adopta una posición mesiánica, en la que es legítimo pensar en la imposición de ciertas ideologías que garanticen la preponderancia de “América” en todo el continente (Aristizabal 2010), tal postura debe ser acompañada de un mecanismo de comunicación que facilite el objetivo. Así, la apropiación del discurso de los DDHH no resulta extraña para quienes se pretenden presentar como uno de los mayores promotores de la democracia liberal y de los principios para la protección del ser humano en todas sus órbitas. En este orden, se promueve que la medida no solo era justificada sino que además atendía a las necesidades, demandas e intereses del pueblo cubano.

Lo que antes era una disposición tendiente a limitar el accionar de una ideología en el continente, se presentaba en este nuevo momento como un mecanismo de presión gubernamental para garantizar los intereses cubanos. En últimas, ambas instancias responden a un mismo objetivo: derrocar el ejercicio político de Fidel Castro y con ello los principios rectores del Estado por él gobernado. Ejemplo de ello es que en el mes de enero de 1994, el subsecretario de Estado (Alexander Watson) precisó que: “el comunismo ya no constituye una amenaza en la región” (Petras y Morley 1996). Esto indicaría que las

razones de fondo que impulsaban el embargo habrían desaparecido y en consecuencia era necesario eliminar la sanción y emprender un proceso de integración económica con Cuba.

Sin embargo, la sanción no solo continuó sino que además adoptó una nueva figura política, la definición legal que además de instaurarla en un escenario de mayor incidencia e importancia, la ratifica como una política de Estado que se extendió por al menos 50 años. Así, la reflexión debe tender a cuestionar el ¿por qué si la amenaza por la cual se implementó la sanción fue suprimida, la medida persistió respaldándose de un nuevo argumento?

Parece claro que si bien la causa por la que se instauró el embargo desapareció, el objetivo último que esperaba impulsar aún no se encontraba satisfecho. Ello indica que con el propósito de consolidar la meta -la transformación política de la Isla con la caída del gobierno Castro- era necesario presentar la sanción como una medida no solo indispensable sino también legítima; para tales efectos resulta válido apropiarse del discurso de los DDHH, más si se tenía en cuenta la creciente importancia de los mismos en la escena internacional.

Este entramado político termina desconociendo la realidad de la relación entre ambos Estados, ya que la situación global de los DDHH en Cuba se ha visto perjudicada de manera directa por las limitaciones económicas que impone el embargo y, en consecuencia, no se reduce a la base exclusiva de derechos civiles y políticos que trae a colación recurrentemente EEUU. (Gratius 2008) Esto implica que los críticos del gobierno cubano politizan los DDHH de primera generación para presentar un panorama lamentable para el ser humano en Cuba, mientras que el régimen no solo impulsa sino que presenta como su gran bandera la garantía de Derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC) como una de sus principales políticas desde la revolución de 1959. (Gratius 2008) Estos señalamientos invitan a pensar que el discurso de los DDHH, como mecanismo para legitimar el bloqueo económico, forma parte de un juego político entre Cuba y EEUU, donde este se presenta como principal promotor del derrocamiento del actual modelo económico y político (Lopez-Levy 2011).

Los elementos citados revelan las dos posiciones preponderantes de la crítica de las relaciones entre los EEUU y Cuba. Por un lado, se encuentran aquellos que apelan a que la

justificación para continuar con la sanción se ausentó desde el momento mismo en que finalizó la denominada Guerra Fría. Esta postura es defendida por gran parte de los Estados miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en varias oportunidades han votado por el levantamiento definitivo de la sanción y la normalización de las relaciones con la Isla, considerando que medidas como la impuesta en su contra terminan acarreando serias violaciones y limitaciones a los derechos de la población, ejemplo de ello son las votaciones del mismo año de aprobación de la Ley Helms-Burton, en las que 137 Estados votaron a favor del levantamiento del bloqueo y tan solo Israel, Uzbekistán y por supuesto los EEUU votaron por la continuidad. Por otro lado, se encuentran quienes defienden el derecho soberano de las naciones a escoger sus socios comerciales y asegurar sus fronteras; (Roy 2000, pág. 23) lo que esta postura desconoce es la dimensión que una sanción como la que circunscribe el embargo abarca e implica.

En últimas, el embargo económico resulta ser un instrumento hegemónico que desde su origen se incluye en las dinámicas de diálogo político, argumentando que “la armonía entre las repúblicas americanas sólo puede ser efectiva en tanto que el respeto de los DDHH y las libertades fundamentales sean una realidad” (Camargo 1996, pág. 68). Esto quiere decir, que por medio de un ejercicio de control político, intelectual y moral (Giacaglia 2002, pág. 153), que se extiende al ámbito internacional y permea las políticas nacionales, se quiere dar cabida a un intento de imposición que se vale de elementos como la ideología para constituir un entramado de conceptos que recojan la voluntad colectiva (Giacaglia 2002, pág. 153) y terminen sancionando las dinámicas sociales, entre las que se encuentra la dimensión económica y diplomática.

El embargo constituye un ejercicio hegemónico por parte de los EEUU que a lo largo del tiempo se ha respaldado por dos argumentos que responden de manera acertada al contexto en el que se inscriben las relaciones entre ambos Estados. En principio se trató de limitar la alianza entre la URSS y Cuba por representar una amenaza para la seguridad no solo norteamericana sino incluso de todo el hemisferio. La transformación de este argumento, que se fortaleció en el periodo de Bill Clinton, se dio en torno al establecimiento de una política exterior que integra tanto el interés económico

estadounidense como el interés político y estratégico que encierra a la Isla, dentro de la meta altruista de promover los DDHH (Lopez-Levy 2011).

El cambio y la transformación que ha sufrido el discurso validador de la sanción por parte de los EEUU revela la volatilidad de esta forma de comunicar una idea, y también su consolidación como herramienta para impulsar e incluso imponer un interés político e ideológico. De acuerdo a la explicación propuesta en el capítulo anterior por medio de la teoría de la hegemonía, tenemos que no se responde necesariamente a una dinámica de imposición forzada y de aceptación violenta de una proposición, sino que desde la postura de Gramsci, se involucran toda una suerte de elementos que por medio de producción y reproducción discursiva influyen en la mentalidad tanto del individuo como del colectivo (Giacaglia 2002). Resulta que el caso de EEUU y Cuba es una evidencia de la manera en que opera el mecanismo antes expuesto. En este asunto concreto el discurso de los DDHH es politizado en tal dimensión que, contrario al espíritu mismo que promueve, termina abriendo un debate en el que las posturas políticas priman y logran reducir la discusión a la deficiencia en términos de derechos civiles y políticos o de libertades individuales en un régimen autoritario.

Lo anterior, como se menciona, termina desconociendo una serie de situaciones en las que por su puesto se debe resaltar la necesidad de incrementar la garantía de derechos de manera general e integral, pero también se deben evaluar las consecuencias prácticas que implica para una comunidad, en este caso la cubana, la instauración de una sanción tendiente a aislar, segregar y excluir de las dinámicas comerciales al Estado en el que habitan. ¿Es esto legítimo aunque la comunidad internacional e incluso el órgano internacional encargado de la defensa y promoción de derechos en el mundo (ONU) se oponen a la sanción? Parece claro que los intereses de la misma trascienden la órbita de defensa de derechos y se sitúan en la preponderancia de un interés nacional: restablecer la influencia de los EEUU en las dinámicas sociales, políticas, económicas e incluso culturales que existían en la Isla, previa la instauración de la revolución impulsada por Fidel Castro.

3. ANÁLISIS DISCURSIVO Y USO ALTERNATIVO DEL DISCURSO

3.1 Construcción metodológica y Aplicación

Este apartado se enfocará en aplicar la metodología del ACD a través de los siguientes lineamientos generales. Primero: selección del cuerpo discursivo objeto de análisis. En este momento la investigación se concentra en seleccionar los discursos que van a ser empleados como muestra para aplicar el ACD. El criterio de selección corresponde al emisor, desde dos dimensiones concretas. En primer lugar, los pronunciamientos presidenciales, que considerando el periodo de estudio, permitirán indagar acerca de las manifestaciones del presidente Bill Clinton con respecto a Cuba y la aprobación de la Ley Helms-Burton. En segundo lugar, la temporalidad misma, teniendo en cuenta que en este lapso se formalizó la sanción y además jugaron un papel fundamental otros elementos como, por ejemplo: la militancia política del entonces mandatario.

Atendiendo a estos criterios, el ejercicio de investigación se concretó en la lectura de seis cuerpos discursivos² de los que fueron seleccionados cuatro, por su pertinencia con el tema y su significado en términos de representación social. Los discursos objeto de lectura desde la lógica planteada por el ACD son: Discurso inaugural del presidente Bill Clinton, 1993; Declaración, firma de la Ley Helms-Burton o Ley Libertad, 1996; Observaciones en el marco de la convención demócrata, 1996; y Documento *Apoyo a la Transición Democrática en Cuba*, 1997.

Segundo: caracterización del plano discursivo. Tras seleccionar los discursos, es fundamental delimitar aspectos tales como, el rol político del emisor, el contexto de la emisión, los destinatarios del discurso y el significado del mismo, entre otros aspectos que ya se han desarrollado en parte en el capítulo uno y dos de este trabajo monográfico.

Para desarrollar este punto, fueron construidas una serie de tablas³ que integran los factores mencionados, y en donde además son sistematizados los elementos que aporta el ACD como herramienta. De esta forma, se consolida una base en la que se permite leer no

² Ver: Acápites de anexos. Anexo 1. Tabla: Actor y contexto del discurso.

³ Ver: Acápites de anexos.

solo el análisis del texto, sino también del contexto en el que se produce la emisión. Esto facilita la descripción de los significados y representaciones que involucra el discurso y también, en términos del ACD, el vocabulario que manifiesta relaciones de poder. Lo anterior con el objeto de incorporar en el análisis la teoría gramsciana acerca de la hegemonía y las relaciones impositivas que se consolidan por medio de herramientas semánticas y discursivas.

Tercero: análisis de la estructura y determinación de la postura discursiva. En este momento, el análisis del discurso permite valorar las herramientas argumentativas y al vocabulario empleado, que se encuentra en las emisiones y a partir de allí, precisar la manera en la que tales mecanismos se involucran, reproducen e inciden en el contexto. El objetivo es señalar la existencia de elementos ideológicos, de acuerdo con el contenido manifiesto e implícito del discurso. Para ello es fundamental identificar el hilo discursivo que rodea el objeto de análisis. Dicho objetivo resultará del análisis conjunto y comparado de los pronunciamientos seleccionados.

Con el fin de dar cuenta de este paso, se dedicó un punto del análisis a identificar la estructura argumentativa de los textos seleccionados. Aunque es claro que cada uno responde a circunstancias y momentos diferentes, e incluso a eventos impulsores particulares, de la lectura crítica de los mismos fue posible derivar una forma específica de argumentación que tiende a emplear argumentos que apelan a la autoridad como elemento fundador. Se postula a los EEUU como sujeto con criterio y capacidad para pronunciarse respecto a los bastiones de los ideales liberales y democráticos y como actor determinante en la reivindicación de valores y principios de libertad y prosperidad. En este sentido, se direccionan los cuatro pronunciamientos, incluso el de coautoría del parlamento. De esta descripción dan cuenta las matrices desarrolladas para sistematizar las condiciones contextuales de emisión y el actor interviniente, en las que se detalla con solidez el escenario de construcción discursiva y argumentativa de los pronunciamientos ya señalados⁴.

Adicionalmente, se presentan argumentos tendientes a dar cuenta de relaciones de causalidad. En el caso concreto de la firma de la Ley que formaliza la sanción en contra de

⁴ Ver: Acápites de anexos. Anexo 2. Tabla: Análisis Crítico del Discurso.

Cuba, encontramos que el presidente de los EEUU toma la decisión de apoyar el proyecto el mismo año de su postulación para la reelección, ello considerando que la radicación del proyecto tiene lugar en 1995. A pesar de esto, el discurso que da cuenta de la firma de la disposición, circunscribe su justificación al ataque por parte de la Fuerza Aérea cubana a dos aeronaves que se encontraban violando el espacio aéreo de la Isla, pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate. De este modo, la legitimación de la sanción se propone en un lenguaje retórico que pretende vincular causalmente la respuesta de los EEUU por medio del escalamiento legislativo del Embargo en una Ley del Congreso, con alcances jurídicos formales y materiales: “[...] Esta Ley es una respuesta justificada al injustificado e ilegal ataque del gobierno cubano en dos aeronaves civiles norteamericanas que se encontraban desarmadas, que dejó tres ciudadanos estadounidenses y un residente muertos” (Statement on signing the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996). (Traducción libre).

La idea, coherentemente estructurada en el texto, tiende a legitimar una acción desde la lógica de la comparación de conductas y la necesidad de imponer intereses, que en este caso están representados por la agenda norteamericana.

El discurso apela de manera recurrente a principios de valor que se pretenden reafirmar en el imaginario de los receptores y a la necesidad de reivindicar los ideales americanos en la esfera internacional, ello recurriendo a la emotividad como herramienta para la apropiación de postulados. A medida que avanza el discurso se intensifican los elementos que manifiestan una relación asimétrica de poder entre el Estado cubano y el norteamericano.

El Presidente también debe ser capaz de responder efectivamente a los rápidos cambios en Cuba. Esta capacidad es necesaria para garantizar que podemos promover los intereses nacionales de manera que conduzcan a una transición democrática en Cuba. La Sección 102 (h), relativa a la codificación del embargo económico, y los requisitos para la determinación de una transición o de que un gobierno democráticamente elegido está en el poder, podría leerse como una forma de imponer restricciones demasiado rígidas en la implementación de nuestra política exterior (Statement on signing the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996). (Traducción libre)

La argumentación se moviliza entre la línea de lo emotivo, los hechos y el orden impuesto por Norteamérica como principio indiscutible: la democracia como bastión liberal y como forma de gobierno victoriosa tras la caída del comunismo de la URSS.

Con esta producción discursiva se invisibiliza el contexto de formación de la norma y los intereses primarios que la originan. Se toma como justificación argumentativa un hecho concreto que tiene lugar con posterioridad a la iniciativa del proyecto de ley y así se circunscribe su firma en una dimensión que responde a una causalidad aparentemente clara para los receptores.

Elementos como los que se mencionan (exaltación de los principios liberales democráticos o el nivel de jerarquía de acción que ostenta este Estado por su representación de valores, entre otros) son repetitivos a los largo del análisis, la tendencia prioritaria es hallar escenarios de legitimación que apelan al empoderamiento de la ciudadanía como actor determinante en las decisiones y acciones de los EEUU como nación. Se promueve la idea de reivindicación de intereses norteamericanos no solo en el plano doméstico sino también internacional.

Con el fin de validar posiciones como las mencionadas, los discursos recurren constantemente a señalar puntos comunes y de identificación, así la carga simbólica se torna recurrente como herramienta de aprehensión y aceptación del discurso por parte de los receptores. Este elemento es determinante de acuerdo al contexto en el que se producen todos y cada uno de los textos seleccionados, siempre que nunca cuentan con una escena de unidad o unificación, sino que, por el contrario, responden a las demandas de sectores que se espera sean incorporados en las proposiciones de los emisores.

En este punto, el discurso de los DDHH se torna relevante, ya que aunque en muchos de los textos no se menciona puntualmente, siempre aparece como un elemento transversal pero circunscrito a la reivindicación de derechos de carácter civil y político. De lo anterior se desprende que se deja de lado el mencionado principio de integralidad de los derechos, además se instrumentaliza el tema como herramienta de legitimación. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, los DDHH son empleados como escenarios comunes en donde se posibilita una amplia identificación en los receptores por su reafirmación y garantía. La idea de que estas prerrogativas operan como mero discurso,

atiende a que, en gran parte de los pronunciamientos seleccionados, se emplean como eufemismos para hablar de intervención o injerencia. Ejemplo de ello es que en el documento *Apoyo a la Transición Democrática en Cuba*, se señala que:

Un gobierno de transición en Cuba será bienvenido para la cooperación por la comunidad internacional, en particular por la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, para ayudar a garantizar el respeto de los derechos humanos en Cuba durante su transición. Se podrá proveer asistencia para monitorear las condiciones de los derechos humanos, establecer una función de verificación de derechos humanos en Cuba, desarrollar un efectivo servicio de defensa pública, promover una reforma al sistema penitenciario y satisfacer las necesidades especiales de los presos políticos liberados”. (Support to a Democratic Transition in Cuba, 1997). (Traducción libre)

Lo anterior, en términos del ACD, puede leerse como un mecanismo que promueve la intervención en asuntos domésticos, desde la perspectiva incuestionable del reconocimiento de DDHH. En todo caso, el texto en general resulta limitado en este ámbito ya que excluye de la discusión el elemento de integralidad y se concentra en las reivindicaciones de carácter liberal.

A los cubanos se les continúan negando los derechos humanos. No pueden conformar partidos alternativos al partido comunista, elegir representantes de su propia escogencia, formar asociaciones libres, como sindicatos independientes, o expresarse libremente, y se les niega el recurso de un poder judicial independiente que pueda proteger sus derechos. (Support to a Democratic Transition in Cuba, 1997). (Traducción libre)

En este orden, la lectura de dicho fragmento permite concluir que se instrumentaliza discursivamente un tema para justificar una acción de carácter político, que en concreto atiende a elementos diferentes como es el caso de la economía, que resulta determinante y estratégica en la promoción de los intereses norteamericanos en la Isla. Esto se ve representado con claridad en afirmaciones del mismo texto:

Por lo tanto, una transición pacífica y una expedita recuperación económica en Cuba servirá a los intereses de ambos, el pueblo americano y cubano, la naturaleza en términos de tiempo y curso de la transición cubana debe ser determinada por el propio pueblo cubano (Support to a Democratic Transition in Cuba, 1997). (Traducción libre)

Lo anterior evidencia los lineamientos básicos que estructuran la argumentación de los discursos. Las reivindicaciones de carácter liberal en términos de libertad y prosperidad

se tornan recurrentes, junto con la priorización de los intereses norteamericanos y el trato de temas relativos a cambios estructurales, bajo la perspectiva de protección de los DDHH, en el orden no solo político sino también, especialmente, económico. Es claro que el factor discursivo opera como herramienta para transmitir un mensaje que al ser continuo, prolongado y repetitivo cala en el imaginario, y facilita su presentación desde una postura que indiscutiblemente encuentra un asidero de legitimación.

Como conclusión preliminar y resultado del análisis sistémico de los pronunciamientos oficiales seleccionados, es posible establecer que, aunque cada uno de los discursos abarca los temas en respuesta al escenario respectivo de emisión, encuentran un hilo de relación con el tema relativo a las relaciones cubano-americanas. Esto se debe en gran medida al carácter de política de Estado que posee el embargo y al objetivo permanente de justificar su existencia en las acciones de los EEUU como respuesta al comportamiento, estructura político-económica y ejercicio de gobierno en Cuba.

En los textos analizados es posible identificar argumentos tendientes a manifestar una relación jerárquica de poder que puede extrapolarse a los postulados de Gramsci respecto a la hegemonía. Se trata de impulsar elementos que calen en las dimensiones intelectual, política y moral del receptor, con el fin de impartir un orden o algún tipo de disposición. Allí se desarrolla un ejercicio simbólico y de apropiación de conceptos a fin de promover como prioritarios los intereses norteamericanos sin importar el contexto de implementación.

Ya no es clara la división entre lo que es exterior y lo que es doméstico. La economía mundial, el medio ambiente, la crisis mundial del SIDA, la carrera armamentista mundial, nos afectan a todos. Hoy, como no sucedía antes, el nuevo mundo es más libre pero menos estable. El colapso del comunismo ha dado lugar a viejas animosidades y a nuevos peligros. Claramente, EEUU debe continuar liderando el mundo, dado que hemos trabajado mucho para hacerlo (First Inaugural Speech, 1993). (Traducción libre)

Una ejemplificación de esto es el tema de la democracia, empleado como elemento identitario y simultáneamente como ideal. Así, en su nombre y defensa se pueden plantear escenarios de injerencia e intervención. Esto revela el carácter hegemónico de los EEUU que por medio de sus dirigentes se visualiza como la potencia vencedora en la guerra contra el comunismo y se posiciona como autoridad en la esfera internacional. El significado del

discurso tiende a llevar, al convencimiento colectivo, la necesidad de las acciones sancionatorias contra Cuba. Lo anterior se realiza a través de puntos de inflexión, desde los que en principio no se encontraría negación: el discurso de los DDHH, el mantenimiento de los intereses norteamericanos, el deber de todos de promover la democracia, entre otros.

Cuarto: el último punto del análisis propone la identificación de posturas de resistencia y fijación de propuestas para el uso alternativo del discurso. Este es el aparte final de la investigación, en el que se considerará el principio de integralidad y las formas discursivas que posibilitan acciones contra-hegemónicas.

3.2 Uso discursivo de los DDHH en el marco del Embargo Económico a Cuba, periodo presidencial de Bill Clinton (1993 – 2001)

En este apartado de la investigación se intenta evidenciar cómo, resultado del ACD implementado en cuatro textos que recogen algunas de las declaraciones más relevantes en el periodo de 1993 – 2001 en cuanto a las relaciones de los EEUU con Cuba, las producciones discursivas terminan siendo relevantes en una dimensión política, por las implicaciones semánticas y simbólicas que conllevan. Esto haciendo énfasis en el tema de los DDHH como punto de justificación y legitimación de medidas que podrían conceptuarse como hegemónicas desde la dimensión gramsciana del término, es decir, como elementos que inciden y determinan ciertas formas de acción, ya no por un factor impositivo-coercitivo que se vale de la fuerza, sino por un mecanismo de incidencia en la dimensión intelectual, moral y política.

Siguiendo esta lógica fue seleccionado el tema de los DDHH, siempre que como se ha mencionado en otros acápite, estas prerrogativas han sido construidas no solo desde la dimensión jurídica del término, sino desde una producción discursiva caracterizada por sus alcances de universalización y reivindicación. Esto se traduce en que los DDHH, desde lo que comunican, son una herramienta óptima para hallar legitimidad en un contexto doméstico pero también global.

En este orden, los DDHH son un punto de análisis en la producción discursiva que respecto a Cuba tuvo lugar en los dos periodos presidenciales de Bill Clinton. En el examen

de los textos fue posible encontrar que el tema de los DDHH no siempre toma protagonismo en los pronunciamientos oficiales. Contrario a lo que se esperaba en el inicio de la investigación, es posible afirmar que en muchos de los casos el tema se aborda solo de manera tangencial. Sin embargo, en la revisión bibliográfica que desarrolla el tema de Cuba y sus relaciones con EEUU, es uno de los elementos más relevantes. Como el objetivo del presente acápite es dar cuenta del análisis llevado a cabo sobre las fuentes discursivas, a continuación se desarrolla una exposición de los elementos que resultan relevantes para la materia en los cuatro cuerpos discursivos considerados en la investigación.

Discurso Inaugural del Presidente Bill Clinton. El 20 de enero de 1993, con ocasión de la posesión presidencial, el mandatario electo pronuncia un discurso que, por el contexto en el que se circunscribe, termina íntimamente relacionado con la superación de la guerra fría y la posición victoriosa de los EEUU en esta escena. Bill Clinton llega al poder como el primer presidente electo tras la caída de la URSS y con ello el final de la polarización mundial en torno a dos ideologías contrapuestas, el comunismo y el capitalismo.

A este hecho se suma la llegada al poder de un candidato demócrata, tras el gobierno del partido republicano durante 12 años. Tal situación permitió conceptualizar alrededor de las posibles posturas de Clinton, que en definitiva se vieron permeadas por una suerte de acontecimientos determinantes desde su posesión hasta la finalización de su periodo como presidente.

A raíz de estos planteamientos es factible pensar el primer discurso de Bill Clinton como una herramienta semántica que impulsa el espíritu americano pero simultáneamente reivindica el carácter de potencia de los EEUU en el nuevo orden mundial. Bajo esta perspectiva, se busca avivar el sentido de la renovación y la reconstrucción del país, ello valiéndose de la exaltación de los ideales propios de la democracia liberal. Así se abre la puerta para nuevos escenarios de intervención, desde la lógica de *América* como nación abanderada de la universalización de los postulados democráticos, una manifestación clara de esto es la afirmación que Clinton realiza en el marco de la emisión: “Nuestra democracia debe ser no solo la envidia del mundo sino también el motor de nuestra propia renovación. No hay nada mal en Estados Unidos que no puede ser saneado por lo que es correcto en Estados Unidos” (First Inaugural Speech, 1993).

En este punto cobra gran relevancia el tema de los DDHH, que aunque no cala en la literalidad del texto, se encuentra presente como elemento transversal en el marco contextual y de elección del nuevo presidente. Esto teniendo en cuenta la caída de la URSS y la apuesta de la agenda internacional por la democratización de los Estados y con ello el impulso de los DDHH como eje característico de este modelo de gobierno, tal y como se demostró en el capítulo II.

En esta lógica, la apuesta de Bill Clinton en este texto es direccionar la atención de los receptores a la dimensión idealizada de Norteamérica, en donde se integra la defensa de los derechos civiles y políticos. En este punto se da una manifestación clara de lo que Gramsci denominaría un ejercicio hegemónico, siempre que se apela al poder de las ideas y a la aprehensión de las mismas en el marco global. Se lee en el texto:

Cuando nuestros intereses vitales son desafiados o la voluntad y la conciencia de la comunidad internacional son desafiados, nosotros actuaremos, con diplomacia pacífica siempre que sea posible, con la fuerza cuando sea necesario. Los valientes estadounidenses que sirven a nuestra nación hoy en el Golfo Pérsico, en Somalia, y donde quiera que se encuentren son testimonio de nuestra determinación. Pero nuestra mayor fortaleza es el poder de nuestras ideas, que aun son novedad en varios lugares. A lo largo del mundo vemos que ellas son acogidas, y nosotros nos regocijamos. Nuestras esperanzas, nuestros corazones, nuestras manos están con las personas de todos los continentes que están construyendo la democracia y la libertad. Su causa es la causa de América (First Inaugural Speech, 1993). (Traducción libre)

Estos planteamientos ofrecen un indicador de lo que será la representación del tema de los DDHH en los siguientes discursos y ya específicamente en lo que atiende a las relaciones cubanas. En este caso concreto tampoco se hace mención expresa o manifiesta de Cuba como tema determinante, pero se verá que, con el paso del tiempo y el incremento de las tensiones y los intereses internos alrededor del tema, este factor cambia. Así, es posible afirmar que la relación de menciones a los DDHH es directamente proporcional a la de Cuba, siempre que el tema relacionado con este Estado se vincula de una manera u otra con dichos principios. Al final del análisis de los cuatro discursos esta posición será mucho más clara.

Declaración por la firma de la Ley Helms – Burton o Ley Libertad. Esta emisión es desarrollada por el presidente Bill Clinton, tras la sanción de la denominada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba. Tiene lugar el 12 de marzo de 1996, año de

finalización del primer periodo presidencial para el que fue electo. De acuerdo con las declaraciones y el contenido mismo del texto, este hecho responde al derribo en el mes de febrero de dos avionetas pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate. Esta acción fue desarrollada por la Fuerza Aérea cubana, tras advertencias previas a la organización, por la ejecución de acciones que presuntamente atentaban contra el orden público, la soberanía y el espacio aéreo en Cuba. Así las cosas, el 24 de febrero de 1996 tiene lugar la caída de los vuelos que deriva en una suerte de cuestionamientos y debates, ya que desde la oposición al régimen cubano se afirma que la acción se concretó en aguas internacionales, mientras que las afirmaciones oficiales justifican el acto porque las aeronaves se encontraban en cielo cubano sin previa autorización.

Este hecho facilitó un escenario de justificación para una iniciativa legislativa que encuentra su antecedente en 1995, año en el cual es radicado el primer proyecto de ley sobre el fortalecimiento a las medidas sancionadoras contra Cuba en el congreso norteamericano. El objetivo de la acción es endurecer y reforzar las sanciones que desde 1962 operan en contra de la Isla por parte de los EEUU. La modificación radica en el escalamiento en términos jurídicos de la medida, dado que adquiere el carácter de Ley del Congreso, modificando los alcances de acción del presidente y además formalizando su carácter de política de Estado, lo que en términos de análisis eleva su nivel de incidencia y sus expectativas de aplicación.

De allí en adelante, los efectos en términos de relaciones entre Estados se concentran en un grado mayor de hostilidad y en un déficit en materia económica para Cuba, lo que en muchos casos se vincula con dificultades en la garantía de derechos. Tal situación degeneró en amplios cuestionamientos por parte de la comunidad internacional e incluso de Estados aliados que encontraron la medida no solo desproporcional sino también violatoria de los principios del derecho internacional. Esto, considerando el carácter de extraterritorialidad y las sanciones que se declaran posibles en contra de otros Estados que desarrollen vínculos comerciales con la Isla.

a) Política. 1. Restricciones por otros países: El Congreso reafirma la sección 1704 (a) de la Ley para la Democracia Cubana de 1992, que establece que el Presidente debería alentar a los países extranjeros para restringir las relaciones comerciales y crediticias con Cuba de

una manera consistente con los propósitos de que Ley. 2. Sanciones en otros países: El Congreso insta además al Presidente que tome medidas inmediatas para aplicar las sanciones descritas en la sección 1704 (b) (1) de dicha ley contra los países que asisten a Cuba. (Helms-Burton Act, Title I, section. 102, 1996). (Traducción libre)

Estos elementos de contextualización, facilitan una lectura amplia del discurso y al mismo tiempo desarrollan un marco de interpretación para la utilización de los DDHH en este pronunciamiento particular. Aquí, es evidente cómo, con base en la reivindicación de la democracia, se apela a las libertades políticas y civiles. En esta dimensión se circunscriben todas las menciones relativas a los DDHH. Se trata de una emisión que apela a la reivindicación de la libertad como consecuencia del ataque contra los aviones. Sin embargo, no se hace una mención manifiesta de derechos desde una perspectiva integral y coordinada en términos de aplicación y garantía, tal como lo exigiría el principio de integralidad que se erige en la conceptualización de estas prerrogativas.

Lo anterior pretende dimensionar el carácter de reflexividad que propone la alocución respecto al manejo discursivo sobre las prebendas. Las menciones que se emiten, corresponden a una relación directa entre democracia y DDHH, por lo menos parcialmente. Ello desde la perspectiva de la misma Ley y de la reivindicación de índole liberal que se propone en términos de derechos de primera generación, resulta determinante. Esto se hace manifiesto en tanto se promueve la idea de que los esfuerzos norteamericanos están dando réditos, no solo por las consecuencias en términos económicos que afronta la Isla, sino también en el fortalecimiento de condiciones democráticas y de garantía de derechos. En términos del discurso citado:

Nuestros esfuerzos actuales están empezando a dar resultados: están privando al régimen cubano de las divisas que necesita para mantener su control de poder; y aún más importante, están empoderando a los agentes de cambio pacífico en la isla. Esta ley prevé un mayor apoyo a los esfuerzos de la administración para fortalecer las organizaciones independientes en Cuba comprometidas con la construcción de la democracia y el respeto de los derechos humanos (Statement on Signing the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996). (Traducción libre)

El lenguaje prioritario de este discurso es la reivindicación de la democracia, tarea que ya no solo se deja en cabeza del Estado, sino también a modo personal de sus representantes. En consideración a ello, Bill Clinton declara: “Voy a continuar trabajando

con el Congreso para obtener la flexibilidad necesaria si Estados Unidos estará en una posición de avanzar en nuestro interés compartido en una transición rápida y pacífica a la democracia en Cuba” (Statement on Signing the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996). (Traducción libre)

Con estos apartes del texto y el análisis contextualizado de los mismos, encontramos que el tema de los DDHH sigue consolidándose como herramienta transversal para la justificación de adopción de medidas, en este caso en contra de Cuba. La esencia misma del documento en el que se contiene el discurso enunciado en 1996, responde a esta lógica. El objetivo se traduce en la promoción de planteamientos susceptibles de aprehensión por parte de los receptores, función que cumplen los DDHH, mientras paralelamente se obvian parte de las razones estructurales que recogen la problemática.

Se parte de la idea de que la iniciativa previa para la sanción de la Ley no se debió al hecho señalado como impulso para su efectiva puesta en marcha, sino que respondió a otras razones que no se hacen manifiestas ni expresas en ninguna de las emisiones. Pero que se relacionan con muchos de los puntos temáticos que rodean la discusión, entre ellos el carácter estratégico de Cuba en una sociedad internacional de libre mercado y sobre todo el carácter de hegemón que ostenta EEUU y que se manifiesta, de acuerdo con Antonio Gramsci, en los mecanismos impositivos que emplea para legitimar su acción. Ello considerando que se remarca la idea de que la transición de Cuba es de vital importancia no solo para ese Estado, sino también para el pueblo norteamericano: “una Cuba democrática es de vital importancia para ambos, el pueblo cubano y el norteamericano” (Statement on Signing the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996). (Traducción libre)

Observaciones en el marco de la convención demócrata. El 29 de agosto de 1996 se celebra la Convención Demócrata que tiene por objeto postular a un candidato presidencial para las elecciones del mismo año. Bill Clinton es reelegido como representante del partido y postulado para la reelección presidencial junto con Al Gore.

Este hecho marca contextualmente los parámetros de desarrollo de una suerte de proposiciones políticas respecto a temas coyunturales. En el caso concreto de la emisión del discurso, tras la elección como candidato demócrata, Bill Clinton asume la posición particular de representante de una causa que se relaciona de manera clara con el liderazgo

mundial de los EEUU. El objetivo es continuar con los planes programáticos de su primer periodo, pero simultáneamente impulsar una suerte de acciones tendientes a reafirmar el respaldo de sectores sociales que tiempo atrás se habrían mostrado como amplia oposición a propuestas políticas desde la militancia demócrata. Es el caso de los llamados cubano-americanos que representaban una fuerza política determinante en los EEUU (Petras & Morley, 1996).

En este marco tiene lugar la producción discursiva de varias afirmaciones que, dado el escenario en donde se producen, responden a demandas concretas, donde el emisor cumple parámetros específicos en los que el discurso se transforma en una herramienta de impulso tanto para el partido demócrata como para los ciudadanos, con la promoción de la idea de EEUU como una potencia que continúa su ejercicio de acción e incidencia en el marco global. En palabras del mismo Bill Clinton, “Nuestro país sigue siendo la fuerza más fuerte de paz y libertad en la tierra” (Remarks at the Democratic National Convention, 1996). (Traducción libre)

Esta puede ser una de las razones por las que no se menciona en concreto el tema de los DDHH, el objetivo del discurso no era exponer la situación concreta del Estado cubano; en consecuencia hacer hincapié en la dimensión de los derechos en el ámbito de la Isla resultaría infructuoso. Sin embargo, a lo largo del texto es posible identificar elementos que relacionan a EEUU con una posición hegemónica.

Lo anterior se manifiesta en la manera en la que se consolida la argumentación en el texto, por medio de figuras retóricas se pretende consolidar imaginarios de justificación, legitimidad e identificación por parte de los receptores. Hecho que es repetitivo en todos los textos analizados. Los argumentos se producen de forma conducente y sobre la lógica de una coherencia que toma como elemento transversal -para tratar temas domésticos y exteriores- el liderazgo de los EEUU como potencia en términos económicos, políticos, pero también en término de valores y reafirmación de conductas. Siguiendo esta lógica Bill Clinton declara:

Compatriotas, quiero construir un puente hacia el siglo 21 que asegure que seguimos siendo la nación con la defensa más fuerte del mundo, que nuestra política exterior todavía promueve nuestros valores en la comunidad de naciones. Nuestro puente hacia el futuro

debe incluir puentes hacia otras naciones, porque seguimos siendo la nación indispensable del mundo para avanzar en la prosperidad, la paz y la libertad y para mantener a nuestros propios niños a salvo de los peligros del terrorismo y las armas de destrucción masiva (Remarks at the Democratic National Convention, 1996). (Traducción libre)

Aunque este discurso por el objeto que propone no resulta determinante en el análisis de los DDHH, sí es fundamental en la lectura conjunta de las proposiciones en el periodo Clinton. Se trata de la reafirmación manifiesta de los valores y principios de la democracia. En este marco, se menciona a Cuba como uno de los casos enigmáticos de necesaria transformación: “Cuba debe finalmente unirse a la comunidad de las democracias” (Remarks at the Democratic National Convention, 1996) (Traducción libre). Esto indica que aunque no se menciona expresamente el tema de los DDHH en Cuba, sí se recoge en la manera en la que hasta el momento se han construido los postulados discursivos en el periodo estudiado.

Documento: *Apoyo a la Transición Democrática en Cuba*. Este documento es publicado el 28 de enero de 1997 y resulta ser uno de los más determinantes para el caso objeto de estudio ya que desarrolla amplia y descriptivamente parte de las disposiciones de la Ley Helms-Burton.

En esta emisión se hace manifiesta la relación proporcional en el tratamiento del tema de los DDHH y las sanciones en contra de Cuba. El texto dedica todo un acápite a mencionar cómo el régimen de Fidel Castro no responde a los estándares propios de los DDHH, pero limitando el término a una sola dimensión: las libertades políticas y civiles. Manifestación de esto es que cuando se apela al respeto o garantía de los derechos se hace mención de los parámetros de democracia liberal vigente en EEUU, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Aunque estos postulados resultan fundamentales, se excluye de la discusión todo un conglomerado de derechos que no pueden valorarse de forma aislada unos de otros. Así podría resultar apresurado justificar una sanción de la índole del embargo económico solo en el marco de reivindicación de una categoría de derechos, esto se traduce en la instrumentalización clara de los postulados y principios que se recogen y abre la posibilidad de rebatir la legitimación de la medida.

El contenido del discurso revela una posición ideológica clara que se respalda en algunas teorías como, por ejemplo: el liberalismo político y concretamente en la dimensión

de las relaciones internacionales. Un ejemplo de ello es la apología que se construye en torno a la *paz democrática* (Elías & Sutch, 2007), que apela a la paz y a la disminución de riesgos en términos de relaciones entre Estados que se erigen bajo postulados democráticos. El texto se carga de simbolismos que tienden a justificar las acciones norteamericanas, a legitimar sus alcances intervencionistas y a reafirmar su capacidad impositiva en términos de valores y expectativas. Tal y como se leería desde Gramsci, como evidencia de una acción de imposición hegemónica.

Lo que resulta en términos de análisis discursivo de los DDHH es una evidencia de cómo el concepto se construye como parte de una producción semántica que pretende situar decisiones políticas en escenarios de amplia aceptación y tolerancia, esto considerando que resulta poco probable un juicio negativo sobre una acción que se legitima por medio del discurso de los DDHH.

3.3 ¿Uso alternativo del discurso de los DDHH, en el marco del *Embargo Económico* de EEUU a Cuba?

Las proposiciones propias del ACD sitúan en una posición altamente relevante el uso alternativo del discurso como respuesta a mecanismos de imposición. Esta posibilidad, en términos de Gramsci, correspondería a objetivos de control político, moral e intelectual. En este orden, se torna indispensable analizar la respuesta por parte del actor al que se le impone el discurso, a fin de contemplar las efectivas posibilidades de emplear herramientas de doble vía, es decir, hacer uso de los mismos mecanismos de los que se vale el discurso dominante para no solo responder sino consolidar acciones que brinden un campo de acción claro y tendiente a materializar cambios y transformaciones.

Atendiendo a esta lógica, se examinó el texto tanto de presentación como de contenido de la Ley 80 “De la reafirmación de la dignidad y la soberanía cubanas” (1996). Esta norma es expedida por el Estado cubano en 1996 como respuesta a la Ley Helms – Burton y tiene por objeto reafirmar el carácter soberano de Cuba como Estado y su condición de igualdad, por lo menos en términos formales, con los EEUU.

Con el fin de comprender en mayor proporción este asunto, se acude a Boaventura de Sousa Santos, quien construye una propuesta que, desde el concepto de hegemonía,

desarrolla una transformación fundamentada en la misma vía adoptada para reproducir factores de imposición. Se trata del *hecho contra-hegemónico*, como cambio en la dirección política dominante (Santos, 2002).

Esto se traduce en la necesidad de eliminar ciertas ideas homogeneizadoras e iniciar un diálogo entre diferentes, a fin de hallar puntos mínimos comunes de interacción, sobre la base del reconocimiento del otro y de las particularidades como elemento enriquecedor en las relaciones sociales.

Para materializar esta proposición es posible pensar en los DDHH como herramienta de construcción de sujetos empoderados o desempoderados, tal y como lo menciona Ariadna Estévez López, aludiendo a que “los derechos humanos se consideran una construcción social e histórica en la que los sujetos sociales son fundamentales y donde se disputa la posesión de significados tales como la libertad, democracia y justicia social” (2010). Esta postura revalida la idea de la construcción de los DDHH más allá de la mera herramienta jurídica y los consolida en la dimensión discursiva en donde el significado es construido socialmente a fin de priorizar ciertas representaciones.

Por esta última razón es que los DDHH devienen en una herramienta potencialmente emancipadora, el contenido discursivo de los mismos puede ser completado a fin de construir lingüísticamente una posición política de interpretación a favor de quienes son excluidos o estigmatizados (Estévez, 2010).

A pesar de lo anterior, es posible observar que la respuesta cubana a la sanción no apela a este elemento como punto central. Por el contrario, sus esfuerzos se dirigen a cuestionar la naturaleza capitalista de los EEUU y, en ese orden, sus argumentos acuden al sistema económico y a la reivindicación de la propiedad como puntos antagónicos entre la política norteamericana y la de la Isla.

4. CONCLUSIONES

El objetivo que impulsó esta investigación era analizar la manera en que se instrumentalizan los DDHH, por medio de una construcción discursiva, como mecanismo de legitimación del embargo económico que recae contra Cuba desde los años 60's, durante el periodo presidencial de Bill Clinton. Con base en esto, se desarrolló una contextualización del origen de la medida y de allí en adelante un análisis que desde el ACD retoma conceptos como el de hegemonía y contra-hegemonía.

Derivado de dicho análisis es posible precisar algunas conclusiones, en primer lugar, es necesario resaltar la importancia que cobró la sanción en el periodo de gobierno del presidente Bill Clinton (1993 – 2001). En este lapso, el embargo cobra una relevancia tal que se reinscribe en la agenda tanto nacional como internacional. La aprobación de la norma jurídica que formaliza la medida por parte del Parlamento y el respaldo brindado por el ejecutivo derivó en un escalamiento de la sanción, que inscribe las relaciones cubano-estadounidenses en la coyuntura. En este proceso incidió de manera determinante la construcción discursiva que se empleó para justificar y legitimar la sanción. Se confirma el carácter hegemónico, que circunscribe el bloqueo económico por parte de los EEUU a Cuba. Esto siempre que la hegemonía se manifiesta en la consecución de un liderazgo moral, intelectual y político, por medio de un discurso que fija un significado concreto alrededor de algún asunto (Giacaglia, 2002). En este caso una medida sancionatoria que revela el reclamo por parte de los EEUU sobre el “derecho de establecer el marco del sistema político y económico que puede tolerarse al interior de Cuba” (Roy, 2000, p. 6).

Este carácter involucra, por un lado, una dimensión política y, por el otro, una ideológica. Se apela a la defensa de unos intereses específicos, pero simultáneamente se impone una posición cargada de simbolismos que, desde Gramsci, puede leerse como una herramienta para impulsar control, no desde la fuerza, sino desde la consolidación de convicciones en el imaginario colectivo.

Lograr posicionar este tipo de discurso requiere contar con una herramienta idónea que permita la identificación y la aprehensión de los postulados, es esta la razón por la que se apela a los DDHH como mecanismo legitimador. Sin embargo, la operación de estas

prerrogativas no tiene lugar desde la dimensión meramente jurídica. Al entenderse como constructos históricos, cargados de interpretación y ánimo de reivindicación, los DDHH pueden ser politizados. En el caso concreto de las relaciones de EEUU y Cuba esto se manifiesta en que el debate excluye la dimensión de integralidad de los DDHH y se limita a lo que atiende a las libertades individuales, el derecho a la propiedad, y otros que se sitúan en lo que se conoce como derechos de primera generación. Esto indica que se dejan de lado muchas tantas prerrogativas, que resultan esenciales si la intención es emplear los DDHH como elemento conceptual (Gratius, 2008).

La manifestación más clara de lo anterior es que tras el ejercicio de análisis discursivo desarrollado en esta monografía, encontramos que desde la Ley Helms-Burton, y desde los pronunciamientos oficiales, se condiciona la finalización de la sanción no a la mejora en garantías y reconocimiento de derechos en el Estado cubano, sino a su cambio de régimen político y económico. Esto se revela una instrumentalización del discurso, en la que se sobrepone una intención particular, la reafirmación de la democracia liberal y de la economía de libre mercado.

El embargo económico resulta ser un instrumento hegemónico que desde su origen se incluye en las dinámicas de diálogo político, argumentando que “la armonía entre las repúblicas americanas sólo puede ser efectiva en tanto que el respeto de los DDHH y las libertades fundamentales sean una realidad” (Camargo, 1996, p. 68). Por medio de un ejercicio de control político, intelectual y moral que se extiende al ámbito internacional y permea las políticas nacionales, se quiere dar cabida a un intento de imposición que no necesariamente involucra la coacción física por medio de instrumentos militares, sino que, por el contrario, se vale de elementos como la ideología para constituir un entramado de conceptos que recojan la voluntad colectiva (Giacaglia, 2002, p. 153) y terminen sancionando las dinámicas sociales, entre las que se encuentra la dimensión económica y diplomática de Cuba.

Sin embargo, la misma vía que propone a los DDHH como instrumento impositivo permite que dentro de los sistemas políticos estos derechos sean empleados como respuesta contra la dominación de estructuras, instituciones y prácticas tradicionales o incluso entes externos. En otros términos, “los derechos humanos tienen una doble condición: ser

dinámicas sociales que impulsan la acción frente a la generalización de las relaciones (sociales, políticas, económicas y culturales dominantes), y ser marcos y esquemas de acción y pensamiento alternativos a esas relaciones” (Perdomo Castaño, 2011, p. 66).

Dicha definición abre la posibilidad para un uso alternativo del discurso, uno en el que por medio de estos principios, reconocidos por el derecho internacional, se reconstruya una dimensión reivindicatoria a favor de Cuba como Estado, que aunque materialmente desigual en términos de influencia e incidencia frente a los EEUU, formalmente goza de igual reconocimiento en cuanto a soberanía y libre determinación.

A pesar de la posibilidad de usar alternativamente el discurso de los DDHH, desde la respuesta cubana estos no resultan determinantes en un análisis contextual de la sanción impuesta por la Ley Helms-Burton. Este hecho supone el desconocimiento de una amplia posibilidad discursiva de empoderamiento tal y como se ha expuesto, y se presenta como una alternativa de acción para futuros escenarios de crisis, que hoy se sitúan en un panorama completamente diferente por la determinación del gobierno Obama de poner fin a la sanción, después de más de 50 años.

Lo anterior reposiciona el tema en la esfera internacional y responde a diferentes observaciones, es posible que la determinación por parte de los EEUU se deba no solo a las transformaciones que internamente ha tenido el régimen cubano, sino también a las posiciones de la comunidad internacional que reiteradamente ha manifestado su contraposición con la sanción en la ONU.

Este nuevo panorama permite reflexionar sobre cuál habría sido el papel de los DDHH desde la perspectiva de Cuba, teniendo en cuenta que la imposición del embargo repercutió de manera determinante en la posibilidad de progresión en la garantía de derechos y en consecuencia, constituía un argumento claro de contraposición a los EEUU y de empoderamiento. Sin embargo, ahora el proceso comienza un nuevo nivel en el que se hace necesario estar presto a una lectura crítica de lo que significa y representa la apertura en términos diplomáticos de las relaciones entre estos Estados.

BIBLIOGRAFÍA

- Aristizabal, S. (2010). *La doctrina Monroe y el intervencionismo estadounidense*. Buenos Aires: Universidad de Palermo.
- Barón, A., Del Carril, M., y Gómez, A. (1993). *Bill Clinton: Las claves de su gobierno*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- Bleitrach, D. y Dedaj, V. (2005). *Cuba es una isla*. España : El viejo Topo.
- Camargo, P. P. (1996). *Derechos Humanos y Democracia en América Latina: Análisis Crítico* . Bogotá : Leyer.
- Chomsky, N. (2002). *El Terror como Política Exterior de Estados Unidos*. Argentina: Libros del Zorzal.
- Chomsky, N. (1999). *La Quinta Libertad: La intervención de los Estados Unidos en América Central y la lucha por la paz*. Barcelona : Crítica.
- Chomsky, N. (2004). La gran estrategia imperial. En N. Chomsky, *Hegemonía o Supervivencia. El dominio mundial de EEUU*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Van Dijk, T. (1996). *Estructuras y Funciones del Discurso: Una introducción interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los estudios del discurso*. (M. Gann, y M. Mur, Trads.) México D. F.: Siglo XXI Editores.
- Embajada de la República de Cuba. (2004). *Cuba y su defensa de todos los derechos humanos para todos*. Bogotá : Embajada de la República de Cuba.

Gaspar, E. (1989). *La Diplomacia y Política Norteamericana en América Latina*. Bogotá: CEREC, Universidad Externado de Colombia.

Gramsci, A. (2001). *Cuadernos de la Carcel* . México D.F.: Ediciones Era.

Hernández, Á. L. (2008). *¿Todo o nada? Principio de integralidad y derechos sociales*. Bogotá: ILSA - Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo.

Laclau, E. y Mouffe, C. (2004). *Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalización de la democracia*. México D. F. : Fondo de Cultura Económica .

Perdomo Castaño, C. A. (2011). *Derechos Fundamentales a Medias e Integralidad de Derechos* . Bogotá: Defensoría del Pueblo.

Roy, J. (2000). *Cuba, the United States and the Helms-Burton doctrine: International Reactions*. Florida: University Press of Florida.

Ruth Wodak, M. M. (2003). *Métodos de Análisis Crítico del Discurso*. Barcelona : Gedisa Editorial.

Capítulos o artículos en libro.

Abril, N. P. (2002). Análisis Crítico del Discurso. En R. A. Beaugrange, *Curso Internacional: Análisis del discurso en las ciencias sociales, la cultura y el territorio*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto Caro y Cuervo.

Chomsky, N. (2002). Cuba y el Gobierno Estadounidense: David contra Goliath. En N. Chomsky, *Estados Canallas: El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales* (págs. 109 - 119). Barcelona: Editorial Paidós.

Cortés Rodas, F. (2007). ¿Hay un conflicto insuperable entre la soberanía de los Estados y la protección de los derechos humanos? En F. Cortés Rodas, *Justicia global, derechos humanos y responsabilidad*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Elías, J. y Sutch, P. Liberalism, the basic. En J. Elías, y P. Sutch, *International Relations: The basics* (págs. 64 - 81). Nueva York: Routledge.

Leal, W. J. (2002). Análisis Crítico del Discurso. En R. A. Beaugrange, *Curso Internacional: Análisis del Discurso en las Ciencias Sociales, la Cultura y el Territorio*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto Caro y Cuervo.

Martins, C. (2007). Los impases de la hegemonía de Estados Unidos. Perspectivas para el siglo XXI. En M. Gandásegui, y C. E. Martins, *Crisis de hegemonía de Estados Unidos*. México D. F.: Siglo XXI, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Mouffe, C. (2009). Hegemonía e Ideología en Gramsci. En H. Suárez, *Antonio Gramsci y la realidad colombiana: Seminario* (págs. 167 - 227). Bogotá: Ediciones Foro Nacional por Colombia, 1991.

Suárez Salazar, L. (2007). Crisis y recomposición del sistema de dominación “global” de Estados Unidos: El “nuevo orden panamericano”. En M. Gandásegui, y C. E. Martins, *Crisis de hegemonía de Estados Unidos*. México D. F.: Siglo XXI, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Artículos en publicaciones periódicas académicas.

Alexndrovna, S. O. (agosto de 2013). Relations Between the USA and Cuba During Government of B. Clinton (1993–2001). *Teoría y práctica del desarrollo social* , 16 - 19.

- Alzugaray, C. (noviembre – diciembre de 2012). Las (inexistentes) relaciones Cuba-Estados Unidos en tiempos de cambio. *Nueva Sociedad* , 139 - 148.
- Brenner, P. P., Haney, P. J., y Vanderbush, W. W. (2002). The confluence of domestic and international interests: U.S. policy toward Cuba, 1998-2001. *International Studies Perspectives*, 3(2), 192-208.
- Bonet, A. (2009). Los Derechos Humanos como campo de luchas por la diversidad humana: Un análisis desde la sociología crítica de Boaventura de Sousa Santos. *Universitas Humanistica*, (68), 179-205.
- Cano Sosa, E., y Díaz Bravo, O. (2014). Influencia e impacto del bloqueo económico de los Estados Unidos de Norteamérica en la seguridad nacional cubana. *Revista de Ciencia Política* (21).
- Coll, a. R. (2007). Harming human rights in the name of promoting them: the case of the cuban embargo. *UCLA journal of international law & foreign affairs*, 12(2), 199.
- Dijk, T. V. (1999). El Análisis Crítico del Discurso. *Anthropos* , 186, 23 - 36.
- Dijk, T. V. (2005, Abril - Junio). Ideología y Análisis del Discurso. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 9-36.
- Estévez López, A. (2010). Construcción de sujetos (des)empoderados a través del discurso de los derechos humanos. *Norteamérica, Revista Académica del CISAN-UNAM* , 5 (1), 297-307.
- Falk, P. (1997). The US - Cuba agenda opportunity or stalemate. *Journal Of Interamerican Studies And World Affairs*, 39(1), 153-162.

- Giacaglia, M. (2002). Hegemonía. Concepto Clave para Pensar la Política. *Tópicos, Asociación Revista de Filosofía de Santa Fe* , 151 - 159.
- Gratius, S. (2008). Europa y Estados Unidos ante los Derechos Humanos en Cuba. *Araucaria, 10* (20), 175-193.
- López, A. (2010). Construcción de sujetos (des)empoderados a través del/de los discurso(s) de derechos humanos. Norteamérica: Revista Académica Del CISAN-UNAM, 5(1), 297-307.
- López-Levy, A. (septiembre de 2011). 'Chaos and Instability': Human Rights and U.S. Policy Goals in Cuba. *NACLA Report on the Americas*, 44(5) 16 – 18.
- López-Levy, A., Abrahams, H. S. (2010). Anything but human rights: us policy towards cuba under helms-burton. *International Journal Of Cuban Studies*, 2(3/4), 315.
- Ludlam, S. (2012). Regime Change and Human Rights: A Perspective on the Cuba Polemic. *Bulletin Of Latin American Research*, 110-126.
- McCrudden, C. (2008). Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights . *The European Journal of International Law* , 19 (4), 655 - 724.
- Petras, J., & Morley, M. (1996). Clinton's Cuba policy: two steps backward, one step forward. *Third World Quarterly*, 17 (2), 269 - 287.
- Reinisch, A. (1996). Widening the US Embargo Against Cuba Extraterritorially: A Few Public International Law Comments on the 'Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996'. *European Journal Of International Law*, 7(4), 545-562.

Rodríguez Prieto, R., & Seco Martínez, J. M. (2007). Hegemonía y Democracia en el siglo XXI ¿Por qué Gramsci? *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho* (15), 1 - 14.

Santos, B. d. (2002). Hacia una Concepción Multicultural de los Derechos Humanos. *El Otro Derecho*, 28, 59 - 83.

Segal, A. (diciembre de 1999). Sanciones económicas: límites jurídicos y políticos. *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 22 - 42.

Schoultz, L. (2009). Washington's Fourth Interest. *Latin Americanist*, 53(3), 141-157.

Vanderbush, W. W., y Haney, P. J. (1999). Policy toward Cuba in the Clinton administration. *Political Science Quarterly*, 114(3), 387-407.

Van den Berg, M. (1997). The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act: Violations of international law and the response of key american trade partners. *Maryland Journal of International Law*, 21 (2), 280 - 314.

Vanderbush, W. J. (2002). Clinton, Congress, and Cuba Policy Between Two Codifications; The Changing Executive-Legislative Relationship in Foreign Policy Making. *Congress & The Presidency*, 29(2), 171.

Weinmann, L. (2004). Washington's Irrational Cuba Policy. *World Policy Journal*, 21(1), 22-31.

Artículos en publicaciones periódicas no académicas.

El Mundo. (17 de Diciembre de 2014). *El Mundo*. Recuperado el 3 de Febrero de 2015, de Cuba, el embargo que comenzó Kennedy y endureció Bill Clinton:

<http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/12/17/5491c69222601dc9308b4575.html>

Revista Semana. (17 de Diciembre de 2014). Los once presidentes de la primera potencia que pelearon contra dos hermanos. *Revista Semana* , 1.

Entrevista.

Clinton, B. (8 de Noviembre de 2000). Bill Clinton on sanctions against Cuba. *Democracy Now*. (A. Goodman, Entrevistador)

Otros documentos.

Asamblea Nacional del Poder Popular, Cuba. (1997). Ley 80 de 1996: De la reafirmación y de la dignidad y la soberanía cubanas. Habana , Cuba .

Centre Europe - Tiers Monde CETIM. (SF de SF de 2003). *CETIM* . Recuperado el 04 de Diciembre de 2014, de Los Efectos del embargo des los Estados Unidos contra Cuba y las razones de la necesidad urgente se su levantamiento: <http://www.cetim.ch/es/interventions/202/los-efectos-del-embargo-des-los-estados-unidos-contr-cuba-y-las-razones-de-la-necesidad-urgente-se-su-levantamiento>

Clinton, B. (1997). Support for a democratic transition in Cuba: Report to the Congress. Washington , EEUU.

Clinton, B. (20 de Enero de 1993). First Inaugural . Washington.

Clinton, B. (29 de Agosto de 1996). Remarks at the democratic national convention. Chicago.

Clinton, B. (12 de Marzo de 1996). Statement on Signing the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act . Washington.

Clinton, B. (20 de Enero de 1997). Second Inaugural. Washington.

Congress USA. (1996). Helms-Burton Act. Washington.

Dallanegra Pedraza, L. (1999). *Política Internacional*. Recuperado el 22 de Abril de 2013, de Cronograma de Represalias Económicas de EUA contra Cuba: <http://luisdallanegra.bravehost.com/cronocub.htm>

Gonzales, P. (2009). Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Cátedra Gerardo Molina. Bogotá: Ed. Kimpres, Universidad Libre de Colombia.

Haney, P. Vanderbush, W. (2005) The Cuban embargo: the domestic politics of an American foreign policy. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press. 222.

Núñez Palacios, S. (Abril de 1998). Clasificación de los Derechos Humanos. *Derechos Humanos, Órgano Informativo de la Comisión de DDHH del Estado de México* , 103 - 108.

Rodríguez Trujano, E. (2005). *Jurídicas UNAM*. Recuperado el 14 de Septiembre de 2014, de: Cuatro Modelos de Derechos Humanos: <http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/filyder/pdf/discurso.pdf>

Roy, J. (2009). The Cuban revolution (1959-2009): Relations with Spain, the European Union, and the United States. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 272.

ANEXOS

Anexo 1. Tabla. Actor y Contexto del Discurso

Discurso / Declaración		Actor Participante	Contexto de Emisión
Discurso inaugural: Primer periodo presidencial*	1993	Bill Clinton	El 20 de enero de 1993, tiene lugar la posesión del primer presidente electo tras la finalización de la guerra fría. Como punto adicional, milita en el partido demócrata norteamericano, hecho que resulta relevante dados los antecedentes en términos de gobierno que en los EEUU se prolongaron durante 12 años en cabeza del partido republicano.
Declaración: Firma de la Ley Helms – Burton / Libertad Act*	Marzo de 1996	Bill Clinton	La también denominada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, es el mecanismo empleado para fortalecer, intensificar y extrapolar a la órbita internacional las sanciones en contra de la Isla, que encuentran su origen en la década de los 60's. La firma de esta disposición tiene lugar luego del derribo de dos aviones civiles por parte de la Fuerza Aérea cubana.
Observaciones en el marco de la Convención Demócrata*	Agosto de 1996	Bill Clinton	La convención demócrata se celebra en 1996 y tiene como objetivo elegir a los candidatos demócratas para las elecciones celebradas en noviembre del mismo año. Los postulados son Bill Clinton y Al Gore, quienes venían desempeñando los roles de presidente y vicepresidente, respectivamente. En este escenario el presidente electo se pronuncia públicamente a fin de señalar las líneas de acción de su futuro gobierno.
Discurso inaugural: Segundo periodo presidencial	1997	Bill Clinton	El segundo discurso inaugural de Bill Clinton se da en el marco de su reelección como presidente de los EEUU en 1997. Concentra sus esfuerzos en reivindicar el carácter de liderazgo de Norteamérica y allí se hace hincapié en la continuidad de directrices gubernamentales.
Documento: Apoyo a la transición democrática en Cuba.*	1997	Bill Clinton Congreso de los EEUU	Tras la aprobación de la Ley Helms-Burton es necesario poner en conocimiento público las directrices de acción y aplicación de la norma. Por este motivo, el congreso de los EEUU junto con el entonces presidente, proponen una suerte de elementos que conducen no solo a la justificación de la necesidad de la Ley, sino también a algunos factores que facilitan la lectura de las relaciones que entonces se consolidaron entre ambos Estados. Esta acción da respuesta a discusiones políticas que para entonces rodeaban la aplicabilidad de la norma.
Entrevista:	2000	Bill Clinton	Tiene lugar una entrevista televisada en el año 2000 al

Sanciones en
contra de Cuba

presidente de los EEUU, a fin de profundizar en su posición respecto de las relaciones con Cuba y las restricciones operantes en contra de la Isla, producto de la aprobación y aplicación de la Ley Helms – Burton. En este caso, se trata de un pronunciamiento aparentemente informal en donde el mandatario señala algunas posturas de índole personal respecto a la medida.

*** Discursos seleccionados para el análisis**

Anexo 2. Tabla. Análisis Crítico del Discursivo

Análisis Discursivo – Primer Discurso Inaugural	
Fecha del Discurso	Enero 20 de 1993
Forma Discursiva	Declaración verbal
Actor – Emisor	Bill Clinton
Receptor	Ciudadanos y residentes norteamericanos
Análisis Contextual	
El contexto en el que se circunscribe el discurso inaugural de Bill Clinton está íntimamente relacionado con la superación de la <i>Guerra Fría</i>, en la medida en que resulta ser el primer presidente electo tras la ocurrencia de una suerte de fenómenos que polarizaron el mundo bajo dos perspectivas políticas contrapuestas. Este hecho se complementa con una nueva visión de gobierno, propuesta que impulsa la campaña de Clinton, pero que además permite el acceso al poder político en los EEUU por parte del partido demócrata, que tras 12 años de control republicano finalmente logra hacerse a un mandato presidencial que se prolongaría durante dos periodos. A raíz de estos dos elementos, es necesario pensar el primer discurso inaugural de Clinton como una herramienta semántica que propende por impulsar el espíritu norteamericano, pero también por reivindicar el carácter de potencia que tras la caída del comunismo se consolida en el imaginario social. Allí, se hace hincapié en los retos y nuevos riesgos que implica el orden mundial que se configura para la época. Bajo esta perspectiva, por medio del discurso emitido, se pretende impulsar el sentido de la renovación y la reconstrucción del país, ello valiéndose de la reivindicación de los ideales propios de la democracia liberal y el poder que estas ideas involucran. Así se abre la puerta para nuevos escenarios de intervención, desde la lógica de <i>América</i> como nación abanderada de la universalización de los postulados tanto democráticos como liberales. En este marco cobra gran relevancia el tema de los derechos humanos, que aunque no calan en la literalidad del texto, se encuentran presentes como elemento transversal dentro del marco contextual que rodea tanto la elección presidencial como la emisión del discurso de posesión. Esta afirmación atiende a la agenda internacional que para entonces sitúa el tema como elemento determinante en las relaciones entre Estados.	
Análisis Textual	
El texto en el que se recoge la alocución presidencial de Bill Clinton, en el momento de su posesión, posee una suerte de características que se reflejan en el texto y que obligan, en el marco de este análisis, a situarlo en algunas categorizaciones que facilitan no solo la valoración de su dimensión gramatical y estructural, sino también de sus alcances en términos de incidencia. Esto considerando el contexto de la emisión y la naturaleza de los términos que, desde los hilos de coherencia propuestos, transmiten un mensaje que pretende calar en el nivel intelectual de los receptores. Traducción de esto es no solo la dimensión que postula la teoría del <i>análisis crítico del discurso</i>, sino también el inicio de un proceso de relación con la idea de hegemonía de Gramsci.	
Estructura Argumentativa	
La estructura argumentativa que propone el texto se enfoca en la reafirmación de algunos postulados apelando a relaciones causales y a principios de valor. Así, se vale de figuras retóricas que proponen no solo estructurar los argumentos, sino también impactar en la audiencia, incrementando el nivel de identidad nacional y simultáneamente impulsando un sentido de acción en los ciudadanos. De este modo, se retoman algunos elementos históricos en los que resalta el ideal mesiánico de los EEUU y el carácter de potencia que ha venido consolidándose aún más con la “victoria” sobre el comunismo, entre otros. El argumento central tiende a promover un sentido de renovación, pero también desafía a los	

receptores a tomar parte activa de las acciones, siempre desde la generalización y pretensión de universalización de la democracia.

De esta manera, se apela a la autoridad como elemento característico de la interlocución, el emisor ahora se manifiesta no como individuo sino como representante de un poder global que se auto-faculta para intervenir en casos en los que su autoridad, posición e ideal se ponga en riesgo. Sin embargo, la estructura del texto permite encontrar una apelación constante al sentido de individualidad y a la reflexión en la que se prioriza el valor de las ideas y su alcance en las transformaciones que trascienden de la órbita nacional.

Se hace manifiesto un hilo de coherencia y una relación constante de elementos variables que pasan por asuntos netamente domésticos a hechos o acciones en la dinámica internacional, esto siempre teniendo en cuenta el carácter de renovación y transformación que se espera con la llegada de un mandatario demócrata, que además llega al poder en el marco de una reivindicación clara de los derechos y libertades liberales, triunfantes tras el fin de la *guerra fría*.

Significados del Discurso

Los significados que propone el discurso son diversos en la medida en que abarca temas de diferente orden. A pesar de ello, resulta claro que el objetivo central del texto es impulsar a un cambio y una renovación en Norteamérica que permita la reconstrucción y la reafirmación de los ideales tradicionales de la democracia, representada por su abanderado, los EEUU.

El objeto primordial de la alocución es resaltar los ideales de libertad y democracia, partiendo de la idea de renovación, cambio y empoderamiento en las lógicas propias de este modelo de gobierno. Se promueve una interiorización de ideas y la materialización de las mismas por medio de acciones voluntarias. Así, resulta conducente afirmar que el significado último del discurso apela por la reproducción ideológica de una postura que por medio de la repetición y la reafirmación de ideas (como por ejemplo la renovación de América), calan en el razonamiento de los individuos y en ese orden los dirigen a asumir una postura cotidiana de conformidad con lo propuesto.

Se trata de emplear un lenguaje emotivo y común que impulse la aprehensión de los postulados y su producción y reproducción en otros escenarios de interacción discursiva.

Vocabulario que Expresa Relaciones de Poder

- [...] *“And I thank the millions of men and women whose steadfastness and sacrifice triumphed over depression, fascism, and communism” [...]*
- [...] *“Today, a generation raised in the shadows of the cold war assumes new responsibilities in a world warmed by the sunshine of freedom but threatened still by ancient hatreds and new plagues” [...]*
- [...] *“Our democracy must be not only the envy of the world but the engine of our own renewal. There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America” [...]*
- [...] *“To renew America, we must revitalize our democracy” [...]*
- [...] *“There is no longer a clear division between what is foreign and what is domestic. The world economy, the world environment, the world AIDS crisis, the world arms race: they affect us all. Today, as an older order passes, the new world is more free but less stable. Communism's collapse has called forth old animosities and new dangers. Clearly, America must continue to lead the world we did so much to make” [...]*
- [...] *“When our vital interests are challenged or the will and conscience of the international community is defied, we will act, with peaceful diplomacy whenever possible, with force when necessary” [...]*
- [...] *“But our greatest strength is the power of our ideas, which are still new in many lands. Across the world we see them embraced, and we rejoice. Our hopes, our hearts, our hands are with those on every continent who are building democracy and freedom. Their cause is*

America's cause" [...]

Frases como las postuladas anteriormente, evidencian claras relaciones de poder en las que aún permanece vigente el espíritu propio del uso de la fuerza, pero en donde se apela prioritariamente al elemento intelectual (señalado por Gramsci) como punto de inflexión entre lo relevante y adecuado, y lo que puede dejarse en un segundo plano. Se emplea un ejercicio de apropiación de términos y con ello significados tales como la democracia, se habla en nombre de ella, desde los intereses propios de los EEUU y además se apela a su defensa como mecanismo de intervención.

En definitiva, el mensaje resulta evidente si se lee el discurso desde el contexto inicialmente presentado. EEUU se propone como la potencia vencedora en la guerra contra el comunismo y se posiciona como autoridad en la esfera internacional. Esto desde el convencimiento colectivo, legitima acciones de intervención tales como, lo que más adelante sería, el *embargo* a Cuba.

Acontecimientos que Impulsan el Discurso

- Elección de Bill Clinton como presidente de los EEUU en el periodo de 1993 a 1997.

Elementos Relevantes

- No se hace mención manifiesta a los Derechos Humanos.
- No se hace mención de Cuba como elemento determinante en la nueva administración.
- El discurso se consolida como un constante llamado al cambio y a la renovación.
- Se llama a la acción y el empoderamiento ciudadano por medio de la reproducción de ideales tradicionales en los EEUU.
- Se reivindica el carácter mesiánico de los EEUU, desde la órbita de la libertad y la democracia como forma de gobierno tendiente a la universalización.
- Del contexto y la estructura discursiva es posible leer un mensaje de imposición desde la perspectiva de control intelectual y moral propuesta por Gramsci. Se apela a la consideración de los valores tradicionales y a la defensa y promoción de objetivos nacionales tanto en la esfera interna como en la esfera global.

Texto del Discurso

**First Inaugural (January 20, 1993)
Bill Clinton**

My fellow citizens, today we celebrate the mystery of American renewal. This ceremony is held in the depth of winter, but by the words we speak and the faces we show the world, we force the spring, a spring reborn in the world's oldest democracy that brings forth the vision and courage to reinvent America. When our Founders boldly declared America's independence to the world and our purposes to the Almighty, they knew that America, to endure, would have to change; not change for change's sake but change to preserve America's ideals: life, liberty, the pursuit of happiness. Though we marched to the music of our time, our mission is timeless. Each generation of Americans must define what it means to be an American.

On behalf of our Nation, I salute my predecessor, President Bush, for his half-century of service to America. And I thank the millions of men and women whose steadfastness and sacrifice triumphed over depression, fascism, and communism.

Today, a generation raised in the shadows of the cold war assumes new responsibilities in a world warmed by the sunshine of freedom but threatened still by ancient hatreds and new plagues. Raised in unrivaled prosperity, we inherit an economy that is still the world's strongest but is weakened by business failures, stagnant wages, increasing inequality, and deep divisions among our own people.

When George Washington first took the oath I have just sworn to uphold, news traveled slowly across the land by horseback and across the ocean by boat. Now, the sights and sounds of this ceremony are broadcast instantaneously to billions around the world. Communications and commerce are global. Investment is mobile. Technology is almost magical. And ambition for a better life is now universal.

We earn our livelihood in America today in peaceful competition with people all across the Earth. Profound and powerful forces are shaking and remaking our world. And the urgent question of our time is whether we can make change our friend and not our enemy. This new world has already enriched the lives of millions of Americans who are able to compete and win in it. But when most people are working harder for less; when others cannot work at all; when the cost of health care devastates families and threatens to bankrupt our enterprises, great and small; when the fear of crime robs law-abiding citizens of their freedom; and when millions of poor children cannot even imagine the lives we are calling them to lead, we have not made change our friend.

We know we have to face hard truths and take strong steps, but we have not done so; instead, we have drifted. And that drifting has eroded our resources, fractured our economy, and shaken our confidence. Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Americans have ever been a restless, questing, hopeful people. And we must bring to our task today the vision and will of those who came before us. From our Revolution to the Civil War, to the Great Depression, to the civil rights movement, our people have always mustered the determination to construct from these crises the pillars of our history. Thomas Jefferson believed that to preserve the very foundations of our Nation, we would need dramatic change from time to time. Well, my fellow Americans, this is our time. Let us embrace it.

Our democracy must be not only the envy of the world but the engine of our own renewal. There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America. And so today we pledge an end to the era of deadlock and drift, and a new season of American renewal has begun.

To renew America, we must be bold. We must do what no generation has had to do before. We must invest more in our own people, in their jobs, and in their future, and at the same time cut our massive debt. And we must do so in a world in which we must compete for every opportunity. It will not be easy. It will require sacrifice, but it can be done and done fairly, not choosing sacrifice for its own sake but for our own sake. We must provide for our Nation the way a family provides for its children.

Our Founders saw themselves in the light of posterity. We can do no less. Anyone who has ever watched a child's eyes wander into sleep knows what posterity is. Posterity is the world to come: the world for whom we hold our ideals, from whom we have borrowed our planet, and to whom we bear sacred responsibility. We must do what America does best: offer more opportunity to all and demand more responsibility from all. It is time to break the bad habit of expecting something for nothing from our Government or from each other. Let us all take more responsibility not only for ourselves and our families but for our communities and our country.

To renew America, we must revitalize our democracy. This beautiful Capital, like every capital since the dawn of civilization, is often a place of intrigue and calculation. Powerful people maneuver for position and worry endlessly about who is in and who is out, who is up and who is down, forgetting those people whose toil and sweat sends us here and pays our way. Americans deserve better. And in this city today there are people who want to do better. And so I say to all of

you here: Let us resolve to reform our politics so that power and privilege no longer shout down the voice of the people. Let us put aside personal advantage so that we can feel the pain and see the promise of America. Let us resolve to make our Government a place for what Franklin Roosevelt called bold, persistent experimentation, a Government for our tomorrows, not our yesterdays. Let us give this Capital back to the people to whom it belongs.

To renew America, we must meet challenges abroad as well as at home. There is no longer a clear division between what is foreign and what is domestic. The world economy, the world environment, the world AIDS crisis, the world arms race: they affect us all. Today, as an older order passes, the new world is more free but less stable. Communism's collapse has called forth old animosities and new dangers. Clearly, America must continue to lead the world we did so much to make.

While America rebuilds at home, we will not shrink from the challenges nor fail to seize the opportunities of this new world. Together with our friends and allies, we will work to shape change, lest it engulf us. When our vital interests are challenged or the will and conscience of the international community is defied, we will act, with peaceful diplomacy whenever possible, with force when necessary. The brave Americans serving our Nation today in the Persian Gulf, in Somalia, and wherever else they stand are testament to our resolve. But our greatest strength is the power of our ideas, which are still new in many lands. Across the world we see them embraced, and we rejoice. Our hopes, our hearts, our hands are with those on every continent who are building democracy and freedom. Their cause is America's cause.

The American people have summoned the change we celebrate today. You have raised your voices in an unmistakable chorus. You have cast your votes in historic numbers. And you have changed the face of Congress, the Presidency, and the political process itself. Yes, you, my fellow Americans, have forced the spring. Now we must do the work the season demands. To that work I now turn with all the authority of my office. I ask the Congress to join with me. But no President, no Congress, no Government can undertake this mission alone.

My fellow Americans, you, too, must play your part in our renewal. I challenge a new generation of young Americans to a season of service: to act on your idealism by helping troubled children, keeping company with those in need, reconnecting our torn communities. There is so much to be done; enough, indeed, for millions of others who are still young in spirit to give of themselves in service, too. In serving, we recognize a simple but powerful truth: We need each other, and we must care for one another.

Today we do more than celebrate America. We rededicate ourselves to the very idea of America, an idea born in revolution and renewed through two centuries of challenge; an idea tempered by the knowledge that, but for fate, we, the fortunate, and the unfortunate might have been each other; an idea ennobled by the faith that our Nation can summon from its myriad diversity the deepest measure of unity; an idea infused with the conviction that America's long, heroic journey must go forever upward.

And so, my fellow Americans, as we stand at the edge of the 21st century, let us begin anew with energy and hope, with faith and discipline. And let us work until our work is done. The Scripture says, "And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not." From this joyful mountaintop of celebration we hear a call to service in the valley. We have heard the trumpets. We have changed the guard. And now, each in our own way and with God's help, we must answer the call.

Thank you, and God bless you all.

Análisis Discursivo – Sanción presidencial de la Ley Libertad	
Fecha del Discurso	Marzo 12 de 1996
Forma Discursiva	Declaración verbal
Actor – Emisor	Bill Clinton
Receptor	Ciudadanos y residentes norteamericanos
Análisis Contextual	
La firma de la denominada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, o también llamada Helms-Burton, tiene lugar en el año de finalización del primer periodo presidencial de Bill Clinton. El marco contextual en el que se circunscribe la firma de esta norma es el derribo en el mes de febrero de dos avionetas pertenecientes a la organización <i>Hermanos al Rescate</i>. Esta acción fue desarrollada por la Fuerza Aérea cubana, tras advertencias previas porque las actividades de la organización (sobrevuelos por la ciudad de la Habana y acciones de propaganda antigubernamental) resultaban violatorias a la soberanía y el espacio aéreo de la Isla. Así las cosas, el 24 de febrero de 1996 tiene lugar la caída de dos avionetas y las explicaciones del derribamiento resultan en diferentes teorías, pues desde la oposición se afirma que la acción se concretó en aguas internacionales, mientras que las posturas oficiales justifican el acto porque las aeronaves se encontraban en cielo cubano sin autorización previa. Así, la intención existente desde 1995 (elaboración y puesta en discusión del proyecto de Ley en el parlamento) de endurecer, fortalecer e incluso legalizar formalmente las sanciones en contra de Cuba, entra en la agenda política norteamericana y facilita la construcción argumentativa tendiente a justificar el recrudecimiento y la internacionalización de la sanción. El efecto político es entonces el escalamiento del Bloqueo Económico en contra de Cuba dentro del nivel legislativo de los EEUU. Deja de ser un Reglamento Federal y se convierte en Ley del Congreso, incrementando no solo el carácter vinculante de la misma, sino también la importancia en términos sociales de contar con una norma jurídica que incida de manera directa en el desarrollo político, económico y gubernamental de otro Estado. En este marco, es posible extrapolar el análisis a la dimensión política y de transición que se experimentaba en los EEUU para el momento de la firma del documento. En primer lugar, es necesario recordar que el texto de la norma no fue propuesto como consecuencia del ataque a las aeronaves, sino que, por el contrario, venía gestándose como política de Estado dentro del parlamento. Así, lo que sucede es su priorización en el marco de una nueva campaña presidencial, liderada por el entonces presidente Bill Clinton. Varios de los análisis del tema, señalan que los opositores al régimen de Castro, que logran una gran mayoría en el Estado de Florida y que además han estado históricamente aliados con el partido republicano, inician acciones de presión que obligan a la toma de una decisión política estratégica (Petras y Morley, 1996). El propósito giraba en torno a lograr la adhesión de este sector, tradicionalmente conservador, por medio de una acción puntual que respondiera a sus demandas y expectativas como respuesta al estado de cosas operante en Cuba. Se parte de la base de que Bill Clinton, actuando paradójicamente desde su posición demócrata, toma la decisión de apoyar y respaldar el proyecto de Ley y posteriormente su aplicación. En este marco coyuntural, una posible reelección, la necesidad de responder a los ataques en contra de la organización <i>Hermanos al Rescate</i> y la continuidad de una política de relaciones cubano-americanas que alcanza un grado de política de Estado, llevaron al entonces presidente a firmar la norma y a declarar públicamente los alcances de la misma. De allí en adelante, los efectos de la sanción de la Ley, en términos de relaciones entre ambos Estados, se concentran en un grado mayor de hostilidad política y de déficit en materia económica.	

Tal situación degeneró en amplios cuestionamientos por parte de la comunidad internacional e incluso de Estados aliados que encontraron la medida no solo desproporcional sino también violatoria de los principios del derecho internacional (Revisar: Cronología de votaciones en contra del *embargo*, ONU).

Análisis Textual

En el texto en el que se materializa el discurso del presidente Bill Clinton, tras la firma de la “Ley Libertad”, se recogen características claras de una argumentación que apela a la autoridad como factor justificante. Se trata a los EEUU como un sujeto que, dada su capacidad económica y su triunfo en términos de empoderamiento democrático, cuenta con las posibilidades de imponer sus intereses ya sea en el ámbito interno o en el internacional; incluso si eso juega en contra de la soberanía de otro Estado. La idea, que coherentemente se estructura en el texto, tiende a legitimar una acción desde la comparación de conductas y la necesidad de imponer intereses, que en este caso están representados por la agenda norteamericana.

El discurso invoca de manera recurrente a principios de valor que se pretenden reafirmar en el imaginario de los receptores y a la necesidad de reivindicar los ideales americanos en el mundo entero. Se acude a la emotividad como herramienta para la apropiación de los postulados propuestos y se da, a medida que avanza el discurso, una intensificación de los elementos tendientes a manifestar una relación asimétrica de poder entre el Estado cubano y el norteamericano.

Estructura Argumentativa

La argumentación que impera en el texto es la relativa a la autoridad como medio de justificación y afirmación. Se trata de la postura de los EEUU como líder mundial respecto a acciones que atentan contra sus intereses nacionales. Se impone un ideal propio de valores y principios rectores que intentan legitimar acciones y reafirmar posturas, para, con ello, facilitar la aprehensión de los receptores al discurso.

La argumentación se moviliza entre la línea de lo emotivo, los hechos y el orden impuesto por Norteamérica como principio indiscutible, en este caso concreto: la democracia como bastión liberal. De esta forma, la argumentación se estructura desde la relación de causalidad entre el actuar cubano por el ataque en contra de las aeronaves de *Hermanos al Rescate* y la obligación de respuesta norteamericana. Hecho que determina en gran dimensión la manera en la que se justifica el incremento y fortalecimiento de una sanción que encuentra su origen en los 60's.

Con esta producción discursiva se invisibiliza el contexto de formación de la norma y los intereses primarios que la originan. Se toma como justificación argumentativa un hecho concreto que tiene lugar con posterioridad a la iniciativa del proyecto de Ley y así se circunscribe su firma en una dimensión que, hacia los receptores, responde a una idea aparentemente clara de causalidad. Sin embargo, resulta claro desde la lectura del texto, cómo se reafirma recurrentemente el carácter autoritario de los EEUU, pero siempre en el marco de la defensa de valores y de principios que justifican su intención de incidencia y la capacidad misma de concretar dicha intención.

Significados del Discurso

La emisión trae consigo una significación clara que entra en el campo de la legitimación y apropiación del discurso por parte de quien lo recepciona. Se da en el marco de una esperada respuesta por amplios sectores tras el ataque a las aeronaves en febrero del mismo año y en consecuencia su estructura argumentativa atiende a las respuestas esperadas por dichos sectores. Se desconoce en gran medida la problemática que precede y que tendrá lugar tras la firma de la Ley, pero en definitiva atiende a las demandas de los sectores civiles de los EEUU.

Lo anterior quiere decir que, se trata de un mecanismo que intenta acaparar la atención de la población por medio de la inclusión en la coyuntura de los hechos derivados de la acción de la Fuerza Aérea cubana.

El significado es, entonces, justificar el actuar del gobierno norteamericano, como acción de

respuesta y con ello facilitar el ámbito del debate de la firma de la Ley. Se circunscribe, de manera prácticamente absoluta, al actuar desproporcional de Cuba y con ello se invisibiliza el alcance de la medida, las dimensiones de aplicación y las consecuencias en términos internacionales. No obstante, se cumple con el objetivo, que es satisfacer a la opinión pública y en especial a los posibles opositores a la futura reelección de Bill Clinton. Con ello se garantiza el compromiso del Estado con la priorización de sus intereses nacionales y se apacigua la crítica respecto a la flexibilidad que podría pensarse primaría en un orden político propuesto por el partido demócrata.

Vocabulario que Expresa Relaciones de Poder

- Haciendo referencia a la firma de la Ley: [...] *“This Act is a justified response to the Cuban government's unjustified, unlawful attack on two unarmed U.S. civilian aircraft that left three U.S. citizens and one U.S. resident dead. The Act imposes additional sanctions on the Cuban regime, mandates the preparation of a plan for U.S. assistance to transitional and democratically elected Cuban governments”* [...]
- [...] *“It is a clear statement of our determination to respond to attacks on U.S. nationals and of our continued commitment to stand by the Cuban people in their peaceful struggle for freedom”* [...]
- [...] *“we are sending a powerful message to the Cuban regime that we do not and will not tolerate such conduct”* [...]
- [...] *“The Act also reaffirms our common goal of promoting a peaceful transition to democracy in Cuba by tightening the existing embargo while reaching out to the Cuban people”* [...]
- [...] *“This Act provides further support for the Administration's efforts to strengthen independent organizations in Cuba intent on building democracy and respect for human rights”* [...]
- [...] *“The President must also be able to respond effectively to rapid changes in Cuba. This capability is necessary to ensure that we can advance our national interests in a manner that is conducive to a democratic transition in Cuba”* [...]
- [...] *“The Cuban regime's lawless downing of two unarmed planes served as a harsh reminder of why a democratic Cuba is vitally important both to the Cuban and to the American people”* [...]

Las afirmaciones que se señalan en el marco de este discurso atienden a una dinámica de manifestaciones de relaciones de poder que se deben en gran medida a la naturaleza misma del texto y a los objetivos que propone. Es evidente cómo se reafirma el carácter de los EEUU como abanderado de la democracia, ya no solo como una forma de gobierno sino como un discurso en el que se incluye la libertad, los derechos humanos y, en general, los ideales liberales propios de la política norteamericana.

Se ve de manera clara que, por parte de los EEUU, no se pone en cuestión la incidencia que la firma de la Ley genera sino que, por el contrario, se parte de una supuesta superioridad política que entre otras cosas estaría recogiendo la postura de los ciudadanos cubanos. Se parte de varios supuestos que sin un respaldo argumentativo claro, justifican el deber de los EEUU de intervenir en camino a una transición que, de manera manifiesta, atenta contra elementos como la libre determinación y la soberanía de Cuba. En definitiva, se presenta como un discurso que parte de una relación vertical de poder entre el Estado cubano y el norteamericano. Se apela a la capacidad de incidencia en asuntos tanto políticos como económicos para conducir al debilitamiento del gobierno Castro.

Acontecimientos que Impulsan el Discurso

- Aprobación de la Ley Helms-Burton por parte del parlamento norteamericano.
- Destrucción de dos aeronaves en espacio aéreo cubano, de propiedad de la organización

Hermanos al Rescate.

- Objetivo político: lograr el apoyo del sector de oposición cubana por parte de ciudadanos y residentes de origen cubano para las elecciones presidenciales del mismo año.

Elementos Relevantes

- En el discurso se habla del tema de los derechos humanos como factor intermedio en el marco de la transición hacia la democracia. Esto termina significando que es esta forma de gobierno el elemento central para la garantía de estos postulados.
- El vínculo causal que se otorga al ataque cubano y a la consolidación de un cambio radical en la naturaleza jurídica del embargo. Es decir, por medio de un vínculo de causalidad se legitima el escalamiento de la sanción a Ley del Congreso. Con esto se excluyen de la discusión y de la visibilización de la acción, los antecedentes (Ley Torricelli: 1992, postulación del proyecto de Ley Libertad en 1995) y los alcances políticos de dicha disposición.
- Elementos repetitivos que manifiestan la asimetría en las relaciones cubano-estadounidenses.
- Menciones recurrentes a la transición a la democracia, implicando con ello una alteración e injerencia en el orden gubernamental interno del Estado cubano.
- La frase [...] *"The President must also be able to respond effectively to rapid changes in Cuba. This capability is necessary to ensure that we can advance our national interests in a manner that is conducive to a democratic transition in Cuba"* [...], revela claramente que por encima de la promoción de los intereses cubanos o de la población civil de este Estado, impera el objetivo estadounidense de reafirmar sus zonas de influencia y priorizar sus objetivos no solo en el ámbito interno sino también en el exterior. Esto se conjuga con los términos del discurso de inauguración de 1993, donde se reafirma que el objetivo final de EEUU es la priorización de sus intereses, los que necesariamente trascienden la órbita meramente territorial.

Texto del Discurso

**Statement on Signing the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996
March 12, 1996**

Today I have signed into law H.R. 927, the "Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996." This Act is a justified response to the Cuban government's unjustified, unlawful attack on two unarmed U.S. civilian aircraft that left three U.S. citizens and one U.S. resident dead. The Act imposes additional sanctions on the Cuban regime, mandates the preparation of a plan for U.S. assistance to transitional and democratically elected Cuban governments, creates a cause of action enabling U.S. nationals to sue those who expropriate or "traffic" in expropriated properties in Cuba, and denies such traffickers entry into the United States. It is a clear statement of our determination to respond to attacks on U.S. nationals and of our continued commitment to stand by the Cuban people in their peaceful struggle for freedom.

Immediately after Cuba's brutal act, I urged that differences on the bill be set aside so that the United States could speak in a single, strong voice. By acting swiftly—just 17 days after the attack—we are sending a powerful message to the Cuban regime that we do not and will not tolerate such conduct.

The Act also reaffirms our common goal of promoting a peaceful transition to democracy in Cuba by tightening the existing embargo while reaching out to the Cuban people. Our current efforts are beginning to yield results: they are depriving the Cuban regime of the hard currency it needs to

maintain its grip on power; more importantly, they are empowering the agents of peaceful change on the island. This Act provides further support for the Administration's efforts to strengthen independent organizations in Cuba intent on building democracy and respect for human rights. And I welcome its call for a plan to provide assistance to Cuba under transitional and democratically elected governments.

Consistent with the Constitution, I interpret the Act as not derogating from the President's authority to conduct foreign policy. A number of provisions—sections 104(a), 109(b), 113, 201, 202(e), and 202(f)—could be read to state the foreign policy of the United States, or would direct that particular diplomatic initiatives or other courses of action be taken with respect to foreign countries or governments. While I support the underlying intent of these sections, the President's constitutional authority over foreign policy necessarily entails discretion over these matters. Accordingly, I will construe these provisions to be precatory.

The President must also be able to respond effectively to rapid changes in Cuba. This capability is necessary to ensure that we can advance our national interests in a manner that is conducive to a democratic transition in Cuba. Section 102(h), concerning the codification of the economic embargo, and the requirements for determining that a transitional or democratically elected government is in power, could be read to impose overly rigid constraints on the implementation of our foreign policy. I will continue to work with the Congress to obtain the flexibility needed if the United States is to be in a position to advance our shared interest in a rapid and peaceful transition to democracy in Cuba.

Finally, Title IV of the Act provides for the Secretary of State to deny visas to, and the Attorney General to exclude from the United States, certain persons who confiscate or traffic in expropriated property after the date of enactment of the Act. I understand that the provision was not intended to reach those coming to the United States or United Nations as diplomats. A categorical prohibition on the entry of all those who fall within the scope of section 401 could constrain the exercise of my exclusive authority under Article II of the Constitution to receive ambassadors and to conduct diplomacy. I am, therefore, directing the Secretary of State and the Attorney General to ensure that this provision is implemented in a way that does not interfere with my constitutional prerogatives and responsibilities.

The Cuban regime's lawless downing of two unarmed planes served as a harsh reminder of why a democratic Cuba is vitally important both to the Cuban and to the American people. The LIBERTAD Act, which I have signed into law in memory of the four victims of this cruel attack, reasserts our resolve to help carry the tide of democracy to the shores of Cuba.

WILLIAM J. CLINTON
The White House, March 12, 1996.

Análisis Discursivo – Discurso de aceptación de la candidatura demócrata a la presidencia de los EEUU (1997 – 2001)	
Fecha del Discurso	Agosto 29 de 1996
Forma Discursiva	Declaración verbal
Actor – Emisor	Bill Clinton
Receptor	Militantes demócratas norteamericanos
Análisis Contextual	

En el año de sanción de la Ley Helms-Burton o también denominada *Libertad Act* tienen lugar las nuevas elecciones presidenciales en los EEUU. Este hecho marca contextualmente los parámetros según los cuales se desarrollan una suerte de posiciones políticas respecto a temas coyunturales. En el caso concreto de la emisión del discurso analizado, tras la elección como candidato demócrata, Bill Clinton asume la posición particular de representante de una causa que se relaciona de manera clara con el liderazgo mundial de los EEUU. Por ello, el objetivo es continuar con los planes programáticos de su primer periodo, pero simultáneamente impulsar una suerte de acciones tendientes a reafirmar el respaldo de sectores sociales que tiempo atrás se habrían mostrado como amplia oposición a propuestas políticas desde la militancia demócrata. Es el caso de los llamados cubano-americanos que representaban una fuerza política determinante especialmente en el estado de Florida.

En este marco, y en lo que se relaciona directamente con el tema objeto de estudio, encontramos que el contexto que circunscribió el presente pronunciamiento responde a unas lógicas de coerción que desde organizaciones de la sociedad civil representaron una presión determinante en la toma de decisiones de índole interno, pero a la vez tuvo lugar una influencia impuesta por actores internacionales que respondía a la posición de diferentes Estados respecto a las medidas adoptadas en contra de Cuba.

En este marco tiene lugar la producción discursiva de una serie de afirmaciones que, dado el escenario en donde se desarrolla, responde a demandas concretas por medio de parámetros específicos en los que el discurso se transforma en una herramienta de reafirmación tanto para el partido demócrata como para los ciudadanos. Se promueve la idea de EEUU como una potencia que continúa su ejercicio de acción e incidencia en el marco global, derivada de su capacidad de respuesta ante cualquier alteración de sus intereses.

En definitiva, el escenario en el que tiene lugar el discurso es la promulgación de una campaña política por la reelección a la presidencia de los EEUU y por la promoción de una suerte de intereses en los que resulta determinante la adhesión de nuevos grupos humanos en la promoción de los mismos intereses.

Análisis Textual

El texto en el que se recoge el discurso, tras la elección como candidato demócrata por segunda vez de Bill Clinton, expresa de manera clara una reafirmación permanente de la fuerza norteamericana en términos de paz y libertad. El objetivo central del pronunciamiento es llenar de contenido las posibilidades de los EEUU en el siglo XXI. Así se diseña una producción discursiva que en primera instancia apela al recuerdo sobre las políticas implementadas en el primer periodo de gobierno para dar paso a las nuevas reafirmaciones acerca del liderazgo y compromiso de los EEUU con sus intereses nacionales; ya no solo en un marco de circunscripción doméstico sino también exterior. Con base en esto, se apela a asuntos meramente internos en los que se tocan factores como la educación, el presupuesto, la seguridad y por supuesto el respeto de las libertades individuales que, en teoría, resultan ser un elemento determinante para la democracia y para los valores reivindicados por la postura liberal que representa los EEUU.

Todos estos elementos dan pie a la estructuración previa para una producción discursiva relativa a la dinámica internacional y al papel de los EEUU en la órbita de la comunidad de naciones. En este orden, y con miras a precisar un análisis acerca de la manera en la que se estructura el texto, es posible centrar la atención en el hilo conductor que se teje en torno a la idea de “América” como la nación abanderada de la paz y la libertad. Este elemento podría pensarse en el orden de la promoción de ideas legitimadoras de acciones de incidencia e intervención en asuntos internos de otros Estados.

Esta situación lleva necesariamente a pensar en una estructura de texto que, apelando a la retórica, vuelve a un escenario de emotividad en el que se involucra la consciencia de los receptores y el

ideal norteamericano como la esperanza y motivación a la acción. Esta afirmación permite direccionar el texto nuevamente a los dominios de Gramsci, que afirma que el poder de la hegemonía cala profundamente en una dimensión intelectual y moral en la que los individuos ya no actúan cooptados por la fuerza, sino convencidos y con plena convicción del discurso.

Con base en lo anterior, es posible identificar ciertas estructuras y componentes que en términos de texto, y apelando expresamente al análisis crítico del discurso, facilitan escenarios de lectura, análisis y comprensión de las estructuras políticas que se consolidan por medio de esta producción que resulta ser una reproducción de los elementos primarios de los discursos hasta este punto evaluados.

Estructura Argumentativa

La estructura argumentativa parte de figuras retóricas para consolidar imaginarios de justificación, legitimidad e identificación por parte de los receptores. Con base en esto se construyen argumentos de autoridad que siempre derivan su conclusión en la reafirmación de principios de valor. Este elemento también es una constante en los otros pronunciamientos oficiales de Bill Clinton que, por su incidencia en el tema de interés, han sido analizados.

Los argumentos se producen de forma conducente y sobre la base de una coherencia que toma como elemento transversal para tratar temas domésticos y exteriores el liderazgo de los EEUU como potencia en términos económicos, políticos pero, también, en términos morales por lo que atiende a la reafirmación de valores y conductas. Los argumentos que se proponen en el texto direccionan la lectura del mismo hacia una dimensión en la que se incorpora el pensamiento propio en las determinaciones promovidas por el mismo discurso.

Significados del Discurso

El discurso que continúa a la postulación de Bill Clinton para las elecciones presidenciales es una representación manifiesta de un objetivo de reivindicar los valores norteamericanos en una escala global, obviando con ello los escenarios y contextos concretos en los que dicha imposición podría tener lugar. Es un intento manifiesto por la normalización de algunas conductas, algunos principios y algunos objetivos; a fin de que se construya un empoderamiento global a favor de dichos postulados. Esta situación invisibiliza la problemática y la reduce a que la solución del conflicto, o el desarrollo de nuevas escenas de libertad, quede circunscrito a la implementación de los ideales democráticos ya no solo como forma de gobierno sino como un discurso que se encuentra cargado con juicios de valor y objetivos de homogenización.

Frases como [...] *“My fellow Americans, I want to build a bridge to the 21st century that makes sure we are still the nation with the world's strongest defense, that our foreign policy still advances the values of our American community in the community of nations”* [...] o [...] *“But there are times, there are times when only America can make the difference between war and peace, between freedom and repression, between life and death. We cannot save all the world's children, but we can save many of them. We cannot become the world's policeman, but where our values and our interests are at stake and where we can make a difference, we must act and we must lead. That is our job, and we are better, stronger, and safer because we are doing it”* [...], revelan la intensión de los EEUU de priorizar sus intereses y, sobre todo, legitimar sus acciones desde una perspectiva mesiánica en la que intervienen sus valores como los adecuados, pero en donde se hace manifiesta la posibilidad de actuar desde una órbita de autoridad y discrecionalidad en miras de proteger y promover dichos valores en el mundo. Allí no se toman en consideración elementos como la soberanía de los Estados, la posibilidad de determinarse desde sus postulados internos y la dimensión de representatividad que puede encontrar una nación en una u otra forma de gobierno.

Vocabulario que Expresa Relaciones de Poder

- [...] *“to make our American community stronger, to keep America the world's strongest force for peace and freedom and prosperity”* [...]

- [...]“Our country is still the strongest force for peace and freedom on Earth”[...]
- [...]“to maintain our world leadership for peace and freedom”[...]
- [...]“My fellow Americans, I want to build a bridge to the 21st century that makes sure we are still the nation with the world's strongest defense, that our foreign policy still advances the values of our American community in the community of nations”[...]
- [...]“Cuba must finally join the community of democracies”[...]
- [...]“Nothing in our lifetime has been more heartening than when people of the former Soviet Union and Central Europe broke the grip of communism”[...]
- [...]“But there are times, there are times when only America can make the difference between war and peace, between freedom and repression, between life and death. We cannot save all the world's children, but we can save many of them. We cannot become the world's policeman, but where our values and our interests are at stake and where we can make a difference, we must act and we must lead. That is our job, and we are better, stronger, and safer because we are doing it”[...]

Acontecimientos que Impulsan el Discurso

- Inicio de campaña por la elección presidencial de los EEUU, 1996.
- Elección de Bill Clinton y Al Gore como candidatos a la presidencia y vicepresidencia (respectivamente) por el partido demócrata norteamericano.

Elementos Relevantes

- No se hace mención expresa de los derechos humanos.
- Remarcable insistencia en el tema del liderazgo mundial en términos de paz y libertad.
- Mención expresa de Cuba como uno de los casos que merece especial atención por parte de los EEUU.
- Repetición de la capacidad de incidencia en asuntos exteriores con miras a reafirmar el papel de acción de los EEUU como bastión de valores y principios.

Texto del discurso

Remarks at the Democratic National Convention (August 29, 1996)

Bill Clinton

Mr. Chairman, Mr. Vice President, my fellow Democrats, and my fellow Americans: thank you for your nomination. I don't know if I can find a fancy way to say this, but I accept.

So many have contributed to the record we have made for the American people, but one above all, my partner, my friend, and the best Vice President in our history, Al Gore.

Tonight I thank the city of Chicago, its great mayor, and its wonderful people for this magnificent convention. I love Chicago for many reasons, for your powerful spirit, your sports teams, your lively politics, but most of all for the love and light of my life, Chicago's daughter Hillary.

Four years ago, you and I set forth on a journey to bring our vision to our country, to keep the American dream alive for all who were willing to work for it, to make our American community stronger, to keep America the world's strongest force for peace and freedom and prosperity.

Four years ago, with high unemployment, stagnant wages, crime, welfare, and the deficit on the rise, with a host of unmet challenges and a rising tide of cynicism, I told you about a place I was born, and I told you that I still believed in a place called Hope.

Well, for four years now, to realize our vision we have pursued a simple but profound strategy: opportunity for all, responsibility from all, a strong united American community.

Four days ago, as you were making your way here, I began a train ride to make my way to Chicago through America's heartland. I wanted to see the faces, I wanted to hear the voices of the people for whom I have worked and fought these last four years. And did I ever see them.

I met an ingenious business woman who was once on welfare in West Virginia; a brave police officer, shot and paralyzed, now a civic leader in Kentucky; an autoworker in Ohio, once unemployed, now proud to be working in the oldest auto plant in America to help make America number one in auto production again for the first time in 20 years. I met a grandmother fighting for her grandson's environment in Michigan. And I stood with two wonderful little children proudly reading from their favorite book, *The Little Engine That Could*.

At every stop, large and exuberant crowds greeted me. And maybe more important, when we just rolled through little towns there were always schoolchildren there waving their American flags, all of them believing in America and its future. I would not have missed that trip for all the world, for that trip showed me that hope is back in America. We are on the right track to the 21st century.

Look at the facts, just look at the facts: 4.4 million Americans now living in a home of their own for the first time; hundreds of thousands of women have started their own new businesses; more minorities own businesses than ever before; record numbers of new small businesses and exports.

Look at what's happened. We have the lowest combined rates of unemployment, inflation, and home mortgages in 28 years. Look at what happened: 10 million new jobs, over half of them high-wage jobs; 10 million workers getting the raise they deserve with the minimum wage law; 25 million people now having protection in their health insurance because the Kennedy-Kassebaum bill says you can't lose your insurance anymore when you change jobs, even if somebody in your family has been sick; 40 million Americans with more pension security; a tax cut for 15 million of our hardest working, hardest pressed Americans, and all small businesses; 12 million Americans – 12 million of them – taking advantage of the family and medical leave law so they can be good parents and good workers. Ten million students have saved money on their college loans. We are making our democracy work.

We have also passed political reform, the line-item veto, the motor voter bill, tougher registration laws for lobbyists, making Congress live under the laws they impose on the private sector, stopping unfunded mandates to state and local government. We've come a long way; we've got one more thing to do. Will you help me get campaign finance reform in the next four years? [Applause]

We have increased our investments in research and technology. We have increased investments in breast cancer research dramatically. We are developing a supercomputer – a supercomputer that will do more calculating in a second than a person with a hand-held calculator can do in 30,000 years. More rapid development of drugs to deal with HIV and AIDS and moving them to the market quicker have almost doubled life expectancy in only four years. And we are looking at no limit in sight to that. We'll keep going until normal life is returned to people who deal with this.

Our country is still the strongest force for peace and freedom on Earth. On issues that once before tore us apart, we have changed the old politics of Washington. For too long, leaders in Washington asked, who's to blame? But we asked, what are we going to do?

On crime, we're putting 100,000 police on the streets. We made "three strikes and you're out" the law of the land. We stopped 60,000 felons, fugitives, and stalkers from getting handguns under the Brady bill. We banned assault rifles. We supported tougher punishment and prevention programs to keep our children from drugs and gangs and violence. Four years now – for four years now – the crime rate in America has gone down.

On welfare, we worked with States to launch a quiet revolution. Today there are 1.8 million fewer people on welfare than there were the day I took the oath of office. We are moving people from welfare to work.

We have increased child support collections by 40 percent. The federal work force is the smallest it has been since John Kennedy. And the deficit has come down for four years in a row for the first time since before the Civil War, down 60 percent on the way to zero. We will do it.

We are on the right track to the 21st century. We are on the right track. But our work is not finished. What should we do? First, let us consider how to proceed. Again I say, the question is no longer who's to blame but what to do.

I believe that Bob Dole and Jack Kemp and Ross Perot love our country, and they have worked hard to serve it. It is legitimate, even necessary, to compare our record with theirs, our proposals for the future with theirs. And I expect them to make a vigorous effort to do the same. But I will not attack. I will not attack them personally or permit others to do it in this party if I can prevent it. My fellow Americans, this must be – this must be a campaign of ideas, not a campaign of insults. The American people deserve it.

Now, here's the main idea: I love and revere the rich and proud history of America. And I am determined to take our best traditions into the future. But with all respect, we do not need to build a bridge to the past. We need to build a bridge to the future. And that is what I commit to you to do.

So tonight, tonight let us resolve to build that bridge to the 21st century, to meet our challenges and protect our values. Let us build a bridge to help our parents raise their children, to help young people and adults to get the education and training they need, to make our streets safer, to help Americans succeed at home and at work, to break the cycle of poverty and dependence, to protect our environment for generations to come, and to maintain our world leadership for peace and freedom. Let us resolve to build that bridge.

Tonight, my fellow Americans, I ask all of our fellow citizens to join me and to join you in building that bridge to the 21st century. Four years from now, just four years from now – think of it – we begin a new century, full of enormous possibilities. We have to give the American people the tools they need to make the most of their God-given potential. We must make the basic bargain of opportunity and responsibility available to all Americans, not just a few. That is the promise of the Democratic Party. That is the promise of America.

I want to build a bridge to the 21st century in which we expand opportunity through education, where computers are as much a part of the classroom as blackboards, where highly trained teachers demand peak performance from our students, where every 8-year-old can point to a book and say, "I can read it myself."

By the year 2000, the single most critical thing we can do is to give every single American who wants it the chance to go to college. We must make two years of college just as universal in four years as a high school education is today. And we can do it. We can do it, and we should cut taxes to do it.

I propose a \$1,500-a-year tuition tax credit for Americans, a HOPE Scholarship for the first two years of college to make the typical community college education available to every American. I believe every working family ought also to be able to deduct up to \$10,000 in college tuition costs per year for education after that. I believe the families of this country ought to be able to save money for college in a tax-free IRA, save it year-in and year-out, withdraw it for college education without penalty. We should not tax middle-income Americans for the money they spend on college. We'll get the money back down the road many times over.

I want to say here, before I go further, that these tax cuts and every other one I mention tonight are all fully paid for in my balanced budget plan, line-by-line, dime-by-dime, and they focus on education.

Now, one thing so many of our fellow Americans are learning is that education no longer stops on graduation day. I have proposed a new "GI bill" for American workers, a \$2,600 grant for unemployed and underemployed Americans so that they can get the training and the skills they need to go back to work at better paying jobs, good high-skilled jobs for a good future.

But we must demand excellence at every level of education. We must insist that our students learn the old basics we learned and the new basics they have to know for the next century. Tonight let us set a clear national goal: All children should be able to read on their own by the third grade. When 40 percent of our 8-year-olds cannot read as well as they should, we have to do something. I want to send 30,000 reading specialists and national service corps members to mobilize a voluntary army of one million reading tutors for third graders all across America. They will teach our young children to read.

Let me say to our parents: You have to lead the way. Every tired night you spend reading a book to your child will be worth it many times over. I know that Hillary and I still talk about the books we read to Chelsea when we were so tired we could hardly stay awake. We still remember them, and more important, so does she. But we're going to help the parents of this country make every child able to read for himself or herself by the age of 8, by the third grade. Do you believe we can do that? [Applause] Will you help us do that? [Applause]

We must give parents, all parents, the right to choose which public school their children will attend and to let teachers form new charter schools with a charter they can keep only if they do a good job. We must keep our schools open late so that young people have someplace to go and something to say yes to and stay off the street.

We must require that our students pass tough tests to keep moving up in school. A diploma has to mean something when they get out. We should reward teachers that are doing a good job, remove those who don't measure up. But in every case, never forget that none of us would be here tonight if it weren't for our teachers. I know I wouldn't. We ought to lift them up, not tear them down.

We need schools that will take our children into the next century. We need schools that are rebuilt and modernized with an unprecedented commitment from the National Government to increase

school construction and with every single library and classroom in America connected to the information superhighway by the year 2000.

Now, folks, if we do these things, every 8-year-old will be able to read, every 12-year-old will be able to log in on the Internet, every 18-year-old will be able to go to college, and all Americans will have the knowledge they need to cross that bridge to the 21st century.

I want to build a bridge to the 21st century in which we create a strong and growing economy to preserve the legacy of opportunity for the next generation, by balancing our budget in a way that protects our values and ensuring that every family will be able to own and protect the value of their most important asset, their home.

Tonight let us proclaim to the American people we will balance the budget. And let us also proclaim, we will do it in a way that preserves Medicare, Medicaid, education, the environment, the integrity of our pensions, the strength of our people.

Now, last year when the Republican Congress sent me a budget that violated those values and principles, I vetoed it. And I would do it again tomorrow. I could never allow cuts that devastate education for our children, that pollute our environment, that end the guarantee of health care for those who are served under Medicaid, that end our duty or violate our duty to our parents through Medicare. I just couldn't do that. As long as I'm President, I'll never let it happen. And it doesn't matter if they try again, as they did before, to use the blackmail threat of a shutdown of the federal government to force these things on the American people. We didn't let it happen before. We won't let it happen again.

Of course, there is a better answer to this dilemma. We could have the right kind of balanced budget with a new Congress, a Democratic Congress.

I want to balance the budget with real cuts in government, in waste. I want a plan that invests in education, as mine does, in technology, and yes, in research, as Christopher Reeve so powerfully reminded us we must do.

And my plan gives Americans tax cuts that will help our economy to grow. I want to expand IRAs so that young people can save tax-free to buy a first home. Tonight I propose a new tax cut for home ownership that says to every middle-income working family in this country, if you sell your home you will not have to pay a capital gains tax on it ever, not ever. I want every American to be able to hear those beautiful words, "welcome home."

Let me say again, every tax cut I call for tonight is targeted, it's responsible, and it is paid for within my balanced budget plan. My tax cuts will not undermine our economy, they will speed economic growth.

We should cut taxes for the family sending a child to college, for the worker returning to college, for the family saving to buy a home or for long-term health care, and a \$500-per-child credit for middle-income families raising their children who need help with child care and what the children will do after school. That is the right way to cut taxes, pro-family, pro-education, pro-economic growth.

Now, our opponents have put forward a very different plan, a risky \$550 billion tax scheme that

will force them to ask for even bigger cuts in Medicare, Medicaid, education, and the environment than they passed and I vetoed last year. But even then they will not cover the costs of their scheme, so that even then this plan will explode the deficit, which will increase interest rates by two percent, according to their own estimates last year. It will require huge cuts in the very investments we need to grow and to grow together and, at the same time, slow down the economy.

You know what higher interest rates mean? To you it means a higher mortgage payment, a higher car payment, a higher credit card payment. To our economy it means business people will not borrow as much money, invest as much money, create as many new jobs, create as much wealth, raise as many wages. Do we really want to make that same mistake all over again?

Audience: No-o-o!

President Clinton: Do we really want to stop economic growth again?

Audience: No-o-o!

President Clinton: Do we really want to start piling up another mountain of debt?

Audience: No-o-o!

President Clinton: Do we want to bring back the recession of 1991 and '92?

Audience: No-o-o!

President Clinton: Do we want to weaken our bridge to the 21st century?

Audience: No-o-o!

President Clinton: Of course we don't. We have an obligation, you and I, to leave our children a legacy of opportunity, not a legacy of debt. Our budget would be balanced today, we would have a surplus today, if we didn't have to make the interest payments on the debt run up in the 12 years before the Clinton/Gore administration took office.

Audience: Four more years! Four more years! Four more years!

President Clinton: So let me say this is one of those areas in which I respectfully disagree with my opponent. I don't believe we should bet the farm, and I certainly don't believe we should bet the country. We should stay on the right track to the 21st century.

Opportunity alone is not enough. I want to build an America in the 21st century in which all Americans take personal responsibility for themselves, their families, their communities, and their country. I want our nation to take responsibility to make sure that every single child can look out the window in the morning and see a whole community getting up and going to work.

We want these young people to know the thrill of the first paycheck, the challenge of starting that first business, the pride in following in a parent's footsteps. The welfare reform law I signed last week gives America a chance, but not a guarantee, to have that kind of new beginning, to have a new social bargain with the poor, guaranteeing health care, child care, and nutrition for the children

but requiring able-bodied parents to work for the income.

Now I say to all of you, whether you supported the law or opposed it, but especially to those who supported it, we have a responsibility, we have a moral obligation to make sure the people who are being required to work have the opportunity to work. We must make sure the jobs are there. There should be one million new jobs for welfare recipients by the year 2000. States under this law can now take the money that was spent on the welfare check and use it to help businesses provide paychecks. I challenge every state to do it soon.

I propose also to give businesses a tax credit for every person hired off welfare and kept employed. I propose to offer private job placement firms a bonus for every welfare recipient they place in a job who stays in it. And more important, I want to help communities put welfare recipients to work right now, without delay, repairing schools, making their neighborhoods clean and safe, making them shine again. There's lots of work to be done out there. Our cities can find ways to put people to work and bring dignity and strength back to these families.

My fellow Americans, I have spent an enormous amount of time with our dear friend the late Ron Brown and with Secretary Kantor and others opening markets for America around the world. And I'm proud of every one we opened. But let us never forget, the greatest untapped market for American enterprise is right here in America, in the inner cities, in the rural areas, who have not felt this recovery. With investment and business and jobs, they can become our partners in the future. And it's a great opportunity we ought not to pass up.

I propose more empowerment zones like the one we have right here in Chicago to draw business into poor neighborhoods. I propose more community development banks, like the South Shore Bank right here in Chicago, to help people in those neighborhoods start their own small businesses. More jobs, more incomes, new markets for America right here at home making welfare reform a reality. [Applause]

Now, folks, you cheered – and I thank you – but the government can only do so much. The private sector has to provide most of these jobs. So I want to say again, tonight I challenge every business person in America who has ever complained about the failure of the welfare system to try to hire somebody off welfare and try hard. [Applause] Thank you. After all, the welfare system you used to complain about is not here anymore. There is no more "who's to blame" on welfare. Now the only question is what to do. And we all have a responsibility, especially those who have criticized what was passed and who have asked for a change and who have the ability to give poor people a chance to grow and support their families. I want to build a bridge to the 21st century that ends the permanent under class, that lifts up the poor and ends their isolation, their exile. And they're not forgotten anymore. [Applause] Thank you.

Audience: Four more years! Four more years! Four more years!

President Clinton: I want to build a bridge to the 21st century where our children are not killing other children anymore, where children's lives are not shattered by violence at home or in the schoolyard, where a generation of young people are not left to raise themselves on the streets.

With more police and punishment and prevention, the crime rate has dropped for four years in a row now. But we cannot rest, because we know it's still too high. We cannot rest until crime is a shocking exception to our daily lives, not news as usual. Will you stay with me until we reach that

good day? [Applause]

My fellow Americans, we all owe a great debt to Sarah and Jim Brady, and I'm glad they took their wrong turn and wound up in Chicago. I was glad to see that. It is to them we owe the good news that 60,000 felons, fugitives, and stalkers couldn't get handguns because of the Brady bill. But not a single hunter in Arkansas or New Hampshire or Illinois or anyplace else missed a hunting season.

But now I say we should extend the Brady bill, because anyone who has committed an act of domestic violence against a spouse or a child should not buy a gun. And we must ban those cop-killer bullets. They are designed for one reason only, to kill police officers. We ask the police to keep us safe. We owe it to them to help keep them safe while they do their job for us.

We should pass a victim's rights constitutional amendment because victims deserve to be heard; they need to know when an assailant is released. They need to know these things, and the only way to guarantee them is through a constitutional amendment.

We have made a great deal of progress. Even the crime rate among young people is finally coming down. So it is very, very painful to me that drug use among young people is up. Drugs nearly killed my brother when he was a young man, and I hate them. He fought back. He's here tonight with his wife, his little boy is here, and I'm really proud of him. But I learned something – I learned something in going through that long nightmare with our family. And I can tell you, something has happened to some of our young people; they simply don't think these drugs are dangerous anymore, or they think the risk is acceptable. So beginning with our parents, and without regard to our party, we have to renew our energy to teach this generation of young people the hard, cold truth: Drugs are deadly; drugs are wrong; drugs can cost you your life.

General Barry McCaffrey, the four-star general who led our fight against drugs in Latin America, now leads our crusade against drugs at home: stopping more drugs at our borders, cracking down on those who sell them, and most important of all, pursuing a national antidrug strategy whose primary aim is to turn our children away from drugs. I call on Congress to give him every cent of funding we have requested for this strategy and to do it now.

There is more we will do. We should say to parolees: We will test you for drugs; if you go back on them, we will send you back to jail. We will say to gangs: We will break you with the same antiracketeering law we used to put mob bosses in jail. You're not going to kill our kids anymore or turn them into murderers before they're teenagers.

My fellow Americans, if we're going to build that bridge to the 21st century we have to make our children free, free of the vise grip of guns and gangs and drugs, free to build lives of hope.

I want to build a bridge to the 21st century with a strong American community, beginning with strong families, an America where all children are cherished and protected from destructive forces, where parents can succeed at home and at work. Everywhere I've gone in America, people come up and talk to me about their struggle with the demands of work and their desire to do a better job with their children. The very first person I ever saw fight that battle was here with me four years ago, and tonight I miss her very, very much. My irrepressible, hard-working, always optimistic mother did the best she could for her brother and me, often against very stiff odds. I learned from her just how much love and determination can overcome. But from her and from our life, I also learned that no parent can do it alone. And no parent should have to. She had the kind of help every parent

deserves, from our neighbors, our friends, our teachers, our pastors, our doctors, and so many more.

You know, when I started out in public life with a lot of my friends from the Arkansas delegation down here, there used to be a saying from time to time that every man who runs for public office will claim that he was born in a log cabin he built with his own hands. [Laughter] Well, my mother knew better. And she made sure I did, too. Long before she even met Hillary, my mother knew it takes a village, and she was grateful for the support she got.

As Tipper Gore and Hillary said on Tuesday, we have, all of us in our administration, worked hard to support families in raising their children and succeeding at work. But we must do more. We should extend the family and medical leave law to give parents some time off to take their children to regular doctor's appointments or attend those parent-teacher conferences at school. That is a key determination of their success. We should pass a flextime law that allows employees to take their overtime pay in money or in time off, depending on what's better for their family.

The FDA has adopted new measures to reduce advertising and sales of cigarettes to children. The Vice President spoke so movingly of it last night. But let me remind you, my fellow Americans, that is very much an issue in this election because that battle is far from over and the two candidates have different views. I pledge to America's parents that I will see this effort all the way through.

Working with the entertainment industry, we're giving parents the V-chip. TV shows are being rated for content so parents will be able to make a judgment about whether their small children should see them. And three hours of quality children's programming every week, on every network, are on the way.

The Kennedy-Kassebaum law says every American can keep his or her health insurance if they have to change jobs, even if someone in their family has been sick. That is a very important thing. But tonight we should spell out the next steps. The first thing we ought to do is to extend the benefits of health care to people who are unemployed. I propose in my balanced budget plan, paid for, to help unemployed families keep their health insurance for up to six months. A parent may be without a job, but no child should be without a doctor. And let me say again, as the First Lady did on Tuesday, we should protect mothers and newborn babies from being forced out of the hospital in less than 48 hours.

We respect the individual conscience of every American on the painful issue of abortion but believe as a matter of law that this decision should be left to a woman, her conscience, her doctor, and her God. Abortion should not only be safe and legal, it should be rare. That's why I helped to establish and support a national effort to reduce out-of-wedlock teen pregnancy, and that is why we must promote adoption.

Last week the minimum wage bill I signed contained a \$5,000 credit to families who adopt children, even more if the children have disabilities. It put an end to racial discrimination in the adoption process. It was a good thing for America. My fellow Americans, already there are tens of thousands of children out there who need a good home with loving parents. I hope more of them will find it now.

I want to build a bridge to the 21st century with a clean and safe environment. We are making our food safer from pesticides. We're protecting our drinking water and our air from poisons. We saved Yellowstone from mining. We established the largest national park south of Alaska in the Mojave

Desert in California. We are working to save the precious Florida Everglades. And when the leaders of this Congress invited the polluters into the back room to roll back 25 years of environmental protections that both parties had always supported, I said no.

But we must do more. Today, 10 million children live within just four miles of a toxic waste dump. We have cleaned up 197 of those dumps in the last three years, more than in the previous 12 years combined. In the next four years, we propose to clean up 500 more, two-thirds of all that are left and the most dangerous ones. Our children should grow up next to parks, not poison.

We should make it a crime even to attempt to pollute. We should freeze the serious polluter's property until they clean up the problems they create. We should make it easier for families to find out about toxic chemicals in their neighborhoods so they can do more to protect their own children. These are the things that we must do to build that bridge to the 21st century.

My fellow Americans, I want to build a bridge to the 21st century that makes sure we are still the nation with the world's strongest defense, that our foreign policy still advances the values of our American community in the community of nations. Our bridge to the future must include bridges to other nations, because we remain the world's indispensable nation to advance prosperity, peace, and freedom and to keep our own children safe from the dangers of terror and weapons of mass destruction.

We have helped to bring democracy to Haiti and peace to Bosnia. Now the peace signed on the White House lawn between the Israelis and the Palestinians must embrace more of Israel's neighbors. The deep desire for peace that Hillary and I felt when we walked the streets of Belfast and Derry must become real for all the people of Northern Ireland. And Cuba must finally join the community of democracies.

Nothing in our lifetime has been more heartening than when people of the former Soviet Union and Central Europe broke the grip of communism. We have aided their progress, and I am proud of it. And I will continue our strong partnership with a democratic Russia. And we will bring some of Central Europe's new democracies into NATO so that they will never question their own freedom in the future.

Our American exports are at record levels. In the next four years, we have to break down even more barriers to them, reaching out to Latin America, to Africa, to other countries in Asia, making sure that our workers and our products, the world's finest, have the benefit of free and fair trade.

In the last four years, we have frozen North Korea's nuclear weapons program. And I am proud to say that tonight there is not a single Russian nuclear missile pointed at an American child. Now we must enforce and ratify without delay measures that further reduce nuclear arsenals, banish poison gas, and ban nuclear tests once and for all.

We have made investments, new investments, in our most important defense asset, our magnificent men and women in uniform. By the year 2000 we also will have increased funding to modernize our weapons systems by 40 percent. These commitments will make sure that our military remains the best trained, best equipped fighting force in the entire world.

We are developing a sensible national missile defense, but we must not, not now, not by the year 2000, squander \$60 billion on an unproved, ineffective Star Wars program that could be obsolete

tomorrow.

We are fighting terrorism on all fronts with a three-pronged strategy. First, we are working to rally a world coalition with zero tolerance for terrorism. Just this month, I signed a law imposing harsh sanctions on foreign companies that invest in key sectors of the Iranian and Libyan economies. As long as Iran trains, supports, and protects terrorists, as long as Libya refuses to give up the people who blew up Pan Am 103, they will pay a price from the United States.

Second, we must give law enforcement the tools they need to take the fight to terrorists. We need new laws to crack down on money laundering and to prosecute and punish those who commit violent acts against American citizens abroad, to add chemical markers or taggants to gunpowder used in bombs so we can crack the bombmakers, to extend the same power police now have against organized crime to save lives by tapping all the phones that terrorists use. Terrorists are as big a threat to our future, perhaps bigger, than organized crime. Why should we have two different standards for a common threat to the safety of America and our children? We need, in short, the laws that Congress refused to pass. And I ask them again, please, as an American, not a partisan matter, pass these laws now.

Third, we will improve airport and air travel security. I have asked the Vice President to establish a commission and report back to me on ways to do this. But now we will install the most sophisticated bomb-detection equipment in all our major airports. We will search every airplane flying to or from America from another nation, every flight, every cargo hold, every cabin, every time.

My fellow Democrats and my fellow Americans, I know that in most election seasons foreign policy is not a matter of great interest in the debates in the barbershops and the cafes of America, on the plant floors and at the bowling alleys. But there are times, there are times when only America can make the difference between war and peace, between freedom and repression, between life and death. We cannot save all the world's children, but we can save many of them. We cannot become the world's policeman, but where our values and our interests are at stake and where we can make a difference, we must act and we must lead. That is our job, and we are better, stronger, and safer because we are doing it.

My fellow Americans, let me say one last time, we can only build our bridge to the 21st century if we build it together and if we're willing to walk arm in arm across that bridge together. I have spent so much of your time that you gave me these last four years to be your President worrying about the problems of Bosnia, the Middle East, Northern Ireland, Rwanda, Burundi. What do these places have in common? People are killing each other and butchering children because they are different from one another. They share the same piece of land, but they are different from one another. They hate their race, their tribe, their ethnic group, their religion.

We have seen the terrible, terrible price that people pay when they insist on fighting and killing their neighbors over their differences. In our own country, we have seen America pay a terrible price for any form of discrimination. And we have seen us grow stronger as we have steadily let more and more of our hatreds and our fears go, as we have given more and more of our people the chance to live their dreams.

That is why the flame of our Statue of Liberty, like the Olympic flame carried all across America by thousands of citizen heroes, will always, always burn brighter than the fires that burn our churches,

our synagogues, our mosques – always.

Look around this hall tonight, and to our fellow Americans watching on television, you look around this hall tonight – there is every conceivable difference here among the people who are gathered. If we want to build that bridge to the 21st century we have to be willing to say loud and clear: If you believe in the values of the Constitution, the Bill of Rights, the Declaration of Independence, if you're willing to work hard and play by the rules, you are part of our family and we're proud to be with you. [Applause] You cheer now, because you know this is true. You know this is true. When you walk out of this hall, think about it. Live by it.

We still have too many Americans who give in to their fears of those who are different from them. Not so long ago, swastikas were painted on the doors of some African-American members of our Special Forces at Fort Bragg. Folks, for those of you who don't know what they do, the Special Forces are just what the name says: they are special forces. If I walk off this stage tonight and call them on the telephone and tell them to go halfway around the world and risk their lives for you and be there by tomorrow at noon, they will do it. They do not deserve to have swastikas on their doors.

So look around here, look around here: Old or young, healthy as a horse or a person with a disability that hasn't kept you down, man or woman, Native American, native born, immigrant, straight or gay, whatever, the test ought to be I believe in the Constitution, the Bill of Rights, and the Declaration of Independence. I believe in religious liberty. I believe in freedom of speech. I believe in working hard and playing by the rules. I'm showing up for work tomorrow. I'm building that bridge to the 21st century. That ought to be the test.

My fellow Americans, 68 nights from tonight the American people will face once again a critical moment of decision. We're going to choose the last President of the 20th century and the first President of the 21st century. But the real choice is not that. The real choice is whether we will build a bridge to the future or a bridge to the past, about whether we believe our best days are still out there or our best days are behind us, about whether we want a country of people all working together or one where you're on your own.

Let us commit ourselves this night to rise up and build the bridge we know we ought to build all the way to the 21st century. Let us have faith, American faith that we are not leaving our greatness behind. We're going to carry it right on with us into that new century, a century of new challenge and unlimited promise. Let us, in short, do the work that is before us, so that when our time here is over, we will all watch the sun go down, as we all must, and say truly, we have prepared our children for the dawn.

My fellow Americans, after these four good, hard years, I still believe in a place called Hope, a place called America.

Thank you, God bless you, and good night.

Análisis Discursivo – Documento <i>Apoyo a la transición democrática en Cuba</i>	
Fecha del Discurso	Enero 28 de 1997
Forma Discursiva	Documento escrito
Actor – Emisor	Bill Clinton

Receptor	Ciudadanos norteamericanos, ciudadanos cubanos, entre otros.
Análisis Contextual	
La Ley Libertad, que entra en vigor en 1997, tras la firma del presidente Bill Clinton, determina la necesidad de establecer informes periódicos que den cuenta de su implementación, este hecho motiva tanto al presidente de la época como al parlamento a construir un documento que desarrolla el tema de la transición de Cuba hacia el ideal democrático esperado por los EEUU. Ello considerando que incluso se da desarrollo a los parámetros que debe cumplir la Isla para ser considerada como una “adecuada democracia”. En este contexto, en el mes de enero se lleva a cabo la publicación del documento en donde se presentan una serie de descripciones y alternativas a los cambios políticos y de gobierno en Cuba. El documento cumple la función de explicar, exponer y ampliar los contenidos de la norma pero sobre todo, postular una narrativa descriptiva de las expectativas que desde los valores y principios norteamericanos se tienen sobre Cuba. En el marco de lo anterior, se desarrollan diferentes temáticas que tocan tangencialmente la situación de Cuba, haciendo hincapié en las dinámicas económicas de la Isla. Desde este punto de vista, resulta claro que el documento pretende dar cuenta a la comunidad internacional del alcance de las medidas y de las potencialidades derivadas de la posible transición, en lo que atiende al comercio mundial y a las libertades políticas y civiles.	
Análisis Textual	
El texto se compone de un esqueleto que le brinda estructura y que apela a cuatro temáticas concretas. Para el tema que concierne al presente análisis solo se considerarán algunos apartes, incluyendo la presentación realizada por el presidente Bill Clinton. Ello con el fin de hacer énfasis en los temas que resultan prioritarios para los ejercicios de análisis adelantados. En el texto es posible identificar una narrativa tendiente a cuestionar de forma personal a Fidel Castro. Esto dirige la discusión no a la situación política del Estado cubano sino de forma personal a su mandatario, lo que pone en tela de juicio los alcances de la norma. Se trata de un texto en el que por primera vez se toca el tema de los Derechos Humanos como parte central y determinante, estableciendo el tema semántico que con ellos se relaciona como punto transversal en el tránsito hacia la democracia. A pesar de ello, el elemento de inflexión y la condición para la normalización de la relaciones continúa siendo el cambio político y con ello una transformación económica. Esto lleva a pensar que la medida responde a intereses particulares de los EEUU. Muestra de ello, son afirmaciones como, por ejemplo, [...]“<i>Thus, while a peaceful transition and an expeditious economic recovery in Cuba will serve the interests of both the American and Cuban people, the timing, nature and course of the Cuban transition must be determined by the Cuban people themselves</i>”[...]. En este apartado se menciona que los intereses norteamericanos terminan reflejados en los intereses cubanos, llevando a un segundo plano el derecho de autodeterminación y la soberanía, propia de la ley internacional. A pesar de ello, se plantean elementos legitimadores y de tolerancia ya que se menciona que será decisión del pueblo cubano la forma y el momento de la transición. Sin embargo, constantemente se revela la promoción de una idea de mejoramiento y crecimiento, que atendiendo a los antecedentes norteamericanos, termina desconociendo el contexto y escenario concreto en donde se espera se materialice. En cualquier caso, el texto propone un hilo conductor que inicia con la presentación a cargo de Bill Clinton y se desarrolla por medio de subcomponentes que van desde una breve contextualización, hasta una idea de consolidación de Cuba en lo que respecta a los DDHH, la democracia y el Estado de derecho. Se toma como elemento central y prioritario la transformación en términos económicos. Esto indiscutiblemente lleva a una dimensión en la que las relaciones de poder se manifiestan, no	

solo por medidas coercitivas, sino por medidas que emplean el discurso para remarcar superioridad y jerarquía.

Estructura Argumentativa

La estructura argumentativa gira en torno a la causalidad como herramienta de cohesión del texto. Se trata de evidenciar, valiéndose de ejemplos comparativos, el estado de Cuba y las medidas que EEUU puede afirmar, por la experiencia, resultarían convenientes para afrontarla.

La división esquemática del documento permite puntualizar en temas específicos como por ejemplo la tendencia global a la democratización y el libre mercado, los DDHH en el marco de una sociedad democrática, la integración de Cuba en la economía mundial, entre otros. Esto permite al lector concentrar su atención en elementos puntuales que aunque relacionados responden cada uno a una descripción individualizada. Este mecanismo permite hallar la relevancia en conjunto pero simultáneamente puntual de todos los temas abordados, que en definitiva siempre conducen a cuestionamientos de asuntos domésticos de la Isla. En algunos casos se promueven ideas intervencionistas, legitimadas en las altas expectativas que se ofrecen respecto al cambio de régimen.

El hilo discursivo tiende a la legitimación y a la justificación de la medida, poniendo como punto central el argumento de autoridad de los EEUU como potencia política y económica mundial, además de abanderada de la causa de la defensa de los DDHH y la soberanía de los Estados. Este hecho resulta contradictorio cuando se evalúan los alcances y repercusiones de la medida que no se condiciona a la mejora en términos de garantía de derechos sino más bien a un cambio político y económico que modifique la estructura general de Cuba como nación.

Significados del Discurso

El objetivo central de este texto apela a la justificación de una sanción altamente perjudicial para el Estado cubano, partiendo de eufemismos que buscan legitimar la idea de transición hacia la democracia del Estado. En su contenido se observan algunas afirmaciones tendientes a reivindicar ciertas posiciones políticas e incluso teóricas, un ejemplo de ello es el de la *paz democrática*, propio del liberalismo en la escena internacional, que apela a la paz y a la disminución de riesgos en términos de relaciones entre Estados democráticos (ELIAS, Juanita & SUTCH, Peter (2007) *International Relations: The basics*. Nueva York: Routledge, pp. 41-81 (Capítulo 3: Realism, the basics + Capítulo 4: Liberalism, the basics).

Así, lo que se indica es que el texto se carga de simbolismos que tienden a reivindicar las acciones norteamericanas, a justificar sus alcances intervencionistas pero sobre todo a reafirmar su capacidad impositiva en términos de valores y expectativas. El significado del texto tiende a plantear un escenario hipotético en términos de amplias ventajas y mejoras para Cuba, sin considerar el principal alcance de la norma y sobre todo la auténtica manera de aplicación, si se parte de la base de que su ámbito corresponde a la extraterritorialidad.

Vocabulario que Expresa Relaciones de Poder

Preface by the President of the United States

- [...] *"The promotion of democracy abroad is one of the primary foreign policy objectives of my Administration. These efforts reflect our ideals and reinforce our interests -- preserving America's security and enhancing our prosperity. Democracies are less likely to go to war with one another or to abuse the rights of their peoples"*[...] (Idea de la paz democrática del liberalismo en las RRII).
- [...] *"The United States has been at the forefront of these efforts, lending help in numerous areas in which we have long experience -- for example, building democratic institutions and the institutions of a market economy, and protecting human rights through an effective and impartial justice system"*[...]

- [...]“Cubans, like the other peoples of this hemisphere, of Eastern Europe, and of the former Soviet Union, desire to be free. The United States is committed to help the Cuban people in a transition to democracy”[...]

I. The Context for a Cuban Transition

B. Cuba Awaiting Transition

- [...]“Cuba remains the only country in the Western Hemisphere not committed to democracy and a market economy and the only country in the former Soviet bloc not even in transition to democracy”[...]
- [...]“Cubans continue to be denied basic human rights. They cannot form alternative political parties to the Communist Party, elect representatives of their own choosing, form free associations such as independent trade unions, or freely express themselves, and they are denied recourse to an independent judiciary that could protect their rights”[...]
- [...]“Disenchantment with the current regime's marxist ideology, economic mismanagement and abuse of human rights is widespread, but the regime's only response has been further repression of human rights activists and intolerance of reformist views within the government and affiliated institutions”[...]
- [...]“Thus, while a peaceful transition and an expeditious economic recovery in Cuba will serve the interests of both the American and Cuban people, the timing, nature and course of the Cuban transition must be determined by the Cuban people themselves”[...]
- [...]“Once Cuba has a transition government -- that is, a government committed to the establishment of a fully democratic, pluralistic society -- the United States will be prepared to begin normalizing relations and provide assistance to support Cuba's transition”[...]

II. Consolidating a Political Transition in Cuba

A. Human Rights in a Democratic Society

- [...]“In the late 1940's, Cuba led other nations in the passage of the United Nations Universal Declaration of Human Rights, yet the Castro dictatorship ranks among the world's most systematic violators of human rights”[...]
- [...]“A transition government in Cuba is likely to welcome cooperation from the international community, particularly the United Nations or the Organization of American States, to help it ensure that human rights are respected in Cuba during its transition. Assistance could be provided to monitor human rights conditions, establish a human rights ombudsman function in Cuba, develop an effective public defender service, promote prison reform and meet the special needs of released political prisoners”[...] (mecanismo de intervención).

Acontecimientos que Impulsan el Discurso

- Obligación derivada de las disposiciones de la Ley Helms-Burton.
- Necesidad de promover una descripción clara de la norma y de sus alcances, a fin de disminuir las críticas en cuanto a severidad de la sanción.
- Obligación de dar cuenta de los criterios según los cuales tiene lugar la expedición de una ley con objetivos de aplicación extraterritorial.

Elementos Relevantes

- Se trata el tema de los derechos humanos como elemento determinante en el desarrollo y alcances de la Ley Helms-Burton. Esto como elemento característico de la democracia en

términos liberales si se apela a que la reivindicación discursiva del texto tiende a resaltar derechos de índole político y civil.

- El documento se propone como una herramienta oficial descriptiva pero sobre todo justificadora de la aprobación y sanción de la Ley Libertad.
- El tema económico se revela como el elemento realmente central de la sanción, ello en el marco de que en esta materia Cuba resulta un escenario estratégico para los EEUU. Reflejo de lo anterior es que se afirma [...] *"Well conceived and implemented political and economic transition programs that lead to democracy and market based economies are mutually supportive"* [...] (subrayado por fuera del texto).

Texto del discurso

Support for a Democratic Transition in Cuba:

Report to the Congress

"Only oppression should fear the full exercise of freedom." Jose Marti

Preface by the President of the United States

The promotion of democracy abroad is one of the primary foreign policy objectives of my Administration. These efforts reflect our ideals and reinforce our interests -- preserving America's security and enhancing our prosperity. Democracies are less likely to go to war with one another or to abuse the rights of their peoples. They make for better trading partners. And each one is a potential ally in the struggle against the forces of hatred and intolerance, whether rogue nations, those who foment ethnic and religious hatred, or terrorists who traffic in weapons of mass destruction.

Today, freedom's reach is broader than ever. For the first time in history, two thirds of all nations have governments elected by their own people. As newly democratic nations have left the dark years of authoritarian government behind, millions of their citizens around the world have begun to experience the political and economic freedoms that they were so long and so wrongfully denied.

Creating open societies and democratic institutions and building free markets are major tasks that call for courage and commitment. To face these challenges, many democratizing and newly democratic governments have turned to developed democratic nations and international institutions for assistance and support. The United States has been at the forefront of these efforts, lending help in numerous areas in which we have long experience -- for example, building democratic institutions and the institutions of a market economy, and protecting human rights through an effective and impartial justice system.

Cubans, like the other peoples of this hemisphere, of Eastern Europe, and of the former Soviet Union, desire to be free. The United States is committed to help the Cuban people in a transition to democracy. We will continue working with others in the international community who share our desire to welcome Cuba into the ranks of prosperous democratic nations, where it will proudly join the other thirty-four countries in this hemisphere.

This document outlines the assistance that a democratizing Cuba is likely to seek during its transition and the ways in which the United States and the international community will try to help. It draws from the experiences of other countries that have embarked upon similar transitions and highlights some of the lessons learned from those processes. It is my sincere hope that it will

contribute to a better understanding of the international community's potential role in a transition to democracy and underscore the strong commitment of the American people to support the Cuban people when they embark upon that process of change.

William J. Clinton January 28, 1997

I. The Context for a Cuban Transition

A. The Global Trend to Democracy and Free Markets

During the past decade over two dozen former communist countries have joined the global trend to democracy and free markets. The specific events which triggered these changes varied from country to country, but the numerous transitions have much in common. The lessons learned and experience gained by the United States and the international community in assisting these transition countries develop democratic institutions and market economies can serve the Cuban people well when the opportunity for transition presents itself in Cuba.

The experience of Central and Eastern Europe and the former Soviet Union indicates that the contrast between the personal freedoms and living conditions in democratic societies and the conditions in their own countries became increasingly apparent to the people, despite regime attempts to control information. Independent groups, calling on their governments to respect basic human rights, such as the freedoms of speech, association and assembly, gained popular support. Eventually, the bankrupt political systems dissolved in the face of disillusionment and demoralization within the regime, popular demands for fundamental change, and external international pressures for democratization.

At this point, transitional governments came to power, not yet perhaps themselves fully democratic, but clearly committed to undertake sweeping reforms needed to establish functioning democratic systems. They pledged to respect human rights and undertake free elections. They freed political prisoners and took action to reform or eliminate instruments of state repression, provided greater independence to the judiciary, and removed restrictions on civil society, the media and independent economic activity and private property. And they removed travel restrictions and other barriers that had isolated their people from the outside world.

While citizens themselves provided the impetus for change, external assistance has played an important role in facilitating many of these transitions. Foreign governments and international organizations and lending institutions have supplied critically important resources, training, and technical assistance necessary to overcome the legacy of the past. They have contributed assistance to help improve social conditions, build new political, economic, and judicial institutions, develop new laws, strengthen civil society and private enterprise, and support the economic liberalization and stabilization policies that spur new growth.

B. Cuba Awaiting Transition

Cuba remains the only country in the Western Hemisphere not committed to democracy and a market economy and the only country in the former Soviet bloc not even in transition to democracy. The disintegration of the Soviet Union has exposed the degree to which Cuba's economic model was unsustainable without the artificial "life supports" of massive Soviet subsidies. The Cuban economy has contracted to a level roughly one third to one half below its level in 1989, with little prospect of rebuilding the country's capital base absent fundamental reforms. Even before the loss of Soviet subsidies, Cuba was progressively and predictably losing ground economically relative to

other countries in Latin America. Among the most prosperous countries in Latin America in the 1950s, Cuba now has a per capita GNP about one third that of Chile and about one sixth that of Argentina.

Health and nutrition conditions have deteriorated notably in Cuba. Hospitals and schools remain open, but lack supplies. Since well before the current "special period," chronically low levels of investment produced a severe housing shortage and serious deterioration of Cuba's infrastructure. Ever increasing numbers of Cubans are driven to black marketeering and other illicit activities to survive in a dysfunctional economy. To alleviate food shortages, the regime was forced to reestablish farmers markets. But overall agricultural productivity remains extremely low. Central government control of the sector remains the norm, with little progress realized in converting state farms to self-managing cooperatives and with significant portions of the agricultural sector operated by the military. Small openings to allow self-employment have been accompanied by restrictions that hamper success and limit the creation of new jobs. While the regime continues to deny the general population the benefits of a market economy, it seeks to build an enclave foreign investment sector and a tourism industry based on preferential treatment for foreigners.

Cubans continue to be denied basic human rights. They cannot form alternative political parties to the Communist Party, elect representatives of their own choosing, form free associations such as independent trade unions, or freely express themselves, and they are denied recourse to an independent judiciary that could protect their rights. Since 1991, the United Nations has voted annually to assign a Special Rapporteur on human rights in Cuba, but the Castro regime has refused to cooperate. Since 1990, the International Committee of the Red Cross has been denied the limited access they previously had to the prisons in Cuba where thousands of political prisoners, housed along with common criminals, suffer abuse and deplorable conditions.

Disenchantment with the current regime's marxist ideology, economic mismanagement and abuse of human rights is widespread, but the regime's only response has been further repression of human rights activists and intolerance of reformist views within the government and affiliated institutions. The Castro regime has rejected international advice and support for political and economic reform. Efforts by the Spanish government to provide technical assistance to the Cubans on economic reform stalled in the face of the regime's intransigence. The European Union's negotiations with Cuba on a cooperation agreement also floundered when the regime refused to consider political reform. Hopes for a political opening were dealt a severe blow by further repression of independent groups in Cuba, such as those comprising the *Concilio Cubano*, and by the hardline call for ideological purity by the Central Committee of the Communist Party in March 1996. Absolute political control remains the paramount objective of the regime.

Repression is not the only tool the regime uses to maintain the dictatorship and forestall a democratic transition. It also attempts to manipulate information on conditions internally and developments abroad to engender popular fears regarding the future prospects of Cuba without Castro. The choice for the Cuban people is not between the present and the past, as the regime would have the people believe, but between the present repression and economic malaise and a future of freedom and opportunity for all Cubans.

Based on the experience of the last decade, one can predict that, when given the opportunity to choose, the Cuban people, like the people of every other nation of the Western Hemisphere, and of every other former member of the Soviet bloc, will choose democracy and a market-based economy. The purpose of this report is not to predict the specific timing or circumstances of

democratic change in Cuba, but to help to dispel misperceptions regarding the future challenges and opportunities that Cuba will face once the transition process begins.

C. The United States and International Community Response to a Cuban Transition

The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act reconfirms the United States policy "that the self-determination of the Cuban people is a sovereign and national right of the citizens of Cuba which must be exercised free of interference by the government of any other country." Thus, while a peaceful transition and an expeditious economic recovery in Cuba will serve the interests of both the American and Cuban people, the timing, nature and course of the Cuban transition must be determined by the Cuban people themselves.

Once Cuba has a transition government -- that is, a government committed to the establishment of a fully democratic, pluralistic society -- the United States will be prepared to begin normalizing relations and provide assistance to support Cuba's transition. Economic sanctions will be suspended and negotiations will be initiated to promote bilateral trade relations. To normalize relations fully with a democratic government in Cuba, the United States is also prepared to enter into negotiations to either return the Naval Base at Guantanamo to Cuba or to renegotiate the present agreement under mutually agreeable terms.

To ensure that assistance necessary to facilitate a democratic transition and economic recovery is provided expeditiously and effectively following the establishment of a transition government, the United States will support the creation of a donor coordination mechanism under the leadership of an appropriate international organization. This mechanism will allow the Cuban government to ensure that its priorities and policies are clearly understood by the international community, and facilitate the task of matching Cuban assistance needs to the comparative advantages of each assistance provider.

In shaping its policies and assistance requests, the transition government in Cuba is likely to have aspirations and needs similar to those of other transition countries. While each country is unique, there are common challenges faced by all countries in transition from communism to democracy and market economies. Thus, while the Cubans themselves will need to determine their specific assistance needs, it is likely that a Cuban government embarked upon a democratic transition will seek assistance similar to that which has been provided to other transition countries.

This would include assistance

- to meet critical humanitarian and other import needs early in the transition essential to relieving social hardship and initiating the reactivation of the economy;
- to help the Cuban people and the transition government in the process of building essential democratic institutions, both in the government and in civil society; and
- to help establish the policy, institutional, and legal reforms necessary to stimulate the domestic private sector, meet the long-term social needs of the population, attract foreign investment, meet conditions for lending from international financial institutions and otherwise lay the basis for economic recovery.

Over the medium to long term, the private sector should supply much of the capital resources and know-how needed for a sustained economic recovery following Cuba's transition, thus eventually obviating the need for further foreign assistance.

D. The Favorable Prospects for Cuba Following Transition

Cuba has excellent prospects for achieving sustained economic growth following a transition. First of all, it can benefit from the accumulated transition experiences of other Western Hemisphere and former Soviet bloc countries. The lessons learned from the Soviet bloc transitions have been presented in the World Bank's recently released World Development Report 1996, From Plan to Market. One of the principal observations in the report was the direct correlation between outward looking, liberal economic policies, and new growth and prosperity. The report noted that the transition countries studied typically returned to growth after three years of sustained liberalization.

As Cuba has already undergone the shock from the collapse of COMECON trade, the adjustment period for Cuba following commencement of sustained economic liberalization is likely to be shorter than that experienced by other former Soviet bloc countries. Also, the smaller size of the heavy industry sector in the Cuban economy relative to most of the former Soviet bloc countries should reduce the amount of additional economic dislocation due to adjustment problems common to this sector. Cuba's proximity to the United States market and its location in the heart of a rapidly growing trading region can provide an impetus to growth. The importance of this factor has been amply demonstrated by the former COMECON countries of Central Europe whose growth has been stimulated by rapidly expanding trade and investment with the European Union.

Cuba has a number of other advantages that many of the former Soviet bloc countries lacked. It is a relatively well-integrated society with a single language. Although there are racial tensions in Cuba, they are not comparable to the serious ethnic divisions that have plagued a number of transition countries. Cuba has an educated, flexible, and mobile workforce that can be readily absorbed into new economic activities, and the Cuban people demonstrate a strong entrepreneurial spirit. Cuba will also be able to draw upon the support of a large overseas Cuban community with extensive business and technical expertise, market connections, investment capital and a commitment to help their families and fellow Cubans on the island. Finally, a Cuba in transition can count on the strong bilateral and multilateral support from the United States due to the clear U.S. national interest in having a stable, prosperous and democratic neighbor.

As the World Bank president states in the introduction to the report From Plan to Market, economic transition essentially "is about how to unleash the enormous talents and energies of their populations, and how to help them achieve their countries' vision for a future of opportunity and well being for all their citizens." With an estimated 40% of the Cuban labor force unemployed or underemployed; with much of industry running at only 20% of its former capacity; with agriculture reflecting the poor productivity typical of highly state-controlled economies; and with individual rights, initiative and creativity repressed; it is not difficult to recognize the tremendous under-utilization of Cuba's natural and human resources.

Most Cubans long for greater personal freedom and recognize that a market economy would dramatically improve the overall economic prospects of the country. Nonetheless, some Cubans have reservations about a transition in Cuba, fostered by the regime's negative depictions of other transitions and by its claims that transition or democratic governments in Cuba would not be concerned with issues of national sovereignty, justice, equity, reconciliation and social welfare. Yet supporters and opponents of the present regime should both agree that these are broadly held values in the Cuban population, and thus they can be expected to be guiding principles of transition and democratic governments.

Personal concerns regarding a transition may vary. The pensioner may be concerned about further erosion of his pension. For him, a transition means a healthier economy in which the productively employed generate sufficient resources to provide improved living standards for the entire

population, including pensioners. The worker, having seen real reductions in his wages or the disappearance of his job, can expect that a transition will increase job opportunities and that independent trade unions and effective labor laws will protect his interests and allow him to share the benefits of a growing market economy. Should he become unemployed for a period during the transition, he can expect that reasonable unemployment benefits and services will be available to him. The small farmer or homeowner who has acquired rights to previously confiscated property will expect a transition government to give due consideration to his acquired rights as it pursues resolution of legitimate property claims. Citizens will expect their transition and democratic governments to revitalize health and education services, improving quality while ensuring basic coverage for the population. Government officials and career military personnel should expect that a transition government committed to national reconciliation will prevent acts of retribution against those who do not seek to undermine a democratic transition. Finally, Cubans should expect that all citizens in a democratic Cuba will enjoy equal rights, and that no Cuban citizen will be denied privileges granted to foreigners.

As the transition and democratic governments seek to fulfill these expectations, the necessary international support will be available to help them do so.

II. Consolidating a Political Transition in Cuba

A. Human Rights in a Democratic Society

In the late 1940's, Cuba led other nations in the passage of the United Nations Universal Declaration of Human Rights, yet the Castro dictatorship ranks among the world's most systematic violators of human rights. The active and diverse civil society that once existed in Cuba has largely been eliminated or placed under state control. The present regime regularly imprisons, harasses, and drives into exile Cubans who express unacceptable views or create or join independent organizations.

A transition government in Cuba is likely to welcome cooperation from the international community, particularly the United Nations or the Organization of American States, to help it ensure that human rights are respected in Cuba during its transition. Assistance could be provided to monitor human rights conditions, establish a human rights ombudsman function in Cuba, develop an effective public defender service, promote prison reform and meet the special needs of released political prisoners.

Democratic countries have hundreds, or even thousands, of diverse nongovernmental organizations (NGOs) and interest groups of varying size, strength, membership, and specialization that regularly influence political and social agendas, provide social services, and affect daily life in many ways. In transitional societies NGOs can play a critical role. They can fill social needs not met by government, provide forums for citizens to develop solutions to common problems, and draw public attention to waste, corruption, and abuse of power in the government. NGOs may also provide a means to peacefully channel and resolve individual and group differences in society, thus reducing the potential for disputes to result in violence.

Recognizing the important role of civil society in transition countries, external donors have directed considerable portions of their assistance to and through indigenous independent NGOs in transition countries, often using NGOs from their home countries as intermediaries. When Cuba begins its transition, the panorama of Cuban NGOs likely to attract external support will include formerly repressed independent NGOs, NGOs formerly controlled by the government, and newly created

NGOs. Examples include labor unions, professional and business associations, cooperatives, community organizations, social service organizations, women's groups, environmental organizations, human rights organizations, and private think tanks.

An independent media plays a crucial role in a flourishing democracy and market economy. In addition to providing timely and objective information to citizens, it serves as an independent source of information to the government concerning public opinion and the realities in the country. International NGOs can help a Cuban transition government invigorate the independent media by providing assistance to train independent journalists in objective, responsible reporting methods. Technical and financial assistance can also be provided to help establish private independent radio and print media enterprises.

Critical to the development of democracy in any transition country is the formation of a strong multiparty system that will allow citizens of diverse views to effectively express themselves politically, influence the government and its policies, and peacefully reconcile diverse popular interests and agendas. Even after restrictions to the formation of political parties are eliminated by a transition government, the legacy of decades of totalitarianism can impede the development of a strong competitive multiparty system in which compromise, consensus building, coalition building and democratic principles are the norm. To help overcome the common problems of inexperience with the formation and operation of democratic parties in transition countries, donors typically provide assistance through national and international NGOs to strengthen democratic political parties. Training and technical assistance may be provided to party leaders and activists to develop organizational, fund-raising, communications and coalition building capabilities.

B. Efficient, Democratic and Accountable Government

Transition governments face numerous governance challenges, however they come to power. They need to maintain peace and public order, without resorting to the authoritarian methods of the past. They are also challenged to increase the openness, transparency and responsiveness of the public sector. Moreover, they are faced with the concurrent tasks of satisfying the basic needs of the populace, beginning the process of national reconciliation, and defining and initiating a program of political and economic reform.

During the early phase of transition, the international community can ease the transition government's task of meeting basic needs by providing humanitarian assistance distributed through existing official channels and through NGOs. Cooperating countries and international institutions should also offer long-term advisors who can help coordinate the provision of technical assistance to support the government's political and economic reform agenda. Frequently, the impetus for reform is uneven between different parts of a transition government, and this factor can significantly shape the allocation of assistance. While donors will generally attempt to respond to a transition government's stated priorities, they will avoid committing significant resources to a particular institution in which the internal commitment to reform is lacking, regardless of the objective importance of the institution and its programs.

Transition governments also face the longer term challenge of reforming public management. Assistance is likely to be provided to strengthen financial management, control and accountability systems, develop depoliticized merit-based personnel systems, and improve tax administration. A Cuba in transition may also follow the example of other transition countries by devolving real power and responsibility to local governments. The international community can assist by providing the central government technical advice on decentralization and by providing training, technical

assistance and resources to local officials. Effective municipal governments can provide much of the momentum for economic transition, as has been demonstrated by the role they have played in the privatization process in many transition countries.

Although the Cuban armed forces constitute one of the most important pillars of the present regime in Cuba, they could potentially play a positive role in Cuba's transition. The militaries in other former communist countries have acquiesced or actually assisted in democratic transitions. These militaries have found that their core professional interests need not be threatened by the advent of democracy and the withdrawal of the military from non-military functions, such as internal security and economic activities.

A professional military that is sized to Cuba's needs, supportive of a civilian democratic government, and respectful of human rights can expect to participate in the Inter-American Defense Board, be welcomed to participate in international peace keeping efforts and benefit from an array of military-to-military cooperation arrangements, including with the United States.

Establishing the conditions for free and fair elections and passing power to a democratically elected government is a major goal of transition regimes. This entails ensuring freedom of speech, press and association, allowing political parties the opportunity to adequately organize and campaign, preparing election laws, ensuring accurate voter registries, developing the necessary administrative structures, training election officials and poll watchers, and educating the public on the election process and encouraging their active participation.

International assistance has been provided to transition countries in all aspects of preparing for and undertaking elections, including the acquisition of necessary equipment and materials. The Organization of American States, or other institutions, can also provide the additional assurance of international election observers. In this hemisphere, major international efforts have supported elections in countries such as Chile, Nicaragua, El Salvador and Haiti.

Newly established democratic legislatures in transition countries often need assistance to effectively perform an independent legislative role that differs significantly from the rubber-stamp role performed by legislatures in communist countries. Donors can provide technical assistance to help legislatures develop rules of order and procedure, committee structures, and communications mechanisms with the executive branch and the public. Exchange visits can be arranged for new legislators to experience the operation of legislatures in other countries, and technical assistance, informational materials and computer systems can be provided to help with legislative research and drafting.

C. Rule of Law

One of the more complex and lengthy tasks facing transition countries is establishing the rule of law. In a country governed by law, the basic instrument that shapes society, the economy and the government is the constitution. The transition countries of central and eastern Europe developed their new constitutions drawing heavily on their precommunist legal traditions. Cubans may decide to retain aspects of their present constitution, incorporate aspects of the 1940 constitution, and look to models elsewhere in the hemisphere and beyond for yet other provisions. If the Cuban authorities wish to examine the advantages and disadvantages of different constitutional models and provisions, the international community can assist in this process by providing the advice of constitutional experts.

Generally, establishing the rule of law also requires reform of the criminal and civil procedures and

codes; the development of law enforcement institutions that are capable of enforcing the law while respecting guaranteed individual rights; a judiciary that has the skill and independence to interpret and apply the law impartially; a legal profession that can effectively advise and represent individuals; public defenders who can defend vigorously and independently those who do not have access to private counsel; and respect for the rule of law by the citizenry and public officials.

The experience from other transition countries demonstrates the potential consequences of inadequate attention to developing an effective rule of law following the dismantling of the old authoritarian control structures. Crime and corruption can increase significantly and the development of a market economy can be seriously impaired. Based on this experience, the transition government in Cuba, as well as donors, are likely to give an early and sustained priority to developing and strengthening the rule of law.

The international community can provide advisory and institutional assistance in constitutional and legal reform to help the Cuban government incorporate the most appropriate elements from other legal systems into Cuba's own system. In establishing the rule of law, assistance for civic education and strengthening civil society can provide important complements to assistance aimed at the development of legal institutions.

Assistance to law enforcement agencies can begin once potential cooperating institutions have confidence that such agencies are committed to enforcing the law while respecting individual rights. A priority for a transition government is likely to be the development of a law enforcement capacity to deal with the potential threats of organized crime, fraud and corruption. Such assistance can be provided by law enforcement agencies from other concerned countries. As the volume of law enforcement cooperation increases, exchanges of information between Cuban and United States law enforcement agencies can be facilitated by the negotiation of a Mutual Legal Assistance Treaty similar to agreements that the United States has signed with other countries, such as Canada, Mexico, Jamaica, Argentina and Spain.

A democratic Cuba with a market economy will require considerably more judges than the country has at present, and they will need the skills and knowledge to effectively and fairly adjudicate cases in accordance with new laws and procedures. A major long-term effort will be required to retrain existing judges and train new ones. Effective administration of justice will also require training of other judicial personnel and the establishment of efficient administrative procedures and systems. Donor assistance can be helpful in all of these areas. In addition, a transition in Cuba is likely to require short-term measures to expeditiously deal with disputes such as property claims. The international community can provide technical assistance to help develop such mechanisms and institutional support for their implementation.

III. Achieving Economic Transition and Recovery

A. Common Elements of Economic Transition

Although transition countries have each had their different challenges and somewhat different near-term objectives, their experiences have borne out some common lessons:

- Liberalizing the economies by opening trade and market opportunities creates growth. This means allowing competitive market prices to prevail in the economy and permitting the formation and operation of new enterprises.
- Growth typically comes through expansion of the private sector and reform and significant privatization of state enterprises.
- A policy of liberalization needs to be accompanied by a policy of economic stabilization,

entailing fiscal and monetary discipline, and both policies should be consistently applied.

-- Social safety nets can and should be restructured to protect citizens during the transition to a market economy and beyond.

-- Property rights should be clearly established and protected, and appropriate financial, legal and regulatory systems need to be developed.

-- An educational system designed to serve a command economy will require reform if it is to provide the appropriate mix of skills for a new market economy.

-- Integration into the global economy, including full participation in international financial institutions and trade organizations is a key ingredient to successful economic transition and recovery.

Technical and financial assistance from cooperating countries and international financial institutions can play a critical role in helping Cuba meet these challenges during its transition.

B. Private Enterprise and Independent Labor

The evidence from transition economies around the world clearly demonstrates that small businesses, especially in trade, services, and retailing thrive once restrictions are removed. This sector can provide most of the growth and job creation during the early years of a transition. Despite the many restrictions on private enterprise in Cuba, particularly the restriction against employing non-family members, the relative success of the self-employed provides a clear indication of the potential growth that Cuba can expect from this sector. Under present Cuban law, a foreign firm can employ Cubans through the state, but a private Cuban is prohibited from creating a job for another Cuban, regardless of how beneficial such an employment relationship would be to both parties. The Cuban entrepreneur is denied the opportunity to become more successful and potential employees are denied the opportunity to share that success.

From early in the transition, the international community can help the government of Cuba create jobs and resurrect economic activity by financing programs that will provide technical assistance, training and credit to support the growth of small enterprises. A broad range of international NGOs are likely to become active in Cuba to help enterprising Cubans start and expand their own businesses.

Removing state controls and stimulating private initiative in the agricultural sector will also provide significant growth during the early transition years in Cuba. Farmers in Cuba, as elsewhere, have clearly shown the beneficial productivity effects of market incentives and individual ownership of land. International assistance can be particularly helpful in establishing the mechanisms to expeditiously title and register new private plots and develop land markets. For groups of farmers who prefer to operate as production cooperatives, donors can provide assistance to help them increase productivity and take full advantage of a market economy. External assistance may also be provided to help farmers establish and operate independent credit and/or service cooperatives. In addition, assistance may be provided to help privatize remaining state farms, agro-processing facilities and export marketing functions, and to stimulate the development of other private support services, such as the leasing of equipment and the provision of agricultural inputs.

C. Legal and Institutional Framework for a Market Economy

To encourage the domestic and foreign private investment necessary for economic recovery and long-term growth, Cuba, like other transition countries, will seek to develop a legal and institutional framework that will provide a supportive, fair, transparent, and predictable business climate. Individual property and other economic rights need to be defined and made secure, while protecting

public interests.

To secure property rights for all citizens, Cuba may seek assistance to establish a reliable property titling and registry system. Like many other transition countries, Cuba will also face the task of resolving the legacy of property confiscations in order to build the confidence of citizens and foreign investors alike that property rights will be protected in Cuba in the future. By promptly initiating a process to clearly identify who are the recognized owners of property, and by acknowledging the intent to provide some form of compensation to legitimate claimants who will not have their property returned, Cuba can minimize the scope and period of ownership uncertainty that can impede property exchanges and investment.

It will be up to the transition government to determine the circumstances under which it is advantageous to restore properties to former owners versus providing compensation. Common considerations include equity concerns for those who have acquired competing rights to property, the length of time required to clarify ownership under both approaches, and the government's interest in seeing productive property put to economic use. The transition government will have the challenge of balancing these concerns in order to avoid dislocation or hardship for ordinary citizens while laying the foundations for economic growth.

The experiences of various countries of Central and Eastern Europe may be useful to Cuban officials in determining the best approach to claims resolution. While claims espoused by foreign governments, such as the United States, may be readily resolved through bilateral negotiation, the larger number of claims that would be subject to individual resolution under Cuban law presents a greater challenge. International assistance can be provided to help develop solutions that are politically, administratively and financially viable. The utilization of transferable privatization vouchers as a form of compensation is one example of creative solutions that have been used elsewhere.

In addition to securing property rights, transition governments establish other new laws to promote and regulate economic activity in a market economy, and generally protect the public interest. Technical, training and financial assistance will be available to help Cuba develop suitable laws and enforcement institutions relating to collateral, contracts, companies, bankruptcy, securities, land, condominiums, foreign investment, prevention of monopolies, labor codes, consumer protection and environmental regulations.

In order to efficiently mobilize and allocate investment capital and support private sector led growth, transition countries have had to undertake significant reform of their financial sectors. Reform of the financial sector has equity as well as efficiency implications. Instead of having credit allocations determined administratively or politically, credit should be broadly available to those borrowers who can productively use it and repay their loans.

International assistance can be provided, particularly by the international financial institutions, to restructure the state banking system with the prospect of partial or complete privatization; to develop the laws, regulations and supervisory capacity for a financial system that includes private banks; and to train bankers to adequately assess commercial risk on loans to private borrowers and state enterprises alike. Technical assistance can also be provided to help develop the legal and institutional framework for the operation of other financial markets, such as securities markets, venture capital operations, insurance and pension funds, and home mortgage lending. Private capital and expertise will play an increasingly important role in the development of the financial sector as the transition proceeds.

D. Managing the Economic Transition for Growth and Equity

The more successful transition governments have established coherent policies to liberalize and stabilize their economies in order to stimulate economic growth. Cuba has undertaken a number of stabilization measures to cope with the shock of the loss of Soviet subsidies and COMECON trade, but its liberalization measures have been far too limited to stimulate significant growth. External technical assistance will be available to help a transition government formulate and carry out stabilization and adjustment policies that will promote growth while protecting vulnerable groups. In addition, capital resources, primarily from the international financial institutions, will be available to help cover financial gaps during the stabilization and adjustment process. With a sound policy framework, private capital flows will play an increasingly important role in financing the stabilization, adjustment and recovery of the Cuban economy.

Cuba can expect assistance similar to that provided to other transition countries to reform and privatize state enterprises. Donors can help the Cuban government design and implement privatization processes that are transparent and encourage broad participation. Privatization programs that provide partial or full ownership to workers can be designed where such solutions are appropriate to meet the government's social and economic objectives. Expertise can also be provided to help the government negotiate the most favorable terms on large scale privatizations.

Assistance in tax administration can be provided to help the Cuban government develop a tax system to obtain adequate revenues through broad compliance and enforcement of reasonable tax rates on consumers and the emerging private sector. On the expenditure side of the budget, assistance can be provided to help improve the efficiency of key government services. For example, comparisons of the cost of the Cuban health system with the costs of the health systems in countries in the region with comparable health indicators reveal that Cubans could have the same or improved health results at considerably less cost. A transition government in Cuba may also obtain donor assistance to help establish the long-term viability of the government's pension and disability system, and ensure that unemployment and social assistance programs provide effective protection to vulnerable groups during the economic transition and beyond.

In the early part of Cuba's transition, humanitarian assistance can help address immediate social needs and cushion the impact of adjustment measures. Assistance will also be offered to help minimize unemployment created from layoffs from state enterprises, the central government and the military. This would include retraining, job placement services, the financing of labor-intensive public works projects, and programs and policies aimed to spur job creation in the private sector.

E. Developing the Human Resources for a Successful Democracy and Market Economy

While politically constrained, Cuba's educational system has provided both broad access to basic education and extensive higher education in the fields of study considered important by the regime. The challenge to Cuban authorities following a transition will be to preserve the positive aspects of Cuba's education system while adapting it to meet the educational needs characteristic of a democracy and a market economy. Donors can provide assistance to the Cuban government in developing or revising academic programs in areas such as market economics, finance, accounting, business management, law, sociology and history. Assistance may also be provided to train teachers in methodologies that encourage critical thinking and creativity. As private educational institutions spring up to meet particular needs not met by the public educational system, assistance may also be provided to help develop accreditation and oversight procedures. Donors also will be prepared to assist with other educational reforms, such as decentralization and alternative financing schemes for higher education.

F. Rebuilding Infrastructure

Years of low investment combined with neglect of maintenance in recent years have led to serious deterioration in Cuba's infrastructure. Significant investment will be needed in water and sanitation, power, telecommunications and transportation systems. Initially, the international community can help improve service by providing resources to finance inputs, spare parts and repairs. Technical assistance can also be provided to the Cuban government to develop an infrastructure investment plan that would identify emergency requirements and long term needs. Over the medium term, the Cuban government will probably seek donor assistance to finance feasibility studies; improve the operation and financial viability of public utilities; undertake the privatization of utilities and encourage competition in services; and develop regulatory mechanisms for natural monopolies. While some financing for major capital investments may be available from the international financial institutions and bilateral sources, over time the bulk of external financing for improvements in Cuba's infrastructure is likely to come from private sources.

G. Integration into the Global Economy

A transition in Cuba will set in motion the process for Cuba's reintegration into the regional and international organizations that can provide important financial resources for economic restructuring. Restoration of membership in the International Monetary Fund (IMF) should be an early priority, both to gain access to IMF credits and as a necessary step toward renegotiation of Cuba's external debts. Renegotiation of the external debt will result in renewed credits from official and private sources. Readmission to the Organization of American States will allow Cuba to become a member of the Interamerican Development Bank (IDB). IDB and World Bank membership will allow Cuba access to structural adjustment loans. The United States will support early membership in these organizations and will offer bilateral assistance to help Cuba meet conditions for membership and loans.

Cuba's economic recovery during transition will be significantly aided by the increased opportunities for trade resulting from marketization of the economy and the lifting of the United States embargo. Cuba can also expect United States support for Cuba's inclusion in international trade agreements, and bilateral assistance to help Cuba overcome internal constraints to trade. Helping Cuba establish an attractive investment climate should also be an objective of the overall assistance program. Investment accords with the U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC) and the World Bank's Multilateral Investment Guarantee Agency would allow foreign investors to obtain from these organizations political risk insurance and financing for their Cuban investments and provide the Cuban government access to investment advisory services.

IV. Conclusion

Well conceived and implemented political and economic transition programs that lead to democracy and market based economies are mutually supportive. A democratic government, a free press, an active civil society, and the rule of law, will all help ensure that a market economy emerges in Cuba that will benefit all Cubans. Similarly, economic policies that lead to growth and broad dispersion of property ownership, while protecting vulnerable groups, will help guarantee political stability and the consolidation of democracy.

Cuba has the human and natural resources to become a free and prosperous nation. When it undertakes a transition to democracy, Cubans from all walks of life, from San Antonio to Maisí, can count on the United States and the international community to help them forge a peaceful future, free from repression and economic misery. Cuba will then take its rightful place in the democratic

community of nations, befitting its long history of struggle for freedom.

ANNEX

RESOURCE FLOWS TO SUPPORT

CUBA'S TRANSITION AND ECONOMIC RECOVERY

I. Bilateral and Multilateral Flows and Private Assistance

A transitional government in Cuba committed to undertake fundamental political and economic reforms and ready to work cooperatively with external donors can expect substantial amounts of support from the United States, other governments, the European Union, agencies of the United Nations, the World Bank, the Interamerican Development Bank (IDB), and the International Monetary Fund (IMF), as well as from private sources, such as private voluntary organizations.

Prior to the advent of the current regime, Cuba was a member of both the IMF and the World Bank. Following a political transition, it should be a relatively straightforward process for Cuba to rejoin these two institutions. Cuba was never a member of the IDB. Consequently, the question of Cuba's voting share in the IDB would have to be resolved and Cuba would have to first rejoin the Organization of American States. These should not be serious obstacles. The amount of lending from the multilateral development banks would depend on a number of factors, including Cuba's possible eligibility for concessional financing under the International Development Association (IDA) of the World Bank, and the Fund for Special Operations (FSO) or the Intermediate Financing Facility (IFF) of the IDB.

Grant and other concessional assistance will be most significant in the early years of the transition. Due to proximity and national interest, the United States can be expected to be the predominant bilateral provider of such assistance, as was the case in other nearby countries that have undergone significant political change, such as Panama, Nicaragua and Haiti. While some concessional and non-concessional official credits and credit guarantees from various countries should start to become available early in the transition, Cuba will need to enter a funding agreement with the IMF and renegotiate its outstanding official debt before it can fully take advantage of this type of financing.

At this time, no country or international institution is in a position to make a specific funding commitment to support Cuba's transition. Nonetheless, it is reasonable to project that, during a six year period following the establishment of a transition government, Cuba would receive from \$4 billion to \$8 billion in private assistance and loans, grants and guarantees from the international financial institutions, multilateral organizations, and individual countries. After this period, the economic transition should be well advanced, and private and commercial flows into Cuba ought to be sufficient to make the economy self-sustaining without significant further external official assistance.

II. Remittances and Foreign Direct Investment

With the removal of restrictions on remittances by the Cuban community in the United States, it is likely that there will be a surge in remittances starting early in the transition. These resource flows will provide both a positive stimulus to the economy and an important source of financing for small scale private investment. Projections based on remittance flows from other immigrant communities

in the United States suggest that remittances to Cuba following a transition could exceed a billion dollars per annum.

While the Cuban Government has released varying figures on the total amount of foreign direct investment in Cuba, the amount of investment actually realized appears to be significantly lower than official declarations. With a democratic transition and market economy, dramatic increases in foreign investment can be expected to provide much of the capital needed for Cuba's economic recovery. It has been estimated that a three country composite of comparable Latin American countries (Costa Rica, Dominican Republic, and Jamaica) received \$267 million in foreign direct investment in an ordinary year. Given the investment opportunities that a reformed Cuba would offer, it is likely that foreign investment in Cuba would be substantially greater than this total.

III. Conclusion

The amount of available financing, official and private, for Cuba's transition appears to be quite large, certainly larger than what was available on a per capita basis to any of the countries of the former Soviet Union. Assuming a will on the part of the transition government to carry out reforms expeditiously, ample funding to facilitate that process should be available.

Anexo 3 Tabla. Palabras Clave

Palabras Clave		Discurso Inaugural 1993
Derechos Humanos	Libertar	3 referencias
	Propiedad	0 referencias
	Libertad de expresión	0 referencias
Democracia - Democratización		4 referencias
Amenaza a la seguridad		1 referencia
Transformación política		0 referencias
Cambio de régimen político		0 referencias
Derechos Civiles y Políticos - DDHH		0 referencias
DESC		0 referencias

Palabras Clave		Declaración: Firma de la Ley Helms-Burton
Derechos Humanos	Libertar	3 referencias
	Propiedad	1 referencia
	Libertad de expresión	0 referencias
Democracia - Democratización		9 referencias
Amenaza a la seguridad		0 referencia
Transformación política		8 referencias
Cambio de régimen político		2 referencias
Derechos Civiles y Políticos - DDHH		1 referencia
DESC		0 referencias

Palabras Clave		Observaciones: Convención Demócrata
Derechos Humanos	Libertar	9 referencias
	Propiedad	0 referencias
	Libertad de expresión	0 referencias
Democracia - Democratización		6 referencias
Amenaza a la seguridad		0 referencias
Transformación política		1 referencia
Cambio de régimen político		1 referencia
Derechos Civiles y Políticos - DDHH		2 referencias
DESC		0 referencias

Palabras Clave		Documento: <i>Apoyo a la transición democrática en Cuba</i>
Derechos Humanos	Libertar	9 referencias
	Propiedad	17 referencias

Libertad de expresión	0 referencias
Democracia - Democratización	58 referencias
Amenaza a la seguridad	1 referencia
Transformación política	105 referencias
Cambio de régimen político	5 referencias
Derechos Civiles y Políticos - DDHH	28 referencias
DESC	0 referencias

Anexo 4. Documento. Ley 80 de 1996: De la reafirmación y de la dignidad y la soberanía cubana.

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA REPÚBLICA DE CUBA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN⁵

LEY DE REAFIRMACIÓN DE LA DIGNIDAD Y LA SOBERANÍA CUBANAS

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY POR RICARDO ALARCÓN DE QUESADA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Tengo el honor de presentar, con el concurso de los diputados de las comisiones de Relaciones Internacionales, de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Económicos, este proyecto de ley que daría respuesta, por nuestra parte, al engendro ilegítimo, injerencista, violatorio de todas las normas del derecho internacional, que ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos y que es conocido con el nombre de sus autores.

Yo quisiera, antes de entrar a fundamentar el texto que les proponemos, referirme brevemente a algunas circunstancias que rodearon la promulgación de dicho texto por el gobierno norteamericano.

Falsificando completa y deliberadamente la verdad, se ha tratado de utilizar el incidente ocurrido el 24 de febrero como excusa para haber propiciado la adopción de esa denominada ley por Estados Unidos.

Hay que decir, ante todo, que en ningún momento antes del 24 de febrero, después del 24 de febrero, o después de la promulgación de la llamada Ley Helms-Burton, en ninguna ocasión, de modo claro, específico, oficial, las autoridades norteamericanas declararon su intención de vetar esta ley, de hacerla imposible.

Por otra parte, desde el mes de noviembre de 1995, exactamente desde el día 13 de noviembre de aquel año, existía este documento, que es esencialmente la Ley Helms-Burton tal y como fue promulgada, prácticamente sin ningún elemento nuevo o diferente, que había sido pactado, acordado entre los representantes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos -antes habían existido dos versiones--, y entre representantes del Partido Demócrata y del Partido Republicano, quienes se habían puesto de acuerdo en un texto, que -repito --es prácticamente idéntico al que finalmente sería adoptado.

Esto ocurrió algo más de tres meses antes de que hubiesen producido aquellos incidentes; pero, además de eso, como todos sabemos, un elemento esencial de este engendro norteamericano está relacionado con la pretensión de devolución de sus llamadas "propiedades", que reclamarían los batistianos, los malversadores, los explotadores de origen cubano que devinieron después ciudadanos de Estados Unidos.

Yo tengo aquí este informe, que es un documento público de Estados Unidos, que es el informe que cada año presenta al Congreso de la Unión la Comisión Federal de Reclamaciones, que es el órgano de Estados Unidos que brega con el tema de reclamaciones de propiedades de norteamericanos en otros países.

⁵ Fuente: <http://www.cuba.cu/gobierno/antidoto.htm>

Este es el informe correspondiente al año 1990; es decir, cinco años antes de que se hubiese presentado la primera versión de lo que ahora es la Ley Helms-Burton, y dos años antes, incluso, de que hubiese sido aprobada la llamada Ley Torricelli.

En este informe, en su última sección referida a los programas, a la actividad futura de la comisión, se anuncia que la comisión tiene ante sí solicitudes para que se reabra el programa que con relación a Cuba habían cumplido en los años 60 y culminaron a comienzos de los 70, relacionados con las reclamaciones norteamericanas por las propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas en Cuba al principio de la Revolución, para ampliar ese programa y agregar, sumar a él, a los llamados nuevos reclamantes.

En 1990 el Congreso de Estados Unidos recibió este informe, que es público; recibió uno que repite lo mismo en 1991, en 1992, en 1993, en 1994 y en 1995, de manera que esa pretensión de extender supuestos derechos, a supuestos reclamantes, de reclamar la devolución de sus propiedades en Cuba es bastante más antigua que el incidente de febrero, e incluso bastante anterior que la Ley Helms-Burton y que la Ley Torricelli.

No voy en esta ocasión a abundar en los datos que ilustran claramente cómo ese incidente no fue en lo absoluto responsabilidad de Cuba y que lo fue enteramente de Estados Unidos. No hace falta recordar los detalles de los antecedentes de vuelos de pequeñas aeronaves procedentes del Norte, que, desde el triunfo de la Revolución, fueron empleadas para labores de sabotaje, para provocaciones militares, para la introducción de elementos y sustancias biológicas, y para introducir en este país bacterias que afectasen nuestros cultivos, pero también que afectasen, como han afectado, la vida de nuestros conciudadanos.

No voy a referirme ahora a la larga lista de incidentes de violaciones de nuestra soberanía por parte del mismo grupúsculo contrarrevolucionario que participaría en los hechos del 24 de febrero, pero es bueno recordar que los propios norteamericanos antes, mucho antes de la fecha de febrero, habían iniciado un proceso investigativo y legal, de carácter legal, contra esas personas; habían solicitado la cooperación de Cuba para proceder contra esos individuos, la habían recibido, nos habían agradecido esa cooperación y habían emitido esta orden, al dicho grupo, para que cesara y desistiera de la repetición de esas acciones ilegales.

No voy tampoco a extenderme en referir como, por diversas vías, nuestro gobierno había advertido al gobierno de Estados Unidos de los peligros que entrañaban la repetición de estos incidentes y de estas acciones ilegales de algunos grupos en la Florida, ni tampoco en el hecho de que por la misma vía recibimos seguridades y compromisos, expresión de la voluntad de impedir la repetición de tales incidentes, que, además, correspondían con el intercambio entre ambas cancillerías, con lo que dice este documento, con la cooperación que nos habían solicitado y que les habíamos ofrecido para evitar la repetición de tales hechos.

No voy tampoco a referirme al hecho de que contra toda la falsa publicidad que habla de supuestas aeronaves civiles, da la casualidad que se trata, en todos los casos, del empleo de un modelo de avión, el Cessna-337, que todos los manuales de aviación definen por su empleo doble, tanto para tareas de carácter civil como de carácter militar. No hace falta recordar que para fines militares fueron empleados en Viet Nam y fueron empleados en Centroamérica; tampoco les voy a repetir la copiosa literatura de la prensa de Miami, donde algunas personas solicitaban que el Pentágono les facilitase algunas aeronaves modelos Cessna-337, precisamente, porque ya había terminado el conflicto en El Salvador estaban disponibles.

No voy a repetir, sólo mostrar el hecho de que en la propia prensa de Miami se publicaron reportajes como este (muestra reportaje), donde se muestra un avión donde voló el editor de un periódico norteamericano y que todavía el avión conserva las cuatro letras USAF, que lo definen como avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; ni tampoco a explicar esta foto (la muestra), correspondiente a un avión que todavía tiene en el ala las letras que lo identifican como avión de las fuerzas aéreas norteamericanas, y que, según los propios investigadores de la Organización de Aviación Civil Internacional, cuando ellos fueron a la ciudad de Miami, este mismo avión se encontraba en el mismo hangar que utiliza ese grupo, y, según dijeron ellos -y es totalmente cierto-, todavía conservaba las letras, lo único que la "F" está un poco difusa, aunque puede ser claramente percibida de cerca.

No voy tampoco a abundar en la forma en que Estados Unidos manipuló la investigación encargada a la Organización de Aviación Civil Internacional, cómo no permitieron a los investigadores entrevistar a ningún testigo, cómo falsificaron pruebas y se negaron a entregar las cintas originales de las grabaciones que ellos poseían, cómo destruyeron o no entregaron algunos datos de sus sistemas de radar y cómo, en fin, obstruyeron la investigación, la hicieron más difícil, la demoraron al máximo. La manipularon, en una palabra.

Quiero detenerme sólo en un aspecto que prueba la responsabilidad que recaía y recae sobre algunas autoridades norteamericanas. En el propio informe de los investigadores de la OACI se hace referencia al hecho de que, el 13 de febrero, el Departamento de Estado había dirigido una comunicación a otras instancias del gobierno norteamericano, advirtiéndoles de la posibilidad de que ocurriese algún problema con estas aeronaves, algún incidente que involucrase a Cuba.

El 24 de febrero solicitó el mismo departamento a la torre de control del aeropuerto de Oppa Locka, cerca de la ciudad de Miami, información acerca de esos aviones si habían salido, si iban a salir. A las 13:08 le comunicaron a Washington, desde Oppa Locka, que los aviones estaban allí en la pista, que se estaban moviendo para iniciar el procedimiento para despegar, y a las 13:15 horas volvieron a comunicarse con Washington para indicarles que los aviones acababan de despegar. Eso es lo que los norteamericanos admitieron y dejaron reflejar públicamente en el informe de los investigadores, a quienes también entregaron este mapa (muestra mapa) que traza, con esta línea amarillo verdosa, de trazos interrumpidos, la ruta que había sido autorizada, el plan de vuelo autorizado por las autoridades federales para la realización de ese vuelo; y la línea continua más fuerte, azul, la ruta que siguieron realmente. Dice así el mapa: ruta aprobada aquí, ruta planificada y ruta real.

Si ustedes se fijan, verán que el vuelo comienza a las 13:15 en Oppa Locka y el mapa se detiene a las 15:20 cuando ya están las aeronaves entrando en el espacio aéreo cubano --lo detienen ahí por razones que después voy a explicar--; pero fíjense que esto significa que un vuelo que demoró en general, aproximadamente unas dos horas, una hora y tres cuartos, una hora y cuarenta y cinco minutos, los aviones estuvieron sobrevolando la Florida o volando en el área del estrecho que está bajo la jurisdicción norteamericana a los fines del control aéreo, lo que se llama la Zona de Información de Vuelo, que corresponde a Estados Unidos de América, del Paralelo 24 hacia arriba.

Durante una hora y tres cuartos, de las dos horas del vuelo, estos aviones estuvieron violando el territorio norteamericano, las leyes norteamericanas, las regulaciones norteamericanas y Estados Unidos no hizo absolutamente nada para evitar que se continuase la violación de sus propias normas, o para evitar que ocurriese un incidente internacional.

Fíjense cómo, apartándose de la ruta autorizada -y apartarse de la ruta autorizada, según los convenios internacionales, es una causal para obligar a un avión a detener su vuelo y aterrizar-, ellos vieron y registraron, y se lo informan a la OACI, cómo en lugar de una ruta que los hubiera llevado aproximadamente al norte de Villa Clara, los aviones se dirigieron exactamente hacia el sur, cuando se encontraban frente a la capital de la República de Cuba y mantuvieron esa dirección todo el tiempo, hasta este punto en que ellos deciden ser discretos y no hablar de más allá de las 15 horas 20 minutos.

Pero como siempre suele suceder, las mentiras no pueden vivir mucho tiempo y no es fácil ocultar la verdad todo el tiempo; después de la investigación de la OACI, en Estados Unidos de América tuvo lugar un proceso ante un juez federal norteamericano, ante el cual concurrieron algunos testigos y se presentaron algunos documentos. Entre los testigos hubo un señor de apellido Houlihan, que es oficial responsable de los servicios de radares de Estados Unidos, que tiene la responsabilidad de registrar y controlar los vuelos hacia o desde Estados Unidos.

Este señor, en la larga documentación que apareció ante ese juez -que, por supuesto, no ha sido publicada en la gran prensa, pero son documentos públicos-, para que tengan una idea de la extensión de esa documentación, en la página 1796 aparece el testimonio del señor Houlihan, donde dice que el 17 de febrero - ¡el 17 de febrero! --, es decir, una semana antes del incidente, él había sido citado a una reunión con otros oficiales o funcionarios norteamericanos que no puedo decir quiénes son, porque él tampoco lo dijo, pero

explica que es una reunión oficial a la cual fue citado y tuvo que concurrir por su responsabilidad, en la que se le dijo que el día 24 de febrero este grupo iba a volar desde Oppa Locka hasta Cuba para crear un incidente político.

Unas páginas más adelante, en su testimonio, el señor Houlihan explica que el 23 de febrero -o sea, el día antes- lo volvieron a citar y él volvió a concurrir, a una reunión en la que se le reiteró: "Mañana, 24 de febrero, este grupo va a despegar desde Miami para volar sobre Cuba, para crear un incidente político." El día 24 de febrero, según lo que dice Houlihan en la página 1808 -y son declaraciones bajo juramento, ante un juez, en un proceso legal, en un juicio--, precisó que el 24 de febrero, a las 7:45 de la mañana, lo volvieron a citar y él volvió a concurrir a una reunión con otros oficiales, donde le ratificaron que ese día se produciría dicho vuelo y el incidente programado.

Ante el juez de marras no sólo concurren testigos, sino que, además, se presentaron documentos como este (lo muestra), que es la relación -es como el cuaderno de bitácora-- de los servicios de radar de Estados Unidos, donde van dando cuenta, por minutos, de donde, en el caso que nos ocupa, se está refiriendo a estos aviones, vieron que el mapa terminaba a las y 20, ¿no es así? ¿Porque ellos no tenían más datos?, no, porque no les convenía presentar ante el mundo los datos que tenían como este.

Lo que ocurre a las y 22, dos minutos después, lo voy a leer textualmente:

"Observé tres aviones -del grupo contrarrevolucionario- cruzando hacia el territorio cubano y avanzando hasta unas tres millas, mantenían dirección hacia el sur. A las 3:23 -nuevamente dice- los tres aviones continúan avanzando dentro del territorio cubano con rumbo sur." Si recapitulamos los hechos, veremos que estamos hablando ya prácticamente del instante en que nuestra Fuerza Aérea, cumpliendo su deber, actuando con plena responsabilidad, defendió el cielo de la patria y puso fin a una violación de nuestra soberanía y a una amenaza, y evitó una seria amenaza, un serio riesgo para la población de Ciudad de La Habana.

Habría que preguntarse: ¿Cuál es el gobierno responsable de estos hechos? ¿Quién sabía de antemano? ¿Quién podía evitar que el incidente ocurriese? ¿El gobierno de Cuba, que había recibido promesas, que había sido informado de medidas que se habían adoptado contra esta gente, que había cooperado en la adopción de esas medidas, o el gobierno cuyas autoridades, evidentemente, sabían con anticipación que habría de producirse el vuelo con la finalidad provocadora que el señor Houlihan testimonió? ¿Cómo explicar que supieran con una semana de anticipación que iba a producirse ese vuelo si, como todo el mundo sabe, el permiso para despegar en un aeropuerto por un avión civil lo solicita unos minutos antes de despegar, como además aparece en todos los testimonios de la OACI? Es decir, aparentemente, nadie sabía, hasta el 24 de febrero al mediodía, que iban a hacer ese vuelo; pero lo sabían en el Departamento de Estado, lo sabían en el Servicio de Radares, lo habían advertido y reiterado en diversas ocasiones. ¿Cómo explicar ese conocimiento, sino por connivencia con los autores de la fechoría?

Verificaron -además, se tomaron ese trabajo- que los aviones estaban allí, que despegaron, registraron el curso completo que siguieron hasta violar el espacio cubano, comprobaron que durante todo ese curso estaban violando las normas norteamericanas y después ocultaron las pruebas, justificaron la provocación e intentan utilizar la ONU como pretexto para imponerle al mundo una ley que el mundo entero rechaza.

En resumen, se puede afirmar que del lado norteamericano hay autoridades que fueron responsables por el incidente, que lo permitieron, que ayudaron a encubrirlo, que de hecho facilitaron o estuvieron asociados de algún modo a su preparación y planificación. ¿Hasta qué nivel? La historia lo dirá en su día.

Yo solamente quiero apuntar lo siguiente: el 8 de mayo de 1996, en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el señor Dennis Hayes, que había sido hasta el mes de mayo del año anterior jefe de la sección que atiende a Cuba en el Departamento de Estado, interrogado por algunos senadores, reconoció que él, personalmente, había volado en los aviones de este mismo grupo. Cuando un senador pareció sorprenderse de tal cosa y le preguntó que cómo era posible eso, la respuesta que recibió fue prácticamente olímpica, él dijo: "Cuando yo fui designado en ese cargo, me encontré que eso era lo normal, lo que habían hecho mis predecesores". No sé si después del señor Hayes, sus sucesores han hecho lo mismo. Pero, hasta el que tenía

que velar por las relaciones con Cuba, acompañó a los provocadores en algunos de sus vuelos.

Está demostrado que algunos de estos aviones, además, procedían de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, y la OACI tiene documentos que le entregó Cuba que prueban que estos individuos, además, recibieron equipamiento, recibieron adiestramiento y tienen películas filmadas donde se ven reuniones de oficiales norteamericanos con los pilotos provocadores.

Es, compañeras y compañeros, con este trasfondo de mentira, de falsificación, de adulteración grosera de los hechos, como algunos han tratado de justificar la promulgación del engendro conocido como Helms-Burton.

Esa ley norteamericana -llamémosla de alguna forma- pretende negar la existencia de Cuba como Estado soberano, busca eliminar la nación cubana, imponerle la servidumbre colonial y esclavizar a su pueblo; buscar intensificar y universalizar el bloqueo mediante sanciones y amenazas ilegales contra terceros, para forzarlos a acatar la política yanqui. Se propone asfixiar económicamente a Cuba y aumentar las dificultades del pueblo; utiliza inhumana y moralmente los alimentos y las medicinas como armas de guerra; trata de convertir los sufrimientos, las penurias, las enfermedades en instrumento de una política cínicamente manipuladora del concepto de la libertad, que prostituye la idea de la libertad y se propone, en realidad, llevar al martirio a una nación entera. Ante ella palidece la Enmienda Platt. Se trata, en rigor, de un proyecto genocida, públicamente anunciado y promovido abierta y descaradamente.

Esta ley, además, aunque a veces la propaganda norteamericana trata de sembrar la confusión a este respecto, está siendo aplicada desde marzo de este año, cuando el presidente Clinton juzgó pertinente firmarla. El 16 de agosto de este año, el propio presidente Clinton formuló unas declaraciones en la Casa Blanca por las que designaba a un señor de apellido Eizenstat, como enviado especial para los asuntos de Cuba. Desde entonces este caballero ha estado bastante "fatigado" viajando por el mundo, tratando de confundir o presionar a otros gobiernos; tratando de crear un frente común contra Cuba, supuestamente para promover lo que ellos denominan "la democracia". Le dan ese título a él: "enviado especial para la democracia en Cuba".

Pero el propio Clinton en su declaración, cuando presentó a este caballero, explica que él va a seguir teniendo los cargos que ha tenido durante muchos años en Estados Unidos. Uno de ellos es subsecretario de comercio, el otro es *enviado especial para la restitución de propiedades en Europa Oriental y Central*. Esa la idea de la democracia norteamericana: democracia es devolverle la tierra al latifundista, la fábrica al antiguo explotador y de esa es de la única democracia que el señor Eizenstat sabe algo. No creo que él sepa nada de parlamentos obreros, no creo que se haya reunido nunca en ningún consejo popular, no creo que nunca haya ido a buscar los sentimientos, las preocupaciones del pueblo norteamericano o de ningún otro pueblo; lo que sabe él, en lo que ha tenido algún éxito -según voy a explicar después-, es en recuperar propiedades nacionalizadas o expropiadas, que es, en definitiva, la esencia de lo que para los yanquis, con esta ley, significaría la destrucción de la Revolución Cubana y la imposición en Cuba del modelo o del tipo de democracia que ellos promueven.

No nos confundamos. La ley nos permite tener absoluta claridad al respecto. No se trata de que los problemas entre Cuba y Estados Unidos fueran a resolverse si nos volviésemos locos y fuésemos a aceptar la imposición aquí del régimen norteamericano; no se resolverían nuestros problemas con ellos, ni siquiera de ese modo. No se trata, ni siquiera, de que se nos proponga la rendición para evitar que continúe la guerra; no se trata ni siquiera, de que con el suicidio colectivo pudiésemos poner fin al diferendo con Estados Unidos. Si hay algo que agradecerle al señor Helms y al señor Burton es que lo hayan dicho y lo hayan puesto claramente en la Ley. No voy a analizar esa ley ni mucho menos, sólo me voy a referir a un parrafito de ella, el párrafo que cierra el segundo título de esa ley que, como ustedes saben, es todo un recuento del plan anexionista, es toda una descripción de cómo ellos pretenderían organizar la República de Cuba después que mediante la intensificación de la guerra económica hubieran destruido a la Revolución Cubana -cosa que, por supuesto, jamás van a lograr-; pero después que hubieran hecho eso, vendría una etapa que llaman de transición, que sería, realmente, una brutal carnicería, el exterminio de nuestro pueblo que no se iba a dejar arrebatar sus conquistas graciosamente, del cual saldría -según la ley- lo que ellos llaman el "régimen democrático" en Cuba, que *para que sea democrático tiene que estar certificado por el Presidente de Estados Unidos, aprobada*

por el Congreso esa certificación.

Pero ese "gobierno democrático" que ha surgido después de la victoria de la contrarrevolución, que ha surgido después que Cuba se organiza como ellos quieren que se organice, para que no haya duda ninguna, el último párrafo de ese título cierra con la siguiente afirmación: "las futuras relaciones diplomáticas y económicas, la posibilidad de normalizar las relaciones diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y ese gobierno democrático de Cuba tienen como condición indispensable" lo que ellos llaman la solución del problema de las propiedades.

El 20 de septiembre, el Departamento de Estado anunció el establecimiento de una unidad especial para la aplicación de la Ley Helms-Burton como parte de la Oficina de Asuntos Cubanos de ese ministerio yanki. Al hacer el anuncio no sólo explicaron las funciones de esa oficina, sino que dieron su número de teléfono, su número de fax, su dirección postal y anunciaron que darían también la dirección de correo electrónico de la misma, y explicaron para qué creaban esa comisión. La creaban para realizar un esfuerzo para localizar dentro de Estados Unidos a personas que puedan haber tenido alguna propiedad que hubiera sido expropiada en Cuba después de 1959.

Se refieren a que había el grupo conocido de los norteamericanos afectados por la reforma agraria y por las leyes de nacionalización, los que eran norteamericanos en aquella época. Pero dicen que hay muchos, muchos otros, y que algunos todavía no se han presentado. Crean esta unidad para propiciar, para buscarlos, para localizarlos, para, en otras palabras, movilizar a toda esa caterva de antiguos explotadores, torturadores, mafiosos, y embullarlos a que reclamen, a que pongan pleitos a que persigan a los países y a las empresas que invierten en Cuba. De manera que, aunque a veces traten de decir que actúan con moderación, que actúan "democráticamente", en la práctica han continuado dando paso a paso para aplicar la ley de un modo que para los cubanos no puede pasar inadvertido.

Poco más tarde, el 27 de septiembre, el Departamento de Estado, en cumplimiento de la Ley Helms-Burton, publicó este informe. Este informe es el que ellos están obligados a hacer en conformidad con la Sección 207 de la mentada ley. Esa sección le pedía al Departamento de Estado que presentase un estudio acerca de cómo sería el tema de las propiedades ahora que se amplía la reclamación norteamericana, ahora que agregan, que suman a los batistianos, a los malversadores, etcétera, etcétera, qué significaría eso y qué propuestas tendría el gobierno para aplicar esa parte de la ley.

Este es el documento que emiten el 27 de septiembre, y aquí, entre otras cosas, definen un poco cómo sería ese gobierno democrático del futuro. Ese gobierno, entre otras cosas, contaría con asesores norteamericanos que vendrían a este país para redactar las leyes que sirvieran para resolver las cuestiones de propiedad. Tendría asesores para ayudar a crear los mecanismos institucionales para el proceso de devolución de las propiedades, y tendría asesores para ayudar a llevar a cabo -y no se sorprendan- lo que ellos dicen que sería un programa de educación para el pueblo de Cuba, para enseñarles las virtudes y las ventajas que tendría volver a convertir a los terratenientes en dueños de las tierras, a los antiguos explotadores en dueños de las fábricas, a los propietarios de terrenos en dueños de las viviendas que ocupan hoy la mayoría de los cubanos, etcétera, y termina ese conjunto de recomendaciones mostrando la verdad del sentido de la "misión democrática", el señor Eizenstat. Dice que sería muy útil, sería una verdadera contribución a la aplicación de ese programa que conciben para el futuro de Cuba, la experiencia del señor Eizenstat, lo que él ha podido hacer en Europa oriental y central en términos de restitución de propiedades.

Tomando en cuenta todo esto, la significación que tiene la medida adoptada por los yankis, es que les ha sido presentado el Proyecto de Resolución, y el conjunto de modificaciones que proponen las tres comisiones ya mencionadas. Con este proyecto buscamos asegurar una respuesta integral de toda la nación cubana contra ese engendro que quiere destruirla. La ley nuestra buscaría impedir y castigar la realización en Cuba de cualquier forma de colaboración con la puesta en práctica de la Helms-Burton y cualquiera de sus cláusulas. Definiría claramente nuestra posición con relación al famoso tema de la compensación de propiedades, reiterando claramente que sólo mediante un proceso de negociación sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República de Cuba, que incluyese la indemnización a Cuba por el bloqueo, por las agresiones, por los robos y los crímenes de los malversadores y batistianos; sólo

en ese contexto se podría encontrar una solución justa a la compensación justa y adecuada que nuestras propias leyes previeron siempre para los antiguos propietarios que fueron nacionalizados en su momento.

Aclaremos, además, que cuando hablamos de la posible compensación justa y adecuada en el contexto ya descrito, estamos hablando exclusivamente de los que eran ciudadanos de Estados Unidos en el momento de las nacionalizaciones, y de nadie más. Pero, además de eso, que esos ciudadanos norteamericanos, que eran norteamericanos en el momento de las nacionalizaciones, podrán ser tomados en cuenta sus intereses, si no se asocian en modo alguno con la Ley Helms-Burton, si no se acogen a sus posibilidades, si no tratan de utilizarla contra terceros, si no la usan en cualquier forma.

Nuestra Ley buscaría, además, proteger las inversiones extranjeras en Cuba, ayudar a los inversionistas que pudiesen enfrentar consecuencias adversas a ellos en los intentos de aplicarles la Ley Helms-Burton, lo que nos parece una obligación elemental, un deber nuestro para con aquellos que han sabido respetar la soberanía cubana, que han sabido confiar en nuestras posibilidades de desarrollo, que han respetado nuestras leyes y que pudieran verse amenazados o agredidos injustamente como consecuencia de la Helms-Burton.

Busca nuestra Ley promover, además, la participación popular en el enfrentamiento al engendro yanki. Por una parte en la actualización de los datos de nuestra reclamación nacional, a través del mecanismo que se propone en uno de sus artículos, a través de las comisiones de reclamaciones que se le encargaría al Ministerio de Justicia establecer, y, además, con la continuación del movimiento de estudio del engendro yanki para que todos los cubanos lo conozcan al detalle, para que conscientemente todos estemos preparados para enfrentarla y para asegurar que las generaciones venideras también lo estarán.

Una palabra, finalmente, con relación a la cuestión de las propiedades, elemento esencial, por lo que se refiere a Cuba, del engendro norteamericano. Hay que recordar que esta nación fue fundada por hombres que supieron unirse a los explotados, a los esclavos, a los humildes, y sacrificar sus riquezas, su familia, sus bienes personales y sus propias vidas; supieron sacrificarlo todo por la gran propiedad que ellos crearon, la patria que quisieron fuera poseída por todos y no por unos pocos. Ellos, por cierto, aquellos patricios del 68, fueron injustamente desposeídos de sus bienes, sin compensación alguna por los colonialistas españoles, y de esos bienes se apropiaron después, en muchos casos, los monopolios yankis y sus secuaces nativos.

No es el imperio, sino la patria, quien tiene mucho que reclamar; la patria intervenida y humillada, la patria agredida y asediada, y su pueblo, el pueblo cubano: los que conocieron el hambre y la desnutrición, los que sufrieron la pobreza y el desamparo mientras una minoría se enriquecía con el sudor ajeno; los humildes que no tenían escuelas ni hospitales, porque otros se adueñaron del tesoro público.

No son los latifundistas quienes tienen nada que reclamar aquí, sino, en todo caso, los campesinos que sufrieron el desalojo, la miseria y la explotación; no son los explotadores, que vivieron a costa del sudor de nuestros trabajadores, sino, en todo caso, nuestros obreros que ayudaron al enriquecimiento de una minoría privilegiada y que carecieron antes de todo derecho; no son los racistas los que tienen nada que reclamar aquí, sino el pueblo negro y mestizo que sufrió la discriminación y la humillación en el pasado; no es el imperio, sino la nación, la que tiene mucho que reclamar y que exigir, la que tiene todos los derechos y la que no va a renunciar a los suyos jamás.

Esta leyecita norteamericana la bautizaron usando los términos de *solidaridad y democracia*. Nosotros, que sabemos que esa ley sigue siendo un misterio para los norteamericanos, que son pocos los que han podido conocerla o leerla por la sencilla razón de que nadie la ha publicado; nosotros, que sí la hemos publicado acá y nos hemos tomado el trabajo de hacer lo necesario para que cada vez más todo nuestro pueblo la conozca al detalle, nosotros vamos a darle una respuesta verdaderamente democrática.

Nosotros vamos a demostrar qué cosa es la democracia y qué cosa es la solidaridad. Nosotros vamos a hacer que todo nuestro pueblo, que todas nuestras organizaciones la conozcan, estén conscientes de lo que significa el plan anexionista para Cuba, conozcan, además, nuestra respuesta, y estén preparados mentalmente, intelectualmente para asegurar que las generaciones actuales de cubanos no serán jamás esclavizadas, no

serán jamás destruidas, no verán su obra liquidada por el enemigo imperialista; pero, además de eso, que seremos capaces de asegurar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, tengan por los siglos por venir la misma voluntad de hierro y la misma conciencia firme e indoblegable de los cubanos de hoy para asegurar que nunca jamás volverán a este país ni la explotación, ni la miseria ni el imperio.

Muchas gracias (Aplausos).

RICARDO ALARCÓN DE QUESADA, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba

HAGO SABER: Que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su sesión del día 24 del mes de diciembre de 1996, "Año del Centenario de la Caída en Combate de Antonio Maceo", correspondiente al VII Período Ordinario de Sesiones de la Cuarta Legislatura, ha aprobado lo siguiente:

POR CUANTO: En los Estados Unidos de América se ha puesto en vigor la denominada Ley "Helms-Burton" que tiene como finalidad la reabsorción colonial de la República de Cuba.

POR CUANTO: Cuba ha sufrido la política imperialista de Estados Unidos de América empeñada en apoderarse de ella por diferentes vías, desde los intentos de comprar la Isla a España, la aplicación de la teoría del "destino manifiesto y de la fruta madura" y su reflejo en la doctrina Monroe, tratando de impedir sistemáticamente nuestras luchas por la liberación nacional hasta la intervención de 1898 que frustró la independencia por la que los cubanos habían peleado a golpe de machete, coraje, inteligencia y audacia, y convertir a Cuba en su colonia.

POR CUANTO: Mediante la Enmienda Platt y su continuada injerencia e intervención en los asuntos internos del país, Estados Unidos de América usurpó parte del territorio nacional instalando la Base Naval de Guantánamo, impuso regímenes corruptos y despóticos a su servicio, incluyendo las oprobiosas y sangrientas tiranías machadista y batistiana, y desde 1959 agrede sistemáticamente a Cuba con el declarado propósito de poner fin a su independencia, eliminar la nacionalidad cubana y someter al pueblo a la servidumbre.

POR CUANTO: El pueblo cubano, fiel portador del legado independentista de los mambises, de los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales que han combatido y combatirán las pretensiones de su enemigo secular, está dispuesto a realizar los mayores esfuerzos y sacrificios para mantener la soberanía, la independencia y la libertad que definitivamente conquistó el Primero de Enero de 1959.

POR CUANTO: El proceso de nacionalización de las riquezas y los recursos naturales de la Nación, llevado a cabo por el Gobierno Revolucionario en nombre del pueblo cubano, fue realizado conforme a la Constitución, las leyes vigentes y el Derecho Internacional, sin discriminaciones, con propósito de beneficio público; disponiéndose las compensaciones adecuadas, las que fueron acordadas mediante negociación bilateral con todos los gobiernos involucrados, con excepción del de Estados Unidos de América que se negó a ello por su política de bloqueo y agresión, perjudicando gravemente con esta actuación a sus nacionales.

POR CUANTO: El pueblo cubano jamás permitirá que los destinos de su país sean regidos por leyes dictadas por ninguna potencia extranjera.

POR CUANTO: La ley "Helms-Burton" ha sido rechazada de manera casi unánime por la comunidad internacional por su carácter violatorio de los principios del Derecho Internacional reconocidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como por su aplicación extraterritorial en contradicción con las normas internacionales, pretendiendo dictar arbitraria e ilegalmente reglas para ser cumplidas por otros estados.

POR CUANTO: Un número importante de empresarios extranjeros ha demostrado su confianza en Cuba al invertir en el país o negociar potenciales inversiones, constituyendo un deber utilizar todas las fórmulas legales posibles para contribuir a proteger sus intereses.

POR CUANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popular, como representante de todo el pueblo, repudia la Ley "Helms-Burton" y declara su decisión irrenunciable de adoptar las medidas que estén a su alcance como respuesta a esa legislación anticubana y reclamar las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho.

POR TANTO: En uso de la facultad que le otorga el Artículo 75, inciso b, de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha aprobado la siguiente:

LEY NÚMERO 80

LEY DE REAFIRMACIÓN DE LA DIGNIDAD Y SOBERANÍA CUBANAS

Artículo 1. Se declara ilícita la Ley "Helms-Burton", inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno. Consecuentemente se considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.

Artículo 2. Se reafirma la disposición del Gobierno de la República de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización promulgadas hace más de treinta y cinco años, en lo relativo a una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad de los Estados Unidos de América.

Artículo 3. Las indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en virtud de ese proceso legítimo, validado por las leyes cubanas y el Derecho Internacional, a las que se refiere el artículo anterior, podrán formar parte de un proceso negociador entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Cuba, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

Las reclamaciones de indemnización por la nacionalización de dichas propiedades deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo 4. Quedará excluida de futuras posibles negociaciones referidas en los artículos 2 y 3, cualquier persona natural o jurídica de los Estados Unidos de América que utilice los procedimientos y mecanismos de la Ley "Helms-Burton", se acoja a éstos o trate de emplearlos en perjuicio de otros.

Artículo 5. Se encarga al Gobierno de la República de Cuba la adopción de las disposiciones, medidas y facilidades adicionales que resulten necesarias para la total protección de la actuales y potenciales inversiones extranjeras en Cuba y la defensa de los legítimos intereses de éstas frente a las acciones que pudieran derivarse de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 6. El Gobierno de la República de Cuba está facultado para aplicar o autorizar las fórmulas que se requieran para la protección de los inversionistas extranjeros contra la aplicación de la Ley "Helms-Burton", incluyendo el traslado de los intereses del inversionista extranjero a empresas fiduciarias, entidades financieras o fondos de inversión.

Artículo 7. Los órganos estatales competentes, que autorice el Gobierno de la República de Cuba, cumpliendo lo dispuesto en las regulaciones legales vigentes, proporcionarán a los inversionistas extranjeros que así lo soliciten, la información y documentación disponibles que les sean necesarias para la defensa de sus legítimos intereses frente a las disposiciones de la Ley "Helms-Burton".

Asimismo, facilitarán las mencionadas informaciones y documentación disponibles a los inversionistas extranjeros que lo soliciten para promover procesos legales ante los tribunales de sus respectivos países, al amparo de disposiciones jurídicas protectoras de sus intereses o que hayan sido dictadas para impedir o limitar la aplicación de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 8. Se declara ilícita cualquier forma de colaboración, directa o indirecta, para favorecer la aplicación de la Ley "Helms-Burton". Se entiende como colaboración, entre otras conductas:

Buscar o suministrar información a cualquier representante del Gobierno de Estados Unidos de América o a otra persona con el objeto de que pueda ser utilizada directa o indirectamente en la posible aplicación de esa ley o prestar ayuda a otra persona para la búsqueda o el suministro de dicha información.

Solicitar, recibir, aceptar, facilitar la distribución o beneficiarse de cualquier modo de recursos financieros, materiales o de otra índole procedentes del Gobierno de Estados Unidos de América o canalizados por este, a través de sus representantes o por cualquier otra vía, cuya utilización favorecería la aplicación de la Ley "Helms-Burton".

Difundir, diseminar o ayudar a la distribución, con el propósito de favorecer la aplicación de la Ley "Helms-Burton", de informaciones, publicaciones, documentos o materiales propagandísticos del Gobierno de Estados Unidos de América, de sus agencias, o dependencias, o de cualquier otro origen.

Colaborar de cualquier forma con emisoras de radio o televisión u otros medios de difusión y propaganda con el objetivo de facilitar la aplicación de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 9. El Gobierno de la República de Cuba deberá presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado en su caso, los proyectos legislativos que sean necesarios para sancionar todos aquellos hechos que de una forma u otra entrañen colaboración con los propósitos de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 10. Se ratifica que las remesas económicas de personas de origen cubano residentes en el exterior, a sus familiares que residen en Cuba no serán afectadas por impuesto alguno. El Gobierno de la República de Cuba deberá adoptar cuantas medidas estime convenientes para facilitar dichas remesas.

Las personas de origen cubano residentes en el exterior podrán operar cuentas bancarias en moneda libremente convertible o en pesos cubanos en bancos de la República de Cuba, y los intereses que perciban por estas cuentas no serán objeto de impuesto alguno.

Asimismo, podrán contratar con entidades aseguradoras, pólizas de seguros cuyos beneficiarios sean residentes permanentes en Cuba. Los beneficiarios podrán recibir libremente, sin pago de impuesto alguno, las correspondientes prestaciones.

Artículo 11. El Gobierno de la República de Cuba mantendrá actualizados los datos sobre las indemnizaciones a que está obligado el Gobierno de los Estados Unidos de América como consecuencia de los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero y sus agresiones contra el país y añadirá a estas reclamaciones los daños y perjuicios causados por ladrones, malversadores, políticos corruptos y mafiosos, y, además, por los torturadores y asesinos de la tiranía batistiana por cuyas acciones se ha hecho responsable el Gobierno de los Estados Unidos de América al promulgar la Ley "Helms-Burton".

Artículo 12. Las personas naturales que hubieren sido víctimas en su persona o bienes o en las personas o bienes de sus familiares, de las acciones auspiciadas o apoyadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América a que se refiere el párrafo siguiente, podrán reclamar las correspondientes indemnizaciones ante Comisiones de Reclamaciones que creará y organizará el Ministerio de Justicia de la República de Cuba, las que estarán facultadas para decidir sobre su validez, así como su monto y la responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Las acciones a que se refiere el párrafo anterior, incluirán las muertes, lesiones y daños económicos causados por los torturadores y asesinos de la tiranía batistiana y, además, por saboteadores y criminales al servicio del imperialismo norteamericano contra la Nación cubana desde el Primero de Enero de 1959.

El Ministerio de Justicia está facultado para regular la tramitación de las reclamaciones a las que se refiere este artículo y dictar cualquier otra disposición a ese efecto.

Artículo 13. La Asamblea Nacional del Poder Popular y el Gobierno de la República de Cuba cooperarán y coordinarán con otros parlamentos, gobiernos y organismos internacionales, con el fin de promover cuantas acciones se entiendan necesarias para impedir la aplicación de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 14. Se convoca a todo el pueblo de Cuba a continuar el examen profundo y sistemático del plan anexionista y colonial del Gobierno de los Estados Unidos de América incluido en la Ley "Helms-Burton", con el fin de asegurar que en cada territorio, comunidad, centro de trabajo o estudio y unidad militar, exista conocimiento cabal de las consecuencias específicas que para cada ciudadano acarrearía la ejecución de dicho

plan y garantizar la participación activa y consciente de todos en la aplicación de las medidas necesarias para derrotarlo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Gobierno de la República de Cuba y a los organismos estatales competentes para dictar cuantas disposiciones sean necesarias a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

SEGUNDA: Se derogan cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, la que comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADA en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las Convenciones, en la ciudad de La Habana, a los veinticuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Anexo 5. Documento. Ley Helms-Burton, 1996

One Hundred Fourth Congress

of the

United States of America

AT THE SECOND SESSION

Begun and held at the City of Washington on Wednesday, the third day of January, one thousand nine hundred and ninety-six

An Act

To seek international sanctions against the Castro government in Cuba, to plan for support of a transition government leading to a democratically elected government in Cuba, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE; TABLE OF CONTENTS.

(a) SHORT TITLE.—This Act may be cited as the “Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996”.

(b) TABLE OF CONTENTS.—The table of contents of this Act is as follows:

Sec. 1. Short title; table of contents. Sec. 2. Findings. Sec. 3. Purposes. Sec. 4. Definitions.

Sec. 5. Severability.

TITLE I—STRENGTHENING INTERNATIONAL SANCTIONS AGAINST THE CASTRO GOVERNMENT

Sec. 101. Statement of policy. Sec. 102. Enforcement of the economic embargo of Cuba. Sec. 103. Prohibition against indirect financing of Cuba. Sec. 104. United States opposition to Cuban membership in international financial

institutions. Sec. 105. United States opposition to termination of the suspension of the Cuban

Government from participation in the Organization of American States. Sec. 106. Assistance by the independent states of the former Soviet Union for the

Cuban Government. Sec. 107. Television broadcasting to Cuba.

Sec. 108. Reports on commerce with, and assistance to, Cuba from other foreign countries.

Sec. 109. Authorization of support for democratic and human rights groups and international observers.

Sec. 110. Importation safeguard against certain Cuban products. Sec. 111. Withholding of foreign assistance from countries supporting Juragua nu-

clear plant in Cuba. Sec. 112. Reinstitution of family remittances and travel to Cuba. Sec. 113. Expulsion of criminals from Cuba. Sec. 114. News bureaus in Cuba. Sec. 115. Effect of Act on lawful United States Government activities. Sec. 116. Condemnation of Cuban attack on American aircraft.

TITLE II—ASSISTANCE TO A FREE AND INDEPENDENT CUBA

Sec. 201. Policy toward a transition government and a democratically elected gov- ernment in Cuba.

Sec. 202. Assistance for the Cuban people. Sec. 203. Coordination of assistance program; implementation and reports to Con-

gress; reprogramming. Sec. 204. Termination of the economic embargo of Cuba. Sec. 205. Requirements and factors for determining a transition government. Sec. 206. Requirements for determining a democratically elected government.

H. R. 927—2 Sec. 207. Settlement of outstanding United States claims to confiscated property in

Cuba. TITLE III—PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF UNITED STATES

NATIONALS

Sec. 301. Findings. Sec. 302. Liability for trafficking in confiscated property claimed by United States

nationals. Sec. 303. Proof of ownership of claims to confiscated property. Sec. 304. Exclusivity of Foreign Claims Settlement Commission certification proce-

dure. Sec. 305. Limitation of actions.

Sec. 306. Effective date. TITLE IV—EXCLUSION OF CERTAIN ALIENS

Sec. 401. Exclusion from the United States of aliens who have confiscated property of United States nationals or who traffic in such property.

SEC. 2. FINDINGS.

The Congress makes the following findings: (1) The economy of Cuba has experienced a decline of

at least 60 percent in the last 5 years as a result of— (A) the end of its subsidization by the former Soviet Union of between 5 billion and 6 billion dollars annually; (B) 36 years of communist tyranny and economic mis-

management by the Castro government; (C) the extreme decline in trade between Cuba and

the countries of the former Soviet bloc; and (D) the stated policy of the Russian Government and

the countries of the former Soviet bloc to conduct economic relations with Cuba on strictly commercial terms. (2) At the same time, the welfare and health of the Cuban

people have substantially deteriorated as a result of this eco- nomic decline and the refusal of the Castro regime to permit free and fair democratic elections in Cuba.

(3) The Castro regime has made it abundantly clear that it will not engage in any substantive political reforms that would lead to democracy, a market economy, or an economic recovery.

(4) The repression of the Cuban people, including a ban on free and fair democratic elections, and continuing violations of fundamental human rights, have isolated the Cuban regime as the only completely nondemocratic government in the Western Hemisphere.

(5) As long as free elections are not held in Cuba, the economic condition of the country and the welfare of the Cuban people will not improve in any significant way.

(6) The totalitarian nature of the Castro regime has deprived the Cuban people of any peaceful means to improve their condition and has led thousands of Cuban citizens to risk or lose their lives in dangerous attempts to escape from Cuba to freedom.

(7) Radio Marti and Television Marti have both been effective vehicles for providing the people of Cuba with news and information and have helped to bolster the morale of the people of Cuba living under tyranny.

(8) The consistent policy of the United States towards Cuba since the beginning of the Castro regime, carried out by both Democratic and Republican administrations, has sought to keep faith with the people of Cuba, and has been effective in sanctioning the totalitarian Castro regime.

H. R. 927—3

(9) The United States has shown a deep commitment, and considers it a moral obligation, to promote and protect human rights and fundamental freedoms as expressed in the Charter of the United Nations and in the Universal Declaration of Human Rights.

(10) The Congress has historically and consistently manifested its solidarity and the solidarity of the American people with the democratic aspirations of the Cuban people.

(11) The Cuban Democracy Act of 1992 calls upon the President to encourage the governments of countries that conduct trade with Cuba to restrict their trade and credit relations with Cuba in a manner consistent with the purposes of that Act.

(12) Amendments to the Foreign Assistance Act of 1961 made by the FREEDOM Support Act require that the President, in providing economic assistance to Russia and the emerging Eurasian democracies, take into account the extent to which they are acting to “terminate support for the communist regime in Cuba, including removal of troops, closing military facilities, and ceasing trade subsidies and economic, nuclear, and other assistance”.

(13) The Cuban Government engages in the illegal international narcotics trade and harbors fugitives from justice in the United States.

(14) The Castro government threatens international peace and security by engaging in acts of armed subversion and terrorism such as the training and supplying of groups dedicated to international violence.

(15) The Castro government has utilized from its inception and continues to utilize torture in various forms (including by psychiatry), as well as execution, exile, confiscation, political imprisonment, and other forms of terror and repression, as means of retaining power.

(16) Fidel Castro has defined democratic pluralism as “pluralistic garbage” and continues to make clear that he has no intention of tolerating the democratization of Cuban society.

(17) The Castro government holds innocent Cubans hostage in Cuba by no fault of the hostages themselves solely because relatives have escaped the country.

(18) Although a signatory state to the 1928 Inter-American Convention on Asylum and the International Covenant on Civil and Political Rights (which protects the right to leave one's own country), Cuba nevertheless surrounds embassies in its capital by armed forces to thwart the right of its citizens to seek asylum and systematically denies that right to the Cuban people, punishing them by imprisonment for seeking to leave the country and killing them for attempting to do so (as demonstrated in the case of the confirmed murder of over 40 men, women, and children who were seeking to leave Cuba on July 13, 1994).

(19) The Castro government continues to utilize blackmail, such as the immigration crisis with which it threatened the United States in the summer of 1994, and other unacceptable and illegal forms of conduct to influence the actions of sovereign states in the Western Hemisphere in violation of the Charter of the Organization of American States and other international agreements and international law.

H. R. 927—4

(20) The United Nations Commission on Human Rights has repeatedly reported on the unacceptable human rights situation in Cuba and has taken the extraordinary step of appointing a Special Rapporteur.

(21) The Cuban Government has consistently refused access to the Special Rapporteur and formally expressed its decision not to “implement so much as one comma” of the United Nations Resolutions appointing the Rapporteur.

(22) The United Nations General Assembly passed Resolution 47–139 on December 18, 1992, Resolution 48–142 on December 20, 1993, and Resolution 49–200 on December 23, 1994, referencing the Special Rapporteur's reports to the United Nations and condemning violations of human rights and fundamental freedoms in Cuba.

(23) Article 39 of Chapter VII of the United Nations Charter provides that the United Nations Security Council “shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken . . . , to maintain or restore international peace and security.”

(24) The United Nations has determined that massive and systematic violations of human rights may constitute a “threat to peace” under Article 39 and has imposed sanctions due to such violations of human rights in the cases of Rhodesia, South Africa, Iraq, and the former Yugoslavia.

(25) In the case of Haiti, a neighbor of Cuba not as close to the United States as Cuba, the United States led an effort to obtain and did obtain a United Nations Security Council embargo and blockade against that country due to the existence of a military dictatorship in power less than 3 years.

(26) United Nations Security Council Resolution 940 of July 31, 1994, subsequently authorized the use of “all necessary means” to restore the “democratically elected government of Haiti”, and the democratically elected government of Haiti was restored to power on October 15, 1994.

(27) The Cuban people deserve to be assisted in a decisive manner to end the tyranny that has oppressed them for 36 years, and the continued failure to do so constitutes ethically improper conduct by the international community.

(28) For the past 36 years, the Cuban Government has posed and continues to pose a national security threat to the United States.

SEC. 3. PURPOSES.

The purposes of this Act are— (1) to assist the Cuban people in regaining their freedom

and prosperity, as well as in joining the community of democratic countries that are flourishing in the Western Hemisphere; (2) to strengthen international sanctions against the Castro

government; (3) to provide for the continued national security of the

United States in the face of continuing threats from the Castro government of terrorism, theft of property from United States nationals by the Castro government, and the political manipulation by the Castro government of the desire of Cubans to escape that results in mass migration to the United States;

H. R. 927—5

(4) to encourage the holding of free and fair democratic elections in Cuba, conducted under the supervision of internationally recognized observers;

(5) to provide a policy framework for United States support to the Cuban people in response to the formation of a transition government or a democratically elected government in Cuba; and

(6) to protect United States nationals against confiscatory takings and the wrongful trafficking in property confiscated by the Castro regime.

SEC. 4. DEFINITIONS.

As used in this Act, the following terms have the following meanings:

(1) AGENCY OR INSTRUMENTALITY OF A FOREIGN STATE.— The term “agency or instrumentality of a foreign state” has the meaning given that term in section 1603(b) of title 28, United States Code.

(2) APPROPRIATE CONGRESSIONAL COMMITTEES.—The term “appropriate congressional committees” means the Committee on International Relations and the Committee on Appropriations of the House of Representatives and the Committee on Foreign Relations and the Committee on Appropriations of the Senate.

(3) COMMERCIAL ACTIVITY.—The term “commercial activity” has the meaning given that term in section 1603(d) of title 28, United States Code.

(4) CONFISCATED.—As used in titles I and III, the term “confiscated” refers to—

(A) the nationalization, expropriation, or other seizure by the Cuban Government of ownership or control of property, on or after January 1, 1959—

(i) without the property having been returned or adequate and effective compensation provided; or

(ii) without the claim to the property having been settled pursuant to an international claims settlement agreement or other mutually accepted settlement procedure; and (B) the repudiation by the Cuban Government of, the

default by the Cuban Government on, or the failure of the Cuban Government to pay, on or after January 1,

1959— (i) a debt of any enterprise which has been

nationalized, expropriated, or otherwise taken by the Cuban Government;

(ii) a debt which is a charge on property nationalized, expropriated, or otherwise taken by the Cuban Government; or

(iii) a debt which was incurred by the Cuban Government in satisfaction or settlement of a confiscated property claim.

(5) CUBAN GOVERNMENT.—(A) The term “Cuban Government” includes the government of any political subdivision of Cuba, and any agency or instrumentality of the Government of Cuba.

(B) For purposes of subparagraph (A), the term “agency or instrumentality of the Government of Cuba” means an

H. R. 927—6

agency or instrumentality of a foreign state as defined in section 1603(b) of title 28, United States Code, with each reference in such section to “a foreign state” deemed to be a reference to “Cuba”.

(6) DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT IN CUBA.—The term “democratically elected government in Cuba” means a government determined by the President to have met the requirements of section 206.

(7) ECONOMIC EMBARGO OF CUBA.—The term “economic embargo of Cuba” refers to—

(A) the economic embargo (including all restrictions on trade or transactions with, and travel to or from, Cuba, and all restrictions on transactions in property in which Cuba or nationals of Cuba have an interest) that was imposed against Cuba pursuant to section 620(a) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2370(a)), section 5(b) of the Trading with the Enemy Act (50 U.S.C. App. 5(b)), the Cuban Democracy Act of 1992 (22 U.S.C. 6001 and following), or any other provision of law; and

(B) the restrictions imposed by section 902(c) of the Food Security Act of 1985. (8) FOREIGN NATIONAL.—The term “foreign national”

means— (A) an alien; or

(B) any corporation, trust, partnership, or other juridical entity not organized under the laws of the United States, or of any State, the District of Columbia, or any commonwealth, territory, or possession of the United States. (9) KNOWINGLY.—The term “knowingly” means with knowl-

edge or having reason to know. (10) OFFICIAL OF THE CUBAN GOVERNMENT OR THE RULING

POLITICAL PARTY IN CUBA.—The term “official of the Cuban Government or the ruling political party in Cuba” refers to any member of the Council of Ministers, Council of State, central committee of the Communist Party of Cuba, or the Politburo of Cuba, or their equivalents.

(11) PERSON.—The term “person” means any person or entity, including any agency or instrumentality of a foreign state.

(12) PROPERTY.—(A) The term “property” means any property (including patents, copyrights, trademarks, and any other form of intellectual property), whether real, personal, or mixed, and any present, future, or contingent right, security, or other interest therein, including any leasehold interest.

(B) For purposes of title III of this Act, the term “property” does not include real property used for residential purposes unless, as of the date of the enactment of this Act—

(i) the claim to the property is held by a United States national and the claim has been certified under title V of the International Claims Settlement Act of 1949; or

(ii) the property is occupied by an official of the Cuban Government or the ruling political party in Cuba. (13) TRAFFICS.—(A) As used in title III, and except as

provided in subparagraph (B), a person “traffics” in confiscated property if that person knowingly and intentionally—

H. R. 927—7

(i) sells, transfers, distributes, dispenses, brokers, manages, or otherwise disposes of confiscated property, or purchases, leases, receives, possesses, obtains control of, manages, uses, or otherwise acquires or holds an interest in confiscated property,

(ii) engages in a commercial activity using or otherwise benefiting from confiscated property, or

(iii) causes, directs, participates in, or profits from, trafficking (as described in clause (i) or (ii)) by another person, or otherwise engages in trafficking (as described in clause (i) or (ii)) through another person,

without the authorization of any United States national who holds a claim to the property.

(B) The term “traffics” does not include— (i) the delivery of international telecommunication sig-

nals to Cuba; (ii) the trading or holding of securities publicly traded

or held, unless the trading is with or by a person determined by the Secretary of the Treasury to be a specially designated national;

(iii) transactions and uses of property incident to lawful travel to Cuba, to the extent that such transactions and uses of property are necessary to the conduct of such travel; or

(iv) transactions and uses of property by a person who is both a citizen of Cuba and a resident of Cuba, and who is not an official of the Cuban Government or the ruling political party in Cuba. (14) TRANSITION GOVERNMENT IN CUBA.—The term “transi-

tion government in Cuba” means a government that the President determines is a transition government consistent with the requirements and factors set forth in section 205.

(15) UNITED STATES NATIONAL.—The term “United States national” means—

(A) any United States citizen; or

(B) any other legal entity which is organized under the laws of the United States, or of any State, the District of Columbia, or any commonwealth, territory, or possession of the United States, and which has its principal place of business in the United States.

SEC. 5. SEVERABILITY.

If any provision of this Act or the amendments made by this Act or the application thereof to any person or

circumstance is held invalid, the remainder of this Act, the amendments made by this Act, or the application thereof to other persons not similarly situated or to other circumstances shall not be affected by such invalidation.

TITLE I—STRENGTHENING INTERNATIONAL SANCTIONS AGAINST THE CASTRO GOVERNMENT

SEC. 101. STATEMENT OF POLICY.

It is the sense of the Congress that—

H. R. 927—8

(1) the acts of the Castro government, including its massive, systematic, and extraordinary violations of human rights, are a threat to international peace;

(2) the President should advocate, and should instruct the United States Permanent Representative to the United Nations to propose and seek within the Security Council, a mandatory international embargo against the totalitarian Cuban Government pursuant to chapter VII of the Charter of the United Nations, employing efforts similar to consultations conducted by United States representatives with respect to Haiti;

(3) any resumption of efforts by any independent state of the former Soviet Union to make operational any nuclear facilities in Cuba, and any continuation of intelligence activities by such a state from Cuba that are targeted at the United States and its citizens will have a detrimental impact on United States assistance to such state; and

(4) in view of the threat to the national security posed by the operation of any nuclear facility, and the Castro government's continuing blackmail to unleash another wave of Cuban refugees fleeing from Castro's oppression, most of whom find their way to United States shores, further depleting limited humanitarian and other resources of the United States, the President should do all in his power to make it clear to the Cuban Government that—

(A) the completion and operation of any nuclear power facility, or

(B) any further political manipulation of the desire of Cubans to escape that results in mass migration to the United States,

will be considered an act of aggression which will be met with an appropriate response in order to maintain the security of the national borders of the United States and the health and safety of the American people.

SEC. 102. ENFORCEMENT OF THE ECONOMIC EMBARGO OF CUBA.

(a) POLICY.—(1) RESTRICTIONS BY OTHER COUNTRIES.—The Congress

hereby reaffirms section 1704(a) of the Cuban Democracy Act of 1992, which states that the President should encourage foreign countries to restrict trade and credit relations with Cuba in a manner consistent with the purposes of that Act.

(2) SANCTIONS ON OTHER COUNTRIES.—The Congress further urges the President to take immediate steps to apply the sanctions described in section 1704(b)(1) of that Act against countries assisting Cuba. (b) DIPLOMATIC EFFORTS.—The Secretary of State should ensure

that United States diplomatic personnel abroad understand and, in their contacts with foreign officials, are

communicating the reasons for the United States economic embargo of Cuba, and are urging foreign governments to cooperate more effectively with the embargo.

(c) EXISTING REGULATIONS.—The President shall instruct the Secretary of the Treasury and the Attorney General to enforce fully the Cuban Assets Control Regulations set forth in part 515 of title 31, Code of Federal Regulations.

(d) TRADING WITH THE ENEMY ACT.—

H. R. 927—9

(1) CIVIL PENALTIES.—Subsection (b) of section 16 of the Trading with the Enemy Act (50 U.S.C. App. 16(b)), as added by Public Law 102–484, is amended to read as follows: “(b)(1) A civil penalty of not to exceed \$50,000 may be imposed

by the Secretary of the Treasury on any person who violates any license, order, rule, or regulation issued in compliance with the provisions of this Act.

“(2) Any property, funds, securities, papers, or other articles or documents, or any vessel, together with its tackle, apparel, furniture, and equipment, that is the subject of a violation under paragraph (1) shall, at the direction of the Secretary of the Treasury, be forfeited to the United States Government.

“(3) The penalties provided under this subsection may be imposed only on the record after opportunity for an agency hearing in accordance with sections 554 through 557 of title 5, United States Code, with the right to prehearing discovery.

“(4) Judicial review of any penalty imposed under this subsection may be had to the extent provided in section 702 of title 5, United States Code.”.

(2) CONFORMING AMENDMENT; CRIMINAL FORFEITURE.—Section 16 of the Trading with the Enemy Act is further amended by striking subsection (b), as added by Public Law 102–393.

(3) CLERICAL AMENDMENTS.—Section 16 of the Trading with the Enemy Act is further amended—

(A) by inserting “SEC. 16.” before “(a)”;

(B) in subsection (a) by striking “participants” and inserting “participates”.

(e) DENIAL OF VISAS TO CERTAIN CUBAN NATIONALS.—It is the sense of the Congress that the President should instruct the Secretary of State and the Attorney General to enforce fully existing regulations to deny visas to Cuban nationals considered by the Secretary of State to be officers or employees of the Cuban Government or of the Communist Party of Cuba.

(f) COVERAGE OF DEBT-FOR-EQUITY SWAPS BY ECONOMIC EMBARGO OF CUBA.—Section 1704(b)(2) of the Cuban Democracy Act of 1992 (22 U.S.C. 6003(b)(2)) is amended—

(1) by striking “and” at the end of subparagraph (A);

(2) by redesignating subparagraph (B) as subparagraph (C); and

(3) by inserting after subparagraph (A) the following new subparagraph:

“(B) includes an exchange, reduction, or forgiveness of Cuban debt owed to a foreign country in return for a

grant of an equity interest in a property, investment, or operation of the Government of Cuba (including the government of any political subdivision of Cuba, and any agency or instrumentality of the Government of Cuba) or of a Cuban national; and”’; and (4) by adding at the end the following flush sentence:

“As used in this paragraph, the term ‘agency or instrumentality of the Government of Cuba’ means an agency or instrumentality of a foreign state as defined in section 1603(b) of title 28, United States Code, with each reference in such section to ‘a foreign state’ deemed to be a reference to ‘Cuba’.”.

(g) TELECOMMUNICATIONS SERVICES.—Section 1705(e) of the Cuban Democracy Act of 1992 (22 U.S.C. 6004(e)) is amended by adding at the end the following new paragraphs:

H. R. 927—10

“(5) PROHIBITION ON INVESTMENT IN DOMESTIC TELE- COMMUNICATIONS SERVICES.— Nothing in this subsection shall be construed to authorize the investment by any United States person in the domestic telecommunications network within Cuba. For purposes of this paragraph, an ‘investment’ in the domestic telecommunications network within Cuba includes the contribution (including by donation) of funds or anything of value to or for, and the making of loans to or for, such network.

“(6) REPORTS TO CONGRESS.—The President shall submit to the Congress on a semiannual basis a report detailing payments made to Cuba by any United States person as a result of the provision of telecommunications services authorized by this subsection.”. (h) CODIFICATION OF ECONOMIC EMBARGO.—The economic

embargo of Cuba, as in effect on March 1, 1996, including all restrictions under part 515 of title 31, Code of Federal Regulations, shall be in effect upon the enactment of this Act, and shall remain in effect, subject to section 204 of this Act.

SEC. 103. PROHIBITION AGAINST INDIRECT FINANCING OF CUBA.

(a) PROHIBITION.—Notwithstanding any other provision of law, no loan, credit, or other financing may be extended knowingly by a United States national, a permanent resident alien, or a United States agency to any person for the purpose of financing transactions involving any confiscated property the claim to which is owned by a United States national as of the date of the enactment of this Act, except for financing by the United States national owning such claim for a transaction permitted under United States law.

(b) SUSPENSION AND TERMINATION OF PROHIBITION.— (1) SUSPENSION.—The President is authorized to suspend the prohibition contained in subsection (a) upon a determination made under section 203(c)(1) that a transition government in

Cuba is in power. (2) TERMINATION.—The prohibition contained in subsection

(a) shall cease to apply on the date on which the economic embargo of Cuba terminates as provided in section 204. (c) PENALTIES.—Violations of subsection (a) shall be punishable

by such civil penalties as are applicable to violations of the Cuban Assets Control Regulations set forth in part 515 of title 31, Code of Federal Regulations.

(d) DEFINITIONS.—As used in this section— (1) the term “permanent resident alien” means an alien

lawfully admitted for permanent residence into the United States; and

(2) the term “United States agency” has the meaning given the term “agency” in section 551(1) of title 5,

United States Code.

SEC. 104. UNITED STATES OPPOSITION TO CUBAN MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS.

(a) CONTINUED OPPOSITION TO CUBAN MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS.—

(1) IN GENERAL.—Except as provided in paragraph (2), the Secretary of the Treasury shall instruct the United States executive director of each international financial institution to use the voice and vote of the United States to oppose the admission of Cuba as a member of such institution until the

H. R. 927—11

President submits a determination under section 203(c)(3) that a democratically elected government in Cuba is in power.

(2) TRANSITION GOVERNMENT.—Once the President submits a determination under section 203(c)(1) that a transition government in Cuba is in power—

(A) the President is encouraged to take steps to support the processing of Cuba's application for membership in any international financial institution, subject to the membership taking effect after a democratically elected government in Cuba is in power, and

(B) the Secretary of the Treasury is authorized to instruct the United States executive director of each international financial institution to support loans or other assistance to Cuba only to the extent that such loans or assistance contribute to a stable foundation for a democratically elected government in Cuba.

(b) REDUCTION IN UNITED STATES PAYMENTS TO INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS.—If any international financial institution approves a loan or other assistance to the Cuban Government over the opposition of the United States, then the Secretary of the Treasury shall withhold from payment to such institution an amount equal to the amount of the loan or other assistance, with respect to either of the following types of payment:

(1) The paid-in portion of the increase in capital stock of the institution.

(2) The callable portion of the increase in capital stock of the institution. (c) DEFINITION.—For purposes of this section, the term “inter-

national financial institution” means the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the International Development Association, the International Finance Corporation, the Multilateral Investment Guaranty Agency, and the Inter-American Development Bank.

SEC. 105. UNITED STATES OPPOSITION TO TERMINATION OF THE SUSPENSION OF THE CUBAN GOVERNMENT FROM PARTICIPATION IN THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES.

The President should instruct the United States Permanent Representative to the Organization of American States to oppose and vote against any termination of the suspension of the Cuban Government from participation in the Organization until the President determines under section 203(c)(3) that a democratically elected government in Cuba is in power.

SEC. 106. ASSISTANCE BY THE INDEPENDENT STATES OF THE FORMER SOVIET UNION FOR

THE CUBAN GOVERNMENT.

(a) **REPORTING REQUIREMENT.**—Not later than 90 days after the date of the enactment of this Act, the President shall submit to the appropriate congressional committees a report detailing progress toward the withdrawal of personnel of any independent state of the former Soviet Union (within the meaning of section 3 of the FREEDOM Support Act (22 U.S.C. 5801)), including advisers, technicians, and military personnel, from the Cienfuegos nuclear facility in Cuba.

(b) **CRITERIA FOR ASSISTANCE.**—Section 498A(a)(11) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2295a(a)(11)) is amended by striking “of military facilities” and inserting “military and intel-

H. R. 927—12

ligence facilities, including the military and intelligence facilities at Lourdes and Cienfuegos”.

(c) **INELIGIBILITY FOR ASSISTANCE.**—(1) **IN GENERAL.**—Section 498A(b) of that Act (22 U.S.C.

2295a(b)) is amended— (A) by striking “or” at the end of paragraph (4); (B) by redesignating paragraph (5) as paragraph (6); and (C) by inserting after paragraph (4) the following new

paragraph: “(5) for the government of any independent state effective

30 days after the President has determined and certified to the appropriate congressional committees (and Congress has not enacted legislation disapproving the determination within that 30-day period) that such government is providing assistance for, or engaging in nonmarket based trade (as defined in section 498B(k)(3)) with, the Cuban Government; or”

(2) **DEFINITION.**—Subsection (k) of section 498B of that Act (22 U.S.C. 2295b(k)) is amended by adding at the end the following new paragraph:

“(3) **NONMARKET BASED TRADE.**—As used in section 498A(b)(5), the term ‘nonmarket based trade’ includes exports, imports, exchanges, or other arrangements that are provided for goods and services (including oil and other petroleum products) on terms more favorable than those generally available in applicable markets or for comparable commodities, including—

“(A) exports to the Cuban Government on terms that involve a grant, concessional price, guaranty, insurance, or subsidy;

“(B) imports from the Cuban Government at preferential tariff rates;

“(C) exchange arrangements that include advance delivery of commodities, arrangements in which the Cuban Government is not held accountable for unfulfilled exchange contracts, and arrangements under which Cuba does not pay appropriate transportation, insurance, or finance costs; and

“(D) the exchange, reduction, or forgiveness of debt of the Cuban Government in return for a grant by the Cuban Government of an equity interest in a property, investment, or operation of the Cuban Government or of a Cuban national. “(4) **CUBAN GOVERNMENT.**—(A) The term ‘Cuban Govern-

ment’ includes the government of any political subdivision of Cuba, and any agency or instrumentality of the Government of Cuba.

“(B) For purposes of subparagraph (A), the term ‘agency or instrumentality of the Government of Cuba’ means an agency or instrumentality of a foreign state as defined in section 1603(b) of title 28, United States

Code, with each reference in such section to ‘a foreign state’ deemed to be a reference to ‘Cuba’.’’.

(3) EXCEPTION.—Section 498A(c) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2295A(c)) is amended by inserting after paragraph (3) the following new paragraph:

H. R. 927—13

“(4) The assistance is provided under the secondary school exchange program administered by the United States Information Agency.”. (d) FACILITIES AT LOURDES, CUBA.—

(1) DISAPPROVAL OF CREDITS.—The Congress expresses its strong disapproval of the extension by Russia of credits equivalent to \$200,000,000 in support of the intelligence facility at Lourdes, Cuba, in November 1994.

(2) REDUCTION IN ASSISTANCE.—Section 498A of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2295a) is amended by adding at the end the following new subsection: “(d) REDUCTION IN ASSISTANCE FOR SUPPORT OF INTELLIGENCE

FACILITIES IN CUBA.—“(1) REDUCTION IN ASSISTANCE.—Notwithstanding any

other provision of law, the President shall withhold from assistance provided, on or after the date of the enactment of this subsection, for an independent state of the former Soviet Union under this Act an amount equal to the sum of assistance and credits, if any, provided on or after such date by such state in support of intelligence facilities in Cuba, including the intelligence facility at Lourdes, Cuba.

“(2) WAIVER.—(A) The President may waive the requirement of paragraph (1) to withhold assistance if the President certifies to the appropriate congressional committees that the provision of such assistance is important to the national security of the United States, and, in the case of such a certification made with respect to Russia, if the President certifies that the Russian Government has assured the United States Government that the Russian Government is not sharing intelligence data collected at the Lourdes facility with officials or agents of the Cuban Government.

“(B) At the time of a certification made with respect to Russia under subparagraph (A), the President shall also submit to the appropriate congressional committees a report describing the intelligence activities of Russia in Cuba, including the purposes for which the Lourdes facility is used by the Russian Government and the extent to which the Russian Government provides payment or government credits to the Cuban Government for the continued use of the Lourdes facility.

“(C) The report required by subparagraph (B) may be submitted in classified form.

“(D) For purposes of this paragraph, the term ‘appropriate congressional committees’ includes the Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives and the Select Committee on Intelligence of the Senate.

“(3) EXCEPTIONS TO REDUCTIONS IN ASSISTANCE.—The requirement of paragraph (1) to withhold assistance shall not apply with respect to—

“(A) assistance to meet urgent humanitarian needs, including disaster and refugee relief;

“(B) democratic political reform or rule of law activities;

“(C) technical assistance for safety upgrades of civilian nuclear power plants;

“(D) the creation of private sector or nongovernmental organizations that are independent of government control; “(E) the development of a free market economic system;

H. R. 927—14

“(F) assistance under the secondary school exchange program administered by the United States Information Agency; or

“(G) assistance for the purposes described in the Cooperative Threat Reduction Act of 1993 (title XII of Public Law 103–160).”.

SEC. 107. TELEVISION BROADCASTING TO CUBA.

(a) **CONVERSION TO UHF.**—The Director of the United States Information Agency shall implement a conversion of television broadcasting to Cuba under the Television Marti Service to ultra high frequency (UHF) broadcasting.

(b) **PERIODIC REPORTS.**—Not later than 45 days after the date of the enactment of this Act, and every three months thereafter until the conversion described in subsection (a) is fully implemented, the Director of the United States Information Agency shall submit a report to the appropriate congressional committees on the progress made in carrying out subsection (a).

(c) **TERMINATION OF BROADCASTING AUTHORITIES.**—Upon transmittal of a determination under section 203(c)(3), the Tele- vision Broadcasting to Cuba Act (22 U.S.C. 1465aa and following) and the Radio Broadcasting to Cuba Act (22 U.S.C. 1465 and following) are repealed.

SEC. 108. REPORTS ON COMMERCE WITH, AND ASSISTANCE TO, CUBA FROM OTHER FOREIGN COUNTRIES.

(a) **REPORTS REQUIRED.**—Not later than 90 days after the date of the enactment of this Act, and by January 1 of each year thereafter until the President submits a determination under sec- tion 203(c)(1), the President shall submit a report to the appropriate congressional committees on commerce with, and assistance to, Cuba from other foreign countries during the preceding 12-month period.

(b) **CONTENTS OF REPORTS.**—Each report required by subsection (a) shall, for the period covered by the report, contain the following, to the extent such information is available:

(1) A description of all bilateral assistance provided to Cuba by other foreign countries, including humanitarian assist- ance.

(2) A description of Cuba’s commerce with foreign countries, including an identification of Cuba’s trading partners and the extent of such trade.

(3) A description of the joint ventures completed, or under consideration, by foreign nationals and business firms involving facilities in Cuba, including an identification of the location of the facilities involved and a description of the terms of agreement of the joint ventures and the names of the parties that are involved.

(4) A determination as to whether or not any of the facilities described in paragraph (3) is the subject of a claim against Cuba by a United States national.

(5) A determination of the amount of debt of the Cuban Government that is owed to each foreign country, including— (A) the amount of debt exchanged, forgiven, or reduced under the terms of each investment or operation in Cuba

involving foreign nationals; and (B) the amount of debt owed the foreign country that has been exchanged, forgiven, or reduced in return for

H. R. 927—15

a grant by the Cuban Government of an equity interest in a property, investment, or operation of the Cuban Government or of a Cuban national. (6) A description of the steps taken to assure that raw

materials and semifinished or finished goods produced by facilities in Cuba involving foreign nationals do not enter the United States market, either directly or through third countries or parties.

(7) An identification of countries that purchase, or have purchased, arms or military supplies from Cuba or that otherwise have entered into agreements with Cuba that have a military application, including—

(A) a description of the military supplies, equipment, or other material sold, bartered, or exchanged between Cuba and such countries,

(B) a listing of the goods, services, credits, or other consideration received by Cuba in exchange for military supplies, equipment, or material, and

(C) the terms or conditions of any such agreement.

SEC. 109. AUTHORIZATION OF SUPPORT FOR DEMOCRATIC AND HUMAN RIGHTS GROUPS AND INTERNATIONAL OBSERVERS.

(a) AUTHORIZATION.—Notwithstanding any other provision of law (including section 102 of this Act), except for section 634A of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2394–1) and comparable notification requirements contained in any Act making appropriations for foreign operations, export financing, and related programs, the President is authorized to furnish assistance and provide other support for individuals and independent nongovernmental organizations to support democracy-building efforts for Cuba, including the following:

(1) Published and informational matter, such as books, videos, and cassettes, on transitions to democracy, human rights, and market economies, to be made available to independent democratic groups in Cuba.

(2) Humanitarian assistance to victims of political repression, and their families.

(3) Support for democratic and human rights groups in Cuba.

(4) Support for visits and permanent deployment of independent international human rights monitors in Cuba. (b) OAS EMERGENCY FUND.—

(1) FOR SUPPORT OF HUMAN RIGHTS AND ELECTIONS.—The President shall take the necessary steps to encourage the Organization of American States to create a special emergency fund for the explicit purpose of deploying human rights observers, election support, and election observation in Cuba.

(2) ACTION OF OTHER MEMBER STATES.—The President should instruct the United States Permanent Representative to the Organization of American States to encourage other member states of the Organization to join in calling for the Cuban Government to allow the immediate deployment of independent human rights monitors of the Organization throughout Cuba and on-site visits to Cuba by the Inter-American Commission on Human Rights.

(3) VOLUNTARY CONTRIBUTIONS FOR FUND.—Notwithstanding section 307 of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2227) or any other provision of law limiting the United States proportionate share of assistance to Cuba by any international organization, the President should provide not less than \$5,000,000 of the voluntary contributions of the United States to the Organization of American States solely for the purposes of the special fund referred to in paragraph (1). (c) DENIAL OF FUNDS TO THE CUBAN GOVERNMENT.—In

implementing this section, the President shall take all necessary steps to ensure that no funds or other assistance is provided to the Cuban Government.

SEC. 110. IMPORTATION SAFEGUARD AGAINST CERTAIN CUBAN PRODUCTS.

(a) PROHIBITION ON IMPORT OF AND DEALINGS IN CUBAN PRODUCTS.—The Congress notes that section 515.204 of title 31, Code of Federal Regulations, prohibits the entry of, and dealings outside the United States in, merchandise that—

(1) is of Cuban origin;

(2) is or has been located in or transported from or through Cuba; or

(3) is made or derived in whole or in part of any article which is the growth, produce, or manufacture of Cuba. (b) EFFECT OF NAFTA.—The Congress notes that United States

accession to the North American Free Trade Agreement does not modify or alter the United States sanctions against Cuba. The statement of administrative action accompanying that trade agreement specifically states the following:

(1) “The NAFTA rules of origin will not in any way diminish the Cuban sanctions program. . . . Nothing in the NAFTA would operate to override this prohibition.”.

(2) “Article 309(3) [of the NAFTA] permits the United States to ensure that Cuban products or goods made from Cuban materials are not imported into the United States from Mexico or Canada and that United States products are not exported to Cuba through those countries.”. (c) RESTRICTION OF SUGAR IMPORTS.—The Congress notes that

section 902(c) of the Food Security Act of 1985 (Public Law 99– 198) requires the President not to allocate any of the sugar import quota to a country that is a net importer of sugar unless appropriate officials of that country verify to the President that the country does not import for reexport to the United States any sugar produced in Cuba.

(d) ASSURANCES REGARDING SUGAR PRODUCTS.—Protection of essential security interests of the United States requires assurances that sugar products that are entered, or withdrawn from warehouse for consumption, into the customs territory of the United States are not products of Cuba.

SEC. 111. WITHHOLDING OF FOREIGN ASSISTANCE FROM COUNTRIES SUPPORTING JURAGUA NUCLEAR PLANT IN CUBA.

(a) FINDINGS.—The Congress makes the following findings: (1) President Clinton stated in April 1993 that the United States opposed the construction of the Juragua nuclear power plant because of the concerns of the United States about Cuba’s ability to ensure the safe operation of the facility and because

of Cuba's refusal to sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty or ratify the Treaty of Tlatelolco.

(2) Cuba has not signed the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons or ratified the Treaty of Tlatelolco, the latter of which establishes Latin America and the Caribbean as a nuclear weapons-free zone.

(3) The State Department, the Nuclear Regulatory Commission, and the Department of Energy have expressed concerns about the construction and operation of Cuba's nuclear reactors.

(4) In a September 1992 report to the Congress, the General Accounting Office outlined concerns among nuclear energy experts about deficiencies in the nuclear plant project in Juragua, near Cienfuegos, Cuba, including—

(A) a lack in Cuba of a nuclear regulatory structure;

(B) the absence in Cuba of an adequate infrastructure to ensure the plant's safe operation and requisite maintenance;

(C) the inadequacy of training of plant operators;

(D) reports by a former technician from Cuba who, by examining with x-rays weld sites believed to be part of the auxiliary plumbing system for the plant, found that 10 to 15 percent of those sites were defective;

(E) since September 5, 1992, when construction on the plant was halted, the prolonged exposure to the elements, including corrosive salt water vapor, of the primary reactor components; and

(F) the possible inadequacy of the upper portion of the reactors' dome retention capability to withstand only 7 pounds of pressure per square inch, given that normal atmospheric pressure is 32 pounds per square inch and United States reactors are designed to accommodate pressures of 50 pounds per square inch. (5) The United States Geological Survey claims that it

had difficulty determining answers to specific questions regarding earthquake activity in the area near Cienfuegos because the Cuban Government was not forthcoming with information.

(6) The Geological Survey has indicated that the Caribbean plate, a geological formation near the south coast of Cuba, may pose seismic risks to Cuba and the site of the power plant, and may produce large to moderate earthquakes.

(7) On May 25, 1992, the Caribbean plate produced an earthquake numbering 7.0 on the Richter scale.

(8) According to a study by the National Oceanic and Atmospheric Administration, summer winds could carry radioactive pollutants from a nuclear accident at the power plant throughout all of Florida and parts of the States on the coast of the Gulf of Mexico as far as Texas, and northern winds could carry the pollutants as far northeast as Virginia and Washington, D.C.

(9) The Cuban Government, under dictator Fidel Castro, in 1962 advocated the Soviets' launching of nuclear missiles to the United States, which represented a direct and dangerous provocation of the United States and brought the world to the brink of a nuclear conflict.

(10) Fidel Castro over the years has consistently issued threats against the United States Government, most recently

that he would unleash another perilous mass migration from Cuba upon the enactment of this Act.

(11) Despite the various concerns about the plant's safety and operational problems, a feasibility study is being conducted that would establish a support group to include Russia, Cuba, and third countries with the objective of completing and operating the plant. (b) WITHHOLDING OF FOREIGN ASSISTANCE.—

(1) IN GENERAL.—Notwithstanding any other provision of law, the President shall withhold from assistance allocated, on or after the date of the enactment of this Act, for any country an amount equal to the sum of assistance and credits, if any, provided on or after such date of enactment by that country or any entity in that country in support of the completion of the Cuban nuclear facility at Juragua, near Cienfuegos, Cuba.

(2) EXCEPTIONS.—The requirement of paragraph (1) to withhold assistance shall not apply with respect to—

(A) assistance to meet urgent humanitarian needs, including disaster and refugee relief;

(B) democratic political reform or rule of law activities;

(C) the creation of private sector or nongovernmental organizations that are independent of government control; (D) the development of a free market economic system; (E) assistance for the purposes described in the Cooperative Threat Reduction Act of 1993 (title XII of

Public Law 103–160); or (F) assistance under the secondary school exchange

program administered by the United States Information Agency. (3) DEFINITION.—As used in paragraph (1), the term “assist-

ance” means assistance under the Foreign Assistance Act of 1961, credits, sales, guarantees of extensions of credit, and other assistance under the Arms Export Control Act, assistance under titles I and III of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954, assistance under the FREEDOM Support Act, and any other program of assistance or credits provided by the United States to other countries under other provisions of law.

SEC. 112. REINSTITUTION OF FAMILY REMITTANCES AND TRAVEL TO CUBA.

It is the sense of the Congress that the President should— (1)(A) before considering the reinstitution of general licenses for family remittances to Cuba, insist that, prior to such reinstitution, the Cuban Government permit the unfettered operation of small businesses fully empowered with the right to hire others to whom they may pay wages and to buy materials necessary in the operation of the businesses, and with such other authority and freedom as are required to foster the operation of small businesses throughout Cuba;

and (B) if licenses described in subparagraph (A) are

reinstated, require a specific license for remittances described in subparagraph (A) in amounts of more than \$500; and

(2) before considering the reinstitution of general licenses for travel to Cuba by individuals resident in the United States

who are family members of Cuban nationals who are resident in Cuba, insist on such actions by the Cuban Government as abrogation of the sanction for departure from Cuba by refugees, release of political prisoners, recognition of the right of association, and other fundamental freedoms.

SEC. 113. EXPULSION OF CRIMINALS FROM CUBA.

The President shall instruct all United States Government officials who engage in official contacts with the Cuban Government to raise on a regular basis the extradition of or rendering to the United States all persons residing in Cuba who are sought by the United States Department of Justice for crimes committed in the United States.

SEC. 114. NEWS BUREAUS IN CUBA.

(a) ESTABLISHMENT OF NEWS BUREAUS.—The President is authorized to establish and implement an exchange of news bureaus between the United States and Cuba, if the exchange meets the following conditions:

(1) The exchange is fully reciprocal.

(2) The Cuban Government agrees not to interfere with the establishment of news bureaus or with the movement in Cuba of journalists of any United States-based news organizations, including Radio Marti and Television Marti.

(3) The Cuban Government agrees not to interfere with decisions of United States-based news organizations with respect to individuals assigned to work as journalists in their news bureaus in Cuba.

(4) The Department of the Treasury is able to ensure that only accredited journalists regularly employed with a news gathering organization travel to Cuba under this subsection.

(5) The Cuban Government agrees not to interfere with the transmission of telecommunications signals of news bureaus or with the distribution within Cuba of publications of any United States-based news organization that has a news bureau in Cuba. (b) ASSURANCE AGAINST ESPIONAGE.—In implementing this sec-

tion, the President shall take all necessary steps to ensure the safety and security of the United States against espionage by Cuban journalists it believes to be working for the intelligence agencies of the Cuban Government.

(c) FULLY RECIPROCAL.—As used in subsection (a)(1), the term “fully reciprocal” means that all news services, news organizations, and broadcasting services, including such services or organizations that receive financing, assistance, or other support from a governmental or official source, are permitted to establish and operate a news bureau in the United States and Cuba.

SEC. 115. EFFECT OF ACT ON LAWFUL UNITED STATES GOVERNMENT ACTIVITIES.

Nothing in this Act prohibits any lawfully authorized investigative, protective, or intelligence activity of a law enforcement agency, or of an intelligence agency, of the United States.

SEC. 116. CONDEMNATION OF CUBAN ATTACK ON AMERICAN AIRCRAFT.

(a) FINDINGS.—The Congress makes the following findings:

(1) Brothers to the Rescue is a Miami-based humanitarian organization engaged in searching for and aiding Cuban refugees in the Straits of Florida, and was engaged in such a mission on Saturday, February 24, 1996.

(2) The members of Brothers to the Rescue were flying unarmed and defenseless planes in a mission identical to hundreds they have flown since 1991 and posed no threat whatsoever to the Cuban Government, the Cuban military, or the Cuban people.

(3) Statements by the Cuban Government that Brothers to the Rescue has engaged in covert operations, bombing campaigns, and commando operations against the Government of Cuba have no basis in fact.

(4) The Brothers to the Rescue aircraft notified air traffic controllers as to their flight plans, which would take them south of the 24th parallel and close to Cuban airspace.

(5) International law provides a nation with airspace over the 12-mile territorial sea.

(6) The response of Fidel Castro's dictatorship to Saturday's afternoon flight was to scramble 2 fighter jets from a Havana airfield.

(7) At approximately 3:24 p.m., the pilot of one of the Cuban MiGs received permission and proceeded to shoot down one Brothers to the Rescue airplane more than 6 miles north of the Cuban exclusion zone, or 18 miles from the Cuban coast.

(8) Approximately 7 minutes later, the pilot of the Cuban fighter jet received permission and proceeded to shoot down the second Brothers to the Rescue airplane almost 18.5 miles north of the Cuban exclusion zone, or 30.5 miles from the Cuban coast.

(9) The Cuban dictatorship, if it truly felt threatened by the flight of these unarmed aircraft, could have and should have pursued other peaceful options as required by international law.

(10) The response chosen by Fidel Castro, the use of lethal force, was completely inappropriate to the situation presented to the Cuban Government, making such actions a blatant and barbaric violation of international law and tantamount to cold-blooded murder.

(11) There were no survivors of the attack on these aircraft, and the crew of a third aircraft managed to escape this criminal attack by Castro's Air Force.

(12) The crew members of the destroyed planes, Pablo Morales, Carlos Costa, Mario de la Pena, and Armando Alejandro, were United States citizens from Miami flying with Brothers to the Rescue on a voluntary basis.

(13) It is incumbent upon the United States Government to protect the lives and livelihoods of United States citizens as well as the rights of free passage and humanitarian missions.

(14) This premeditated act took place after a week-long wave of repression by the Cuban Government against Concilio Cubano, an umbrella organization of human rights activists, dissidents, independent economists, and independent journalists, among others.

(15) The wave of repression against Concilio Cubano, whose membership is committed to peaceful democratic change in

H. R. 927—21

Cuba, included arrests, strip searches, house arrests, and in some cases sentences to more than 1 year in

jail. (b) STATEMENTS BY THE CONGRESS.—(1) The Congress strongly

condemns the act of terrorism by the Castro regime in shooting down the Brothers to the Rescue aircraft on February 24, 1996. (2) The Congress extends its condolences to the families of Pablo Morales, Carlos Costa, Mario de la Pena, and Armando

Alejandro, the victims of the attack. (3) The Congress urges the President to seek, in the International Court of Justice, indictment for this act of terrorism by Fidel Castro.

TITLE II—ASSISTANCE TO A FREE AND INDEPENDENT CUBA

SEC. 201. POLICY TOWARD A TRANSITION GOVERNMENT AND A DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT IN CUBA.

The policy of the United States is as follows: (1) To support the self-determination of the Cuban people. (2) To recognize that the self-determination of the Cuban

people is a sovereign and national right of the citizens of Cuba which must be exercised free of interference by the government of any other country.

(3) To encourage the Cuban people to empower themselves with a government which reflects the self-determination of the Cuban people.

(4) To recognize the potential for a difficult transition from the current regime in Cuba that may result from the initiatives taken by the Cuban people for self-determination in response to the intransigence of the Castro regime in not allowing any substantive political or economic reforms, and to be prepared to provide the Cuban people with humanitarian, developmental, and other economic assistance.

(5) In solidarity with the Cuban people, to provide appropriate forms of assistance—

(A) to a transition government in Cuba;

(B) to facilitate the rapid movement from such a transition government to a democratically elected government in Cuba that results from an expression of the self-determination of the Cuban people; and

(C) to support such a democratically elected government.

(6) Through such assistance, to facilitate a peaceful transition to representative democracy and a market economy in Cuba and to consolidate democracy in Cuba.

(7) To deliver such assistance to the Cuban people only through a transition government in Cuba, through a democratically elected government in Cuba, through United States Government organizations, or through United States, international, or indigenous nongovernmental organizations.

(8) To encourage other countries and multilateral organizations to provide similar assistance, and to work cooperatively with such countries and organizations to coordinate such assistance.

H. R. 927—22

(9) To ensure that appropriate assistance is rapidly provided and distributed to the people of Cuba upon the institution of a transition government in Cuba.

(10) Not to provide favorable treatment or influence on behalf of any individual or entity in the selection by the Cuban people of their future government.

(11) To assist a transition government in Cuba and a democratically elected government in Cuba to prepare the Cuban military forces for an appropriate role in a democracy.

(12) To be prepared to enter into negotiations with a democratically elected government in Cuba either to return the United States Naval Base at Guantanamo to Cuba or to renegotiate the present agreement under mutually agreeable terms.

(13) To consider the restoration of diplomatic recognition and support the reintegration of the Cuban Government into Inter-American organizations when the President determines that there exists a democratically elected government in Cuba.

(14) To take steps to remove the economic embargo of Cuba when the President determines that a transition to a democratically elected government in Cuba has begun.

(15) To assist a democratically elected government in Cuba to strengthen and stabilize its national currency.

(16) To pursue trade relations with a free, democratic, and independent Cuba.

SEC. 202. ASSISTANCE FOR THE CUBAN PEOPLE.

(a) AUTHORIZATION.— (1) IN GENERAL.—The President shall develop a plan for

providing economic assistance to Cuba at such time as the President determines that a transition government or a democratically elected government in Cuba (as determined under section 203(c)) is in power.

(2) EFFECT ON OTHER LAWS.—Assistance may be provided under this section subject to an authorization of appropriations and subject to the availability of appropriations. (b) PLAN FOR ASSISTANCE.—

(1) DEVELOPMENT OF PLAN.—The President shall develop a plan for providing assistance under this section—

(A) to Cuba when a transition government in Cuba is in power; and

(B) to Cuba when a democratically elected government in Cuba is in power. (2) TYPES OF ASSISTANCE.—Assistance under the plan devel-

oped under paragraph (1) may, subject to an authorization of appropriations and subject to the availability of appropriations, include the following:

(A) TRANSITION GOVERNMENT.—(i) Except as provided in clause (ii), assistance to Cuba under a transition government shall, subject to an authorization of appropriations and subject to the availability of appropriations, be limited to—

(I) such food, medicine, medical supplies and equipment, and assistance to meet emergency energy needs, as is necessary to meet the basic human needs of the Cuban people; and

(II) assistance described in subparagraph (C).

(ii) Assistance in addition to assistance under clause (i) may be provided, but only after the President certifies to the appropriate congressional committees, in accordance with procedures applicable to reprogramming notifications under section 634A of the Foreign Assistance Act of 1961, that such assistance is essential to the successful completion of the transition to democracy.

(iii) Only after a transition government in Cuba is in power, freedom of individuals to travel to visit their relatives without any restrictions shall be permitted.

(B) DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT.—Assistance to a democratically elected government in Cuba may, subject to an authorization of appropriations and subject to the availability of appropriations, consist of economic assistance in addition to assistance available under subparagraph (A), together with assistance described in subparagraph (C). Such economic assistance may include—

(i) assistance under chapter 1 of part I (relating to development assistance), and chapter 4 of part II (relating to the economic support fund), of the Foreign Assistance Act of 1961;

(ii) assistance under the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954;

(iii) financing, guarantees, and other forms of assistance provided by the Export-Import Bank of the United States;

(iv) financial support provided by the Overseas Private Investment Corporation for investment projects in Cuba;

(v) assistance provided by the Trade and Development Agency;

(vi) Peace Corps programs; and

(vii) other appropriate assistance to carry out the policy of section 201. (C) MILITARY ADJUSTMENT ASSISTANCE.—Assistance to

a transition government in Cuba and to a democratically elected government in Cuba shall also include assistance in preparing the Cuban military forces to adjust to an appropriate role in a democracy.

(c) STRATEGY FOR DISTRIBUTION.—The plan developed under subsection (b) shall include a strategy for distributing assistance under the plan.

(d) DISTRIBUTION.—Assistance under the plan developed under subsection (b) shall be provided through United States Government organizations and nongovernmental organizations and private and voluntary organizations, whether within or outside the United States, including humanitarian, educational, labor, and private sector organizations.

(e) INTERNATIONAL EFFORTS.—The President shall take the necessary steps—

(1) to seek to obtain the agreement of other countries and of international financial institutions and multilateral organizations to provide to a transition government in Cuba, and to a democratically elected government in Cuba, assistance comparable to that provided by the United States under this Act; and

H. R. 927—24

(2) to work with such countries, institutions, and organizations to coordinate all such assistance programs. (f) COMMUNICATION WITH THE CUBAN PEOPLE.—The President

shall take the necessary steps to communicate to the Cuban people the plan for assistance developed under this section.

(g) REPORT TO CONGRESS.—Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, the President shall transmit to the appropriate congressional committees a report describing in detail the plan developed under this section.

(h) REPORT ON TRADE AND INVESTMENT RELATIONS.— (1) REPORT TO CONGRESS.—The President, following the transmittal to the Congress of a determination under section 203(c)(3) that a democratically elected government in Cuba is in power, shall submit to the Committee on Ways and Means of the House of Representatives and the Committee on Finance of the Senate and the appropriate congressional committees

a report that describes— (A) acts, policies, and practices which constitute signifi-

cant barriers to, or distortions of, United States trade in goods or services or foreign direct investment with respect to Cuba;

(B) policy objectives of the United States regarding trade relations with a democratically elected government in Cuba, and the reasons therefor, including possible—

(i) reciprocal extension of nondiscriminatory trade treatment (most-favored-nation treatment);

(ii) designation of Cuba as a beneficiary developing country under title V of the Trade Act of 1974 (relating to the Generalized System of Preferences) or as a beneficiary country under the Caribbean Basin Economic Recovery Act, and the implications of such designation with respect to trade with any other country that is such a beneficiary developing country or beneficiary country or is a party to the North American Free Trade Agreement; and

(iii) negotiations regarding free trade, including the accession of Cuba to the North American Free Trade Agreement; (C) specific trade negotiating objectives of the United

States with respect to Cuba, including the objectives described in section 108(b)(5) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act (19 U.S.C. 3317(b)(5)); and

(D) actions proposed or anticipated to be undertaken, and any proposed legislation necessary or appropriate, to achieve any of such policy and negotiating objectives. (2) CONSULTATION.—The President shall consult with the

Committee on Ways and Means of the House of Representatives and the Committee on Finance of the Senate and the appropriate congressional committees and shall seek advice from the appropriate advisory committees established under section 135 of the Trade Act of 1974 regarding the policy and negotiating objectives and the legislative proposals described in paragraph (1).

H. R. 927—25 SEC. 203. COORDINATION OF ASSISTANCE PROGRAM; IMPLEMENTATION AND REPORTS TO CONGRESS; REPROGRAMMING.

(a) COORDINATING OFFICIAL.—The President shall designate a coordinating official who shall be responsible for—

(1) implementing the strategy for distributing assistance described in section 202(b);

(2) ensuring the speedy and efficient distribution of such assistance; and

(3) ensuring coordination among, and appropriate oversight by, the agencies of the United States that provide assistance described in section 202(b), including resolving any disputes among such agencies. (b) UNITED STATES-CUBA COUNCIL.—Upon making a determina-

tion under subsection (c)(3) that a democratically elected govern- ment in Cuba is in power, the President, after consultation with the coordinating official, is authorized to designate a United States- Cuba council—

(1) to ensure coordination between the United States Government and the private sector in responding to change in Cuba, and in promoting market-based development in Cuba; and

(2) to establish periodic meetings between representatives of the United States and Cuban private sectors for the purpose of facilitating bilateral trade. (c) IMPLEMENTATION OF PLAN; REPORTS TO CONGRESS.—

(1) IMPLEMENTATION WITH RESPECT TO TRANSITION GOVERN- MENT.—Upon making a determination that a transition govern- ment in Cuba is in power, the President shall transmit that determination to the appropriate congressional committees and shall, subject to an authorization of appropriations and subject to the availability of appropriations, commence the delivery and distribution of assistance to such transition government under the plan developed under section 202(b).

(2) REPORTS TO CONGRESS.—(A) The President shall trans- mit to the appropriate congressional committees a report setting forth the strategy for providing assistance described in section 202(b)(2) (A) and (C) to the transition government in Cuba under the plan of assistance developed under section 202(b), the types of such assistance, and the extent to which such assistance has been distributed in accordance with the plan.

(B) The President shall transmit the report not later than 90 days after making the determination referred to in para- graph (1), except that the President shall transmit the report in preliminary form not later than 15 days after making that determination.

(3) IMPLEMENTATION WITH RESPECT TO DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT.—The President shall, upon determining that a democratically elected government in Cuba is in power, submit that determination to the appropriate congressional committees and shall, subject to an authorization of appropri- ations and subject to the availability of appropriations, com- mence the delivery and distribution of assistance to such demo- cratically elected government under the plan developed under section 202(b).

(4) ANNUAL REPORTS TO CONGRESS.—Not later than 60 days after the end of each fiscal year, the President shall transmit to the appropriate congressional committees a report

H. R. 927—26

on the assistance provided under the plan developed under section 202(b), including a description of each type of assistance, the amounts expended for such assistance, and a description of the assistance to be provided under the plan in the current fiscal year.

(d) REPROGRAMMING.—Any changes in the assistance to be pro- vided under the plan developed under section 202(b) may not be made unless the President notifies the appropriate congressional committees at least 15 days in advance in accordance with the procedures applicable to reprogramming notifications under section 634A of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2394–1).

SEC. 204. TERMINATION OF THE ECONOMIC EMBARGO OF CUBA.

(a) **PRESIDENTIAL ACTIONS.**—Upon submitting a determination to the appropriate congressional committees under section 203(c)(1) that a transition government in Cuba is in power, the President, after consultation with the Congress, is authorized to take steps to suspend the economic embargo of Cuba and to suspend the right of action created in section 302 with respect to actions there- after filed against the Cuban Government, to the extent that such steps contribute to a stable foundation for a democratically elected government in Cuba.

(b) **SUSPENSION OF CERTAIN PROVISIONS OF LAW.**—In carrying out subsection (a), the President may suspend the enforcement

of— (1) section 620(a) of the Foreign Assistance Act of 1961

(22 U.S.C. 2370(a)); (2) section 620(f) of the Foreign Assistance Act of 1961

(22 U.S.C. 2370(f)) with respect to the “Republic of Cuba”; (3) sections 1704, 1705(d), and 1706 of the Cuban Democ-

racy Act of 1992 (22 U.S.C. 6003, 6004(d), and 6005); (4) section 902(c) of the Food Security Act of 1985; and (5) the prohibitions on transactions described in part 515

of title 31, Code of Federal Regulations.

(c) **ADDITIONAL PRESIDENTIAL ACTIONS.**—Upon submitting a determination to the appropriate congressional committees under section 203(c)(3) that a democratically elected government in Cuba is in power, the President shall take steps to terminate the economic embargo of Cuba, including the restrictions under part 515 of title 31, Code of Federal Regulations.

(d) **CONFORMING AMENDMENTS.**—On the date on which the President submits a determination under section 203(c)(3)—

(1) section 620(a) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2370(a)) is repealed;

(2) section 620(f) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2370(f)) is amended by striking “Republic of Cuba”; (3) sections 1704, 1705(d), and 1706 of the Cuban Democ- racy Act of 1992 (22 U.S.C. 6003, 6004(d), and 6005) are

repealed; and (4) section 902(c) of the Food Security Act of 1985 is

repealed. (e) **REVIEW OF SUSPENSION OF ECONOMIC EMBARGO.**—

(1) **REVIEW.**—If the President takes action under subsection (a) to suspend the economic embargo of Cuba, the President shall immediately so notify the Congress. The President shall report to the Congress no less frequently than every 6 months thereafter, until he submits a determination under section

H. R. 927—27

203(c)(3) that a democratically elected government in Cuba is in power, on the progress being made by Cuba toward the establishment of such a democratically elected government. The action of the President under subsection (a) shall cease to be effective upon the enactment of a joint resolution described in paragraph (2).

(2) **JOINT RESOLUTIONS.**—For purposes of this subsection, the term “joint resolution” means only a joint resolution of the 2 Houses of Congress, the matter after the resolving clause of which is as follows: “That the Congress disapproves the action of the President under section 204(a) of the Cuban Lib- erty and Democratic

Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 to suspend the economic embargo of Cuba, notice of which was submitted to the Congress on .'', with the blank space being filled with the appropriate date.

(3) REFERRAL TO COMMITTEES.—Joint resolutions introduced in the House of Representatives shall be referred to the Committee on International Relations and joint resolutions introduced in the Senate shall be referred to the Committee on Foreign Relations.

(4) PROCEDURES.—(A) Any joint resolution shall be considered in the Senate in accordance with the provisions of section 601(b) of the International Security Assistance and Arms Export Control Act of 1976.

(B) For the purpose of expediting the consideration and enactment of joint resolutions, a motion to proceed to the consideration of any joint resolution after it has been reported by the appropriate committee shall be treated as highly privileged in the House of Representatives.

(C) Not more than 1 joint resolution may be considered in the House of Representatives and the Senate in the 6-month period beginning on the date on which the President notifies the Congress under paragraph (1) of the action taken under subsection (a), and in each 6-month period thereafter.

SEC. 205. REQUIREMENTS AND FACTORS FOR DETERMINING A TRANSITION GOVERNMENT.

(a) REQUIREMENTS.—For the purposes of this Act, a transition government in Cuba is a government that—

(1) has legalized all political activity;

(2) has released all political prisoners and allowed for investigations of Cuban prisons by appropriate international human rights organizations;

(3) has dissolved the present Department of State Security in the Cuban Ministry of the Interior, including the Committees for the Defense of the Revolution and the Rapid Response Brigades; and

(4) has made public commitments to organizing free and fair elections for a new government—

(A) to be held in a timely manner within a period not to exceed 18 months after the transition government assumes power;

(B) with the participation of multiple independent political parties that have full access to the media on an equal basis, including (in the case of radio, television, or other telecommunications media) in terms of allotments

H. R. 927—28

of time for such access and the times of day such allotments are given; and

(C) to be conducted under the supervision of internationally recognized observers, such as the Organization of American States, the United Nations, and other election monitors; (5) has ceased any interference with Radio Marti or Tele-

vision Marti broadcasts; (6) makes public commitments to and is making demon-

strable progress in— (A) establishing an independent judiciary; (B) respecting internationally recognized human rights

and basic freedoms as set forth in the Universal Declaration of Human Rights, to which Cuba is a signatory nation; (C) allowing the establishment of independent trade unions as set forth in conventions 87 and 98 of the International Labor Organization, and allowing the establishment of independent social, economic, and political associations;

(7) does not include Fidel Castro or Raul Castro; and (8) has given adequate assurances that it will allow the

speedy and efficient distribution of assistance to the Cuban people. (b) ADDITIONAL FACTORS.—In addition to the requirements in

subsection (a), in determining whether a transition government in Cuba is in power, the President shall take into account the extent to which that government—

(1) is demonstrably in transition from a communist totalitarian dictatorship to representative democracy;

(2) has made public commitments to, and is making demonstrable progress in—

(A) effectively guaranteeing the rights of free speech and freedom of the press, including granting permits to privately owned media and telecommunications companies to operate in Cuba;

(B) permitting the reinstatement of citizenship to Cuban-born persons returning to Cuba;

(C) assuring the right to private property; and

(D) taking appropriate steps to return to United States citizens (and entities which are 50 percent or more beneficially owned by United States citizens) property taken by the Cuban Government from such citizens and entities on or after January 1, 1959, or to provide equitable compensation to such citizens and entities for such property; (3) has extradited or otherwise rendered to the United

States all persons sought by the United States Department of Justice for crimes committed in the United States; and (4) has permitted the deployment throughout Cuba of independent and unfettered international human rights mon-

itors. SEC. 206. REQUIREMENTS FOR DETERMINING A DEMOCRATICALLY

ELECTED GOVERNMENT.

For purposes of this Act, a democratically elected government in Cuba, in addition to meeting the requirements of section 205(a), is a government which—

(1) results from free and fair elections—

H. R. 927—29

(A) conducted under the supervision of internationally recognized observers; and

(B) in which— (i) opposition parties were permitted ample time

to organize and campaign for such elections; and (ii) all candidates were permitted full access to

the media; (2) is showing respect for the basic civil liberties and human

rights of the citizens of Cuba; (3) is substantially moving toward a market-oriented eco-

nomie system based on the right to own and enjoy property; (4) is committed to making constitutional changes that would ensure regular free and fair elections and the full enjoyment of basic civil liberties and human rights by the citizens

of Cuba; (5) has made demonstrable progress in establishing an

independent judiciary; and (6) has made demonstrable progress in returning to United

States citizens (and entities which are 50 percent or more beneficially owned by United States citizens) property taken by the Cuban Government from such citizens and entities on or after January 1, 1959, or providing full compensation for such property in accordance with international law standards and practice.

SEC. 207. SETTLEMENT OF OUTSTANDING UNITED STATES CLAIMS TO CONFISCATED PROPERTY IN CUBA.

(a) REPORT TO CONGRESS.—Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, the Secretary of State shall provide a report to the appropriate congressional committees containing an assessment of the property dispute question in Cuba, including—

(1) an estimate of the number and amount of claims to property confiscated by the Cuban Government that are held by United States nationals in addition to those claims certified under section 507 of the International Claims Settlement Act of 1949;

(2) an assessment of the significance of promptly resolving confiscated property claims to the revitalization of the Cuban economy;

(3) a review and evaluation of technical and other assistance that the United States could provide to help either a transition government in Cuba or a democratically elected government in Cuba establish mechanisms to resolve property questions;

(4) an assessment of the role and types of support the United States could provide to help resolve claims to property confiscated by the Cuban Government that are held by United States nationals who did not receive or qualify for certification under section 507 of the International Claims Settlement Act of 1949; and

(5) an assessment of any areas requiring legislative review or action regarding the resolution of property claims in Cuba prior to a change of government in Cuba. (d) SENSE OF CONGRESS.—It is the sense of the Congress that

the satisfactory resolution of property claims by a Cuban Government recognized by the United States remains an essential condition

H. R. 927—30 for the full resumption of economic and diplomatic relations between

the United States and Cuba.

TITLE III—PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF UNITED STATES NATIONALS

SEC. 301. FINDINGS.

The Congress makes the following findings: (1) Individuals enjoy a fundamental right to own and enjoy

property which is enshrined in the United States Constitution. (2) The wrongful confiscation or taking of property belonging to United States nationals by the Cuban Government, and the subsequent exploitation of this property at the expense of the rightful owner, undermines the comity of nations, the

free flow of commerce, and economic development. (3) Since Fidel Castro seized power in Cuba in 1959— (A) he has trampled on the fundamental rights of the

Cuban people; and (B) through his personal despotism, he has confiscated

the property of— (i) millions of his own citizens;

(ii) thousands of United States nationals; and

(iii) thousands more Cubans who claimed asylum in the United States as refugees because of persecution and later became naturalized citizens of the United States.

(4) It is in the interest of the Cuban people that the Cuban Government respect equally the property rights of Cuban nationals and nationals of other countries.

(5) The Cuban Government is offering foreign investors the opportunity to purchase an equity interest in, manage, or enter into joint ventures using property and assets some of which were confiscated from United States nationals.

(6) This “trafficking” in confiscated property provides badly needed financial benefit, including hard currency, oil, and productive investment and expertise, to the current Cuban Government and thus undermines the foreign policy of the United States—

(A) to bring democratic institutions to Cuba through the pressure of a general economic embargo at a time when the Castro regime has proven to be vulnerable to international economic pressure; and

(B) to protect the claims of United States nationals who had property wrongfully confiscated by the Cuban Government. (7) The United States Department of State has notified

other governments that the transfer to third parties of properties confiscated by the Cuban Government “would complicate any attempt to return them to their original owners”.

(8) The international judicial system, as currently structured, lacks fully effective remedies for the wrongful confiscation of property and for unjust enrichment from the use of wrongfully confiscated property by governments and private entities at the expense of the rightful owners of the property.

H. R. 927—31

(9) International law recognizes that a nation has the ability to provide for rules of law with respect to conduct outside its territory that has or is intended to have substantial effect within its territory.

(10) The United States Government has an obligation to its citizens to provide protection against wrongful confiscations by foreign nations and their citizens, including the provision of private remedies.

(11) To deter trafficking in wrongfully confiscated property, United States nationals who were the victims of these confiscations should be endowed with a judicial remedy in the courts of the United States that would deny traffickers any profits from economically exploiting Castro’s wrongful seizures.

SEC. 302. LIABILITY FOR TRAFFICKING IN CONFISCATED PROPERTY CLAIMED BY UNITED

STATES NATIONALS.

(a) CIVIL REMEDY.— (1) LIABILITY FOR TRAFFICKING.—(A) Except as otherwise

provided in this section, any person that, after the end of the 3-month period beginning on the effective date of this title, traffics in property which was confiscated by the Cuban Government on or after January 1, 1959, shall be liable to any United States national who owns the claim to such property for money damages in an amount equal to the sum of—

(i) the amount which is the greater of— (I) the amount, if any, certified to the claimant

by the Foreign Claims Settlement Commission under the International Claims Settlement Act of 1949, plus interest;

(II) the amount determined under section 303(a)(2), plus interest; or

(III) the fair market value of that property, calculated as being either the current value of the property, or the value of the property when confiscated plus interest, whichever is greater; and (ii) court costs and reasonable attorneys' fees.

(B) Interest under subparagraph (A)(i) shall be at the rate set forth in section 1961 of title 28, United States Code, computed by the court from the date of confiscation of the property involved to the date on which the action is brought under this subsection.

(2) PRESUMPTION IN FAVOR OF THE CERTIFIED CLAIMS.— There shall be a presumption that the amount for which a person is liable under clause (i) of paragraph (1)(A) is the amount that is certified as described in subclause (I) of that clause. The presumption shall be rebuttable by clear and convincing evidence that the amount described in subclause (II) or (III) of that clause is the appropriate amount of liability under that clause.

(3) INCREASED LIABILITY.—(A) Any person that traffics in confiscated property for which liability is incurred under paragraph (1) shall, if a United States national owns a claim with respect to that property which was certified by the Foreign Claims Settlement Commission under title V of the International Claims Settlement Act of 1949, be liable for damages computed in accordance with subparagraph (C).

H. R. 927—32

(B) If the claimant in an action under this subsection (other than a United States national to whom subparagraph (A) applies) provides, after the end of the 3-month period described in paragraph (1) notice to—

(i) a person against whom the action is to be initiated, or

(ii) a person who is to be joined as a defendant in the action,

at least 30 days before initiating the action or joining such person as a defendant, as the case may be, and that person, after the end of the 30-day period beginning on the date the notice is provided, traffics in the confiscated property that is the subject of the action, then that person shall be liable to that claimant for damages computed in accordance with subparagraph (C).

(C) Damages for which a person is liable under subparagraph (A) or subparagraph (B) are money damages in an amount equal to the sum of—

(i) the amount determined under paragraph (1)(A)(ii),

and (ii) 3 times the amount determined applicable under

paragraph (1)(A)(i). (D) Notice to a person under subparagraph (B)—

(i) shall be in writing;

(ii) shall be posted by certified mail or personally delivered to the person; and

(iii) shall contain— (I) a statement of intention to commence the action

under this section or to join the person as a defendant (as the case may be), together with the reasons there-

for; (II) a demand that the unlawful trafficking in the

claimant's property cease immediately; and (III) a copy of the summary statement published

under paragraph (8). (4) APPLICABILITY.—(A) Except as otherwise provided in

this paragraph, actions may be brought under paragraph (1) with respect to property confiscated before, on, or after the date of the enactment of this Act.

(B) In the case of property confiscated before the date of the enactment of this Act, a United States national may not bring an action under this section on a claim to the confiscated property unless such national acquires ownership of the claim before such date of enactment.

(C) In the case of property confiscated on or after the date of the enactment of this Act, a United States national who, after the property is confiscated, acquires ownership of a claim to the property by assignment for value, may not bring an action on the claim under this section.

(5) TREATMENT OF CERTAIN ACTIONS.—(A) In the case of a United States national who was eligible to file a claim with the Foreign Claims Settlement Commission under title V of the International Claims Settlement Act of 1949 but did not so file the claim, that United States national may not bring an action on that claim under this section.

(B) In the case of any action brought under this section by a United States national whose underlying claim in the

H. R. 927—33

action was timely filed with the Foreign Claims Settlement Commission under title V of the International Claims Settlement Act of 1949 but was denied by the Commission, the court shall accept the findings of the Commission on the claim as conclusive in the action under this section.

(C) A United States national, other than a United States national bringing an action under this section on a claim certified under title V of the International Claims Settlement Act of 1949, may not bring an action on a claim under this section before the end of the 2-year period beginning on the date of the enactment of this Act.

(D) An interest in property for which a United States national has a claim certified under title V of the International Claims Settlement Act of 1949 may not be the subject of a claim in an action under this section by any other person. Any person bringing an action under this section whose claim has not been so certified shall have the burden of establishing for the court that the interest in property that is the subject of the claim is not the subject of a claim so certified.

(6) INAPPLICABILITY OF ACT OF STATE DOCTRINE.—No court of the United States shall decline, based upon the act of state doctrine, to make a determination on the merits in an action brought under paragraph (1) .

(7) LICENSES NOT REQUIRED.—(A) Notwithstanding any other provision of law, an action under this section may be brought and may be settled, and a judgment rendered in such action may be enforced, without obtaining any license or other permission from any agency of the United States, except that this paragraph shall not apply to the execution of a judgment against, or the settlement of actions involving, property blocked under the authorities of section 5(b) of the Trading with the Enemy Act that were being exercised on July 1, 1977, as a result of a national emergency declared by the President before such date, and are being exercised on the date of the enactment of this Act.

(B) Notwithstanding any other provision of law, and for purposes of this title only, any claim against the Cuban Govern- ment shall not be deemed to be an interest in property the transfer of which to a United States national required before the enactment of this Act, or requires after the enactment of this Act, a license issued by, or the permission of, any agency of the United States.

(8) PUBLICATION BY ATTORNEY GENERAL.—Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the Attorney General shall prepare and publish in the Federal Register a concise summary of the provisions of this title, including a statement of the liability under this title of a person traffick- ing in confiscated property, and the remedies available to United States nationals under this title. (b) AMOUNT IN CONTROVERSY.—An action may be brought under

this section by a United States national only where the amount in controversy exceeds the sum or value of \$50,000, exclusive of interest, costs, and attorneys' fees. In calculating \$50,000 for pur- poses of the preceding sentence, the applicable amount under subclause (I), (II), or (III) of subsection (a)(1)(A)(i) may not be tripled as provided in subsection (a)(3).

(c) PROCEDURAL REQUIREMENTS.—

H. R. 927—34

(1) IN GENERAL.—Except as provided in this title, the provi- sions of title 28, United States Code, and the rules of the courts of the United States apply to actions under this section to the same extent as such provisions and rules apply to any other action brought under section 1331 of title 28, United States Code.

(2) SERVICE OF PROCESS.—In an action under this section, service of process on an agency or instrumentality of a foreign state in the conduct of a commercial activity, or against individ- uals acting under color of law, shall be made in accordance with section 1608 of title 28, United States Code. (d) ENFORCEABILITY OF JUDGMENTS AGAINST CUBAN GOVERN-

MENT.—In an action brought under this section, any judgment against an agency or instrumentality of the Cuban Government shall not be enforceable against an agency or instrumentality of either a transition government in Cuba or a democratically elected government in Cuba.

(e) CERTAIN PROPERTY IMMUNE FROM EXECUTION.—Section 1611 of title 28, United States Code, is amended by adding at the end the following new subsection:

“(c) Notwithstanding the provisions of section 1610 of this chap- ter, the property of a foreign state shall be immune from attachment and from execution in an action brought under section 302 of the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 to the extent that the property is a facility or installation used by an accredited diplomatic mission for official purposes.”.

(f) ELECTION OF REMEDIES.— (1) ELECTION.—Subject to paragraph (2)—

(A) any United States national that brings an action under this section may not bring any other civil action or proceeding under the common law, Federal law, or the law of any of the several States, the District of Columbia, or any commonwealth, territory, or possession of the United States, that seeks monetary or nonmonetary compensation by reason of the same subject matter; and

(B) any person who brings, under the common law or any provision of law other than this section, a civil action or proceeding for monetary or nonmonetary compensation arising out of a claim for which an action would otherwise be cognizable under this section may not bring an action under this section on that claim. (2) TREATMENT OF CERTIFIED CLAIMANTS.—(A) In the case

of any United States national that brings an action under this section based on a claim certified under title V of the International Claims Settlement Act of 1949—

(i) if the recovery in the action is equal to or greater than the amount of the certified claim, the United States national may not receive payment on the claim under any agreement entered into between the United States and Cuba settling claims covered by such title, and such national shall be deemed to have discharged the United States from any further responsibility to represent the United States national with respect to that claim;

(ii) if the recovery in the action is less than the amount of the certified claim, the United States national may receive payment under a claims agreement described in clause (i) but only to the extent of the difference between

H. R. 927—35

the amount of the recovery and the amount of the certified claim; and

(iii) if there is no recovery in the action, the United States national may receive payment on the certified claim under a claims agreement described in clause (i) to the same extent as any certified claimant who does not bring an action under this section. (B) In the event some or all actions brought under this

section are consolidated by judicial or other action in such manner as to create a pool of assets available to satisfy the claims in such actions, including a pool of assets in a proceeding in bankruptcy, every claimant whose claim in an action so consolidated was certified by the Foreign Claims Settlement Commission under title V of the International Claims Settlement Act of 1949 shall be entitled to payment in full of its claim from the assets in such pool before any payment is made from the assets in such pool with respect to any claim not so certified.

(g) DEPOSIT OF EXCESS PAYMENTS BY CUBA UNDER CLAIMS AGREEMENT.—Any amounts paid by Cuba under any agreement entered into between the United States and Cuba settling certified claims under title V of the International Claims Settlement Act of 1949 that are in excess of the payments made on such certified claims after the application of subsection (f) shall be deposited into the United States Treasury.

(h) TERMINATION OF RIGHTS.— (1) IN GENERAL.—All rights created under this section to

bring an action for money damages with respect to property confiscated by the Cuban Government—

(A) may be suspended under section 204(a); and

(B) shall cease upon transmittal to the Congress of a determination of the President under section 203(c)(3) that a democratically elected government in Cuba is in power. (2) PENDING SUITS.—The suspension or termination of

rights under paragraph (1) shall not affect suits commenced before the date of such suspension or termination (as the case may be), and in all such suits, proceedings shall be had, appeals taken, and judgments rendered in the same manner and with the same effect as if the suspension or termination had not occurred.

(i) IMPOSITION OF FILING FEES.—The Judicial Conference of the United States shall establish a uniform fee that shall be imposed upon the plaintiff or plaintiffs in each action brought under this section. The fee should be established at a level sufficient to recover the costs to the courts of actions brought under this section. The fee under this subsection is in addition to any other fees imposed under title 28, United States Code.

SEC. 303. PROOF OF OWNERSHIP OF CLAIMS TO CONFISCATED PROPERTY.

(a) EVIDENCE OF OWNERSHIP.— (1) CONCLUSIVENESS OF CERTIFIED CLAIMS.—In any action

brought under this title, the court shall accept as conclusive proof of ownership of an interest in property a certification of a claim to ownership of that interest that has been made by the Foreign Claims Settlement Commission under title V

H. R. 927—36

of the International Claims Settlement Act of 1949 (22 U.S.C. 1643 and following).

(2) CLAIMS NOT CERTIFIED.—If in an action under this title a claim has not been so certified by the Foreign Claims Settlement Commission, the court may appoint a special master, including the Foreign Claims Settlement Commission, to make determinations regarding the amount and ownership of the claim. Such determinations are only for evidentiary purposes in civil actions brought under this title and do not constitute certifications under title V of the International Claims Settlement Act of 1949.

(3) EFFECT OF DETERMINATIONS OF FOREIGN OR INTERNATIONAL ENTITIES.—In determining the amount or ownership of a claim in an action under this title, the court shall not accept as conclusive evidence any findings, orders, judgments, or decrees from administrative agencies or courts of foreign countries or international organizations that declare the value of or invalidate the claim, unless the declaration of value or invalidation was found pursuant to binding international arbitration to which the United States or the claimant submitted the claim. (b) AMENDMENT OF THE INTERNATIONAL CLAIMS SETTLEMENT

ACT OF 1949.—Title V of the International Claims Settlement Act of 1949 (22 U.S.C. 1643 and following) is amended by adding at the end the following new section:

“DETERMINATION OF OWNERSHIP OF CLAIMS REFERRED BY DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES

“SEC. 514. Notwithstanding any other provision of this Act and only for purposes of section 302 of the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, a United States district court, for fact-finding purposes, may refer to the Commission, and the Commission may determine, questions of the amount and ownership of a claim by a United States national (as defined in section 4 of the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996), resulting from the confiscation of property by the Government of Cuba described in section 503(a), whether or not the United States national qualified as a national of the United States (as defined in section 502(1)) at the time of the action by the Government of Cuba.”.

(c) RULE OF CONSTRUCTION.—Nothing in this Act or in section 514 of the International Claims Settlement Act of 1949, as added by subsection (b), shall be construed—

(1) to require or otherwise authorize the claims of Cuban nationals who became United States citizens after their property was confiscated to be included in the claims certified to the Secretary of State by the Foreign Claims Settlement Commission for purposes of future negotiation and espousal of claims with a friendly government in Cuba when diplomatic relations are restored; or

(2) as superseding, amending, or otherwise altering certifications that have been made under title V of the International Claims Settlement Act of 1949 before the date of the enactment of this Act.

H. R. 927—37 SEC. 304. EXCLUSIVITY OF FOREIGN CLAIMS SETTLEMENT COMMISSION CERTIFICATION PROCEDURE.

Title V of the International Claims Settlement Act of 1949 (22 U.S.C. 1643 and following), as amended by section 303, is further amended by adding at the end the following new section:

“EXCLUSIVITY OF FOREIGN CLAIMS SETTLEMENT COMMISSION CERTIFICATION PROCEDURE

“SEC. 515. (a) Subject to subsection (b), neither any national of the United States who was eligible to file a claim under section 503 but did not timely file such claim under that section, nor any person who was ineligible to file a claim under section 503, nor any national of Cuba, including any agency, instrumentality, subdivision, or enterprise of the Government of Cuba or any local government of Cuba, nor any successor thereto, whether or not recognized by the United States, shall have a claim to, participate in, or otherwise have an interest in, the compensation proceeds or nonmonetary compensation paid or allocated to a national of the United States by virtue of a claim certified by the Commission under section 507, nor shall any district court of the United States have jurisdiction to adjudicate any such claim.

“(b) Nothing in subsection (a) shall be construed to detract from or otherwise affect any rights in the shares of capital stock of nationals of the United States owning claims certified by the Commission under section 507.”.

SEC. 305. LIMITATION OF ACTIONS.

An action under section 302 may not be brought more than 2 years after the trafficking giving rise to the action has ceased to occur.

SEC. 306. EFFECTIVE DATE.

(a) IN GENERAL.—Subject to subsections (b) and (c), this title and the amendments made by this title shall take effect on August 1, 1996.

(b) SUSPENSION AUTHORITY.—(1) SUSPENSION AUTHORITY.—The President may suspend

the effective date under subsection (a) for a period of not more than 6 months if the President determines and reports in writing to the appropriate congressional committees at least 15 days before such effective date that the suspension is necessary to the national interests of the United States and will expedite a transition to democracy in Cuba.

(2) ADDITIONAL SUSPENSIONS.—The President may suspend the effective date under subsection (a) for additional periods of not more than 6 months each, each of which shall begin on the day after the last day of the period during which a suspension is in effect under this subsection, if the President determines and reports in writing to the appropriate congressional committees at least 15 days before the date on which the additional suspension is to begin that the suspension is necessary to the national interests of the United States

and will expedite a transition to democracy in Cuba. (c) OTHER AUTHORITIES.—

(1) SUSPENSION.—After this title and the amendments of this title have taken effect—

H. R. 927—38

(A) no person shall acquire a property interest in any potential or pending action under this title; and

(B) the President may suspend the right to bring an action under this title with respect to confiscated property for a period of not more than 6 months if the President determines and reports in writing to the appropriate congressional committees at least 15 days before the suspension takes effect that such suspension is necessary to the national interests of the United States and will expedite a transition to democracy in Cuba. (2) ADDITIONAL SUSPENSIONS.—The President may suspend

the right to bring an action under this title for additional periods of not more than 6 months each, each of which shall begin on the day after the last day of the period during which a suspension is in effect under this subsection, if the President determines and reports in writing to the appropriate congressional committees at least 15 days before the date on which the additional suspension is to begin that the suspension is necessary to the national interests of the United States and will expedite a transition to democracy in Cuba.

(3) PENDING SUITS.—The suspensions of actions under paragraph (1) shall not affect suits commenced before the date of such suspension, and in all such suits, proceedings shall be had, appeals taken, and judgments rendered in the same manner and with the same effect as if the suspension had not occurred. (d) RESCISSION OF SUSPENSION.—The President may rescind

any suspension made under subsection (b) or (c) upon reporting to the appropriate congressional committees that doing so will expedite a transition to democracy in Cuba.

TITLE IV—EXCLUSION OF CERTAIN ALIENS

SEC. 401. EXCLUSION FROM THE UNITED STATES OF ALIENS WHO HAVE CONFISCATED PROPERTY OF UNITED STATES NATIONALS OR WHO TRAFFIC IN SUCH PROPERTY.

(a) GROUNDS FOR EXCLUSION.—The Secretary of State shall deny a visa to, and the Attorney General shall exclude from the United States, any alien who the Secretary of State determines is a person who, after the date of the enactment of this Act—

(1) has confiscated, or has directed or overseen the confiscation of, property a claim to which is owned by a United States national, or converts or has converted for personal gain confiscated property, a claim to which is owned by a United States national;

(2) traffics in confiscated property, a claim to which is owned by a United States national;

(3) is a corporate officer, principal, or shareholder with a controlling interest of an entity which has been involved in the confiscation of property or trafficking in confiscated property, a claim to which is owned by a United States national; or

(4) is a spouse, minor child, or agent of a person excludable under paragraph (1), (2), or (3).

H. R. 927—39

(b) DEFINITIONS.—As used in this section, the following terms have the following meanings:

(1) CONFISCATED; CONFISCATION.—The terms “confiscated” and “confiscation” refer to—

(A) the nationalization, expropriation, or other seizure by the Cuban Government of ownership or control of prop-

erty— (i) without the property having been returned or

adequate and effective compensation provided; or (ii) without the claim to the property having been settled pursuant to an international claims settlement agreement or other mutually accepted settlement

procedure; and

(B) the repudiation by the Cuban Government of, the default by the Cuban Government on, or the failure of the Cuban Government to pay—

(i) a debt of any enterprise which has been nationalized, expropriated, or otherwise taken by the Cuban Government;

(ii) a debt which is a charge on property national- ized, expropriated, or otherwise taken by the Cuban Government; or

(iii) a debt which was incurred by the Cuban Government in satisfaction or settlement of a con- fiscated property claim.

(2) TRAFFICS.—(A) Except as provided in subparagraph (B), a person “traffics” in confiscated property if that person know- ingly and intentionally—

(i)(I) transfers, distributes, dispenses, brokers, or other- wise disposes of confiscated property,

(II) purchases, receives, obtains control of, or otherwise acquires confiscated property, or

(III) improves (other than for routine maintenance), invests in (by contribution of funds or anything of value, other than for routine maintenance), or begins after the date of the enactment of this Act to manage, lease, possess, use, or hold an interest in confiscated property,

(ii) enters into a commercial arrangement using or otherwise benefiting from confiscated property, or

(iii) causes, directs, participates in, or profits from, trafficking (as described in clause (i) or (ii)) by another person, or otherwise engages in trafficking (as described in clause (i) or (ii)) through another person,

without the authorization of any United States national who holds a claim to the property.

(B) The term “traffics” does not include— (i) the delivery of international telecommunication sig-

nals to Cuba; (ii) the trading or holding of securities publicly traded

or held, unless the trading is with or by a person deter- mined by the Secretary of the Treasury to be a specially designated national;

(iii) transactions and uses of property incident to lawful travel to Cuba, to the extent that such transactions and uses of property are necessary to the conduct of such travel; or

(iv) transactions and uses of property by a person who is both a citizen of Cuba and a resident of Cuba, and who is not an official of the Cuban Government or the ruling political party in Cuba.

(c) EXEMPTION.—This section shall not apply where the Secretary of State finds, on a case by case basis, that the entry into the United States of the person who would otherwise be excluded under this section is necessary for medical reasons or for purposes of litigation of an action under title III.

(d) EFFECTIVE DATE.— (1) IN GENERAL.—This section applies to aliens seeking to enter the United States on or after the date of the enactment of this Act.

(2) TRAFFICKING.—This section applies only with respect to acts within the meaning of “traffics” that occur on or after the date of the enactment of this Act.

Speaker of the House of Representatives.

Vice President of the United States and President of the Senate.